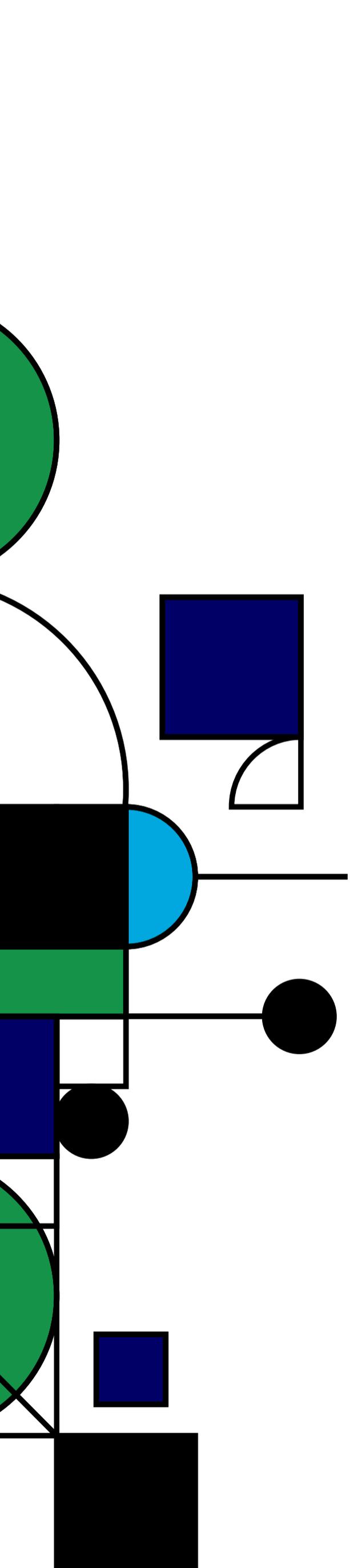


Agenda
de valor
público
2023

Antioquia

UNIVERSIDAD
EAFIT

VIRIDIAN | INNOVACIÓN



Contenido

Presentación 5

Capítulo 1

Sociedad y dilemas de la democracia 6

Seguridad en Antioquia: un tema ineludible.
Retos para el próximo cuatrienio 7

Conversar para confiar: Medellín y Antioquia
deben usar el diálogo social y la cultura
ciudadana para recuperar la confianza
ciudadana e institucional 28

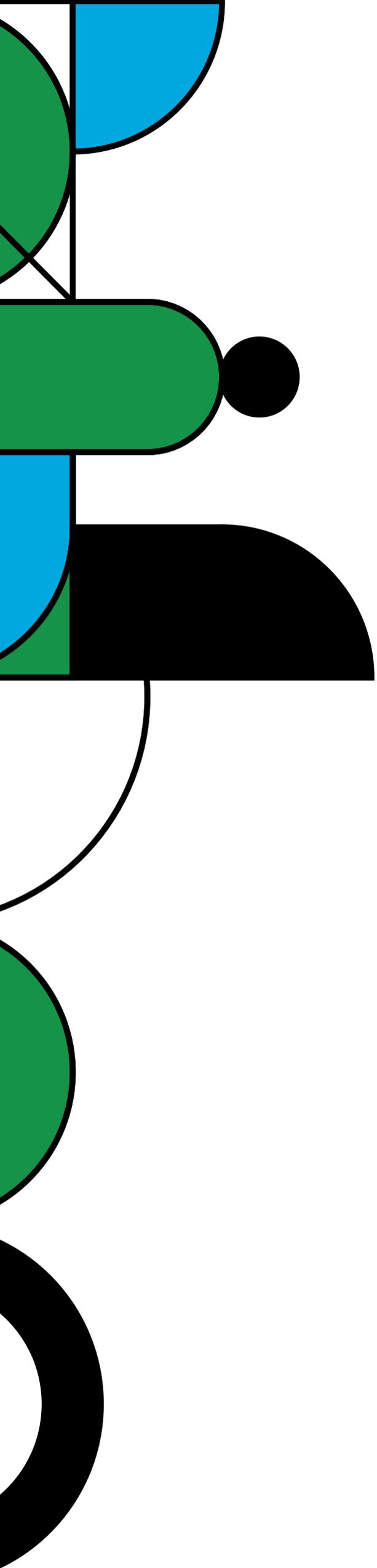
3 claves para la gobernanza y la
administración pública en Antioquia 39

Capítulo 2

Sostenibilidad del Planeta 43

Procesos para la transformación y el
desarrollo territorial de las subregiones
y los territorios rurales: una deuda en la
construcción de equidad 44

Adaptación al cambio climático y
equidad territorial 50



Calidad del hábitat rural: principal problema de la vivienda en Antioquia 53

Antioquia, faro dinamizador de la transición energética nacional implementando estrategias de conversión energética y adaptación al cambio climático 56

Capítulo 3

Futuros de la educación 60

La oportunidad de imaginar y co-crear futuros posibles y deseables 61

Calidad e innovación educativa 64

Acceso y cobertura rural 67

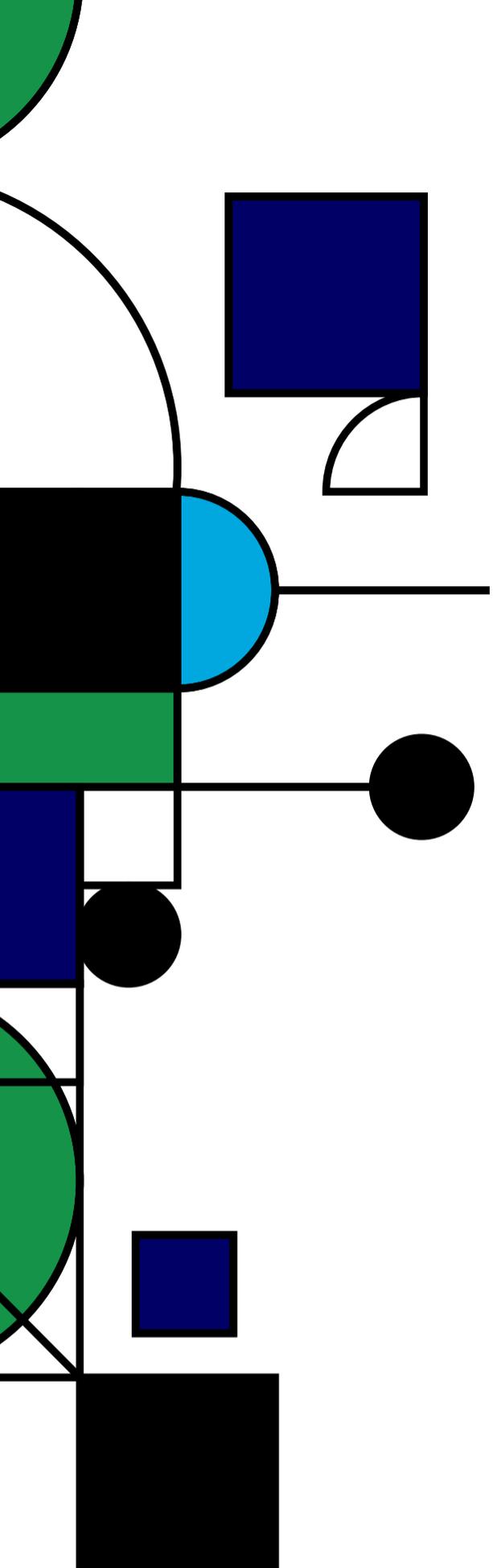
Educación para los empleos del futuro 70

Liderazgo y educación 73

Capítulo 4

Cuidado y bienestar 78

Apuntes para la superación de la pobreza en Antioquia 79



La salud: uno de los principales determinantes de la calidad de vida de los ciudadanos

84

Capítulo 5

Los retos de género

91

Capítulo 6

Ciencia, tecnología e innovación

103

Ciencia

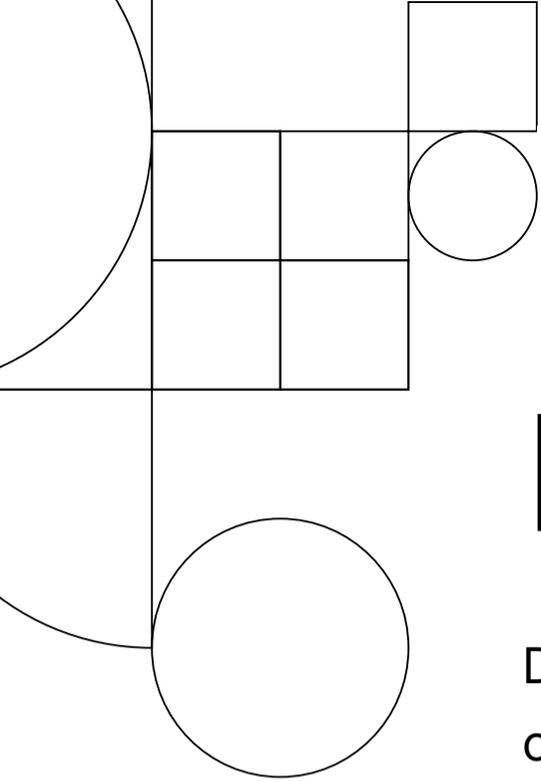
104

Tecnología

107

Innovación

110



Presentación

Desde la Universidad EAFIT, como comunidad de conocimientos y saberes aplicados para la solución de problemas, queremos entregarle evidencia científica y recomendaciones de política pública divididas en seis capítulos: Sociedad y dilemas de la democracia, Sostenibilidad del planeta, Futuros de la educación, Cuidado y bienestar, Los retos de género, y Ciencia, tecnología e innovación.

EAFIT ha demostrado su capacidad para leer entornos y conectarnos con las preguntas esenciales, a través de la conversación permanente con organizaciones de todos los sectores, para diseñar soluciones a los mayores desafíos de nuestra sociedad. En este propósito, las agendas de corto y mediano plazo son fundamentales, pues ayudan a trazar esos horizontes.

Estas propuestas son producto de años de investigación, experimentación y validación de nuestros profesores afiliados a los centros de estudio e incidencia y grupos de investigación, y constituyen un aporte académico para la construcción de sus programas y propuestas de gobierno.

Capítulo 1

Sociedad y dilemas de la democracia

Hoy, más que nunca, ante un cambio de época que exige nuevos paradigmas, el diálogo entre saberes es urgente para dar solución a los problemas y desafíos que nos atraviesan como humanidad, entre los que están los asuntos relacionados con la democracia, la seguridad y los dilemas sociales.

Seguridad en Antioquia: un tema ineludible. Retos para el próximo cuatrienio

Autores

Santiago Tobón

Profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, y coordinador e investigador de la línea de Seguridad y justicia en Valor Público, Centro de Estudios e Incidencia de EAFIT.

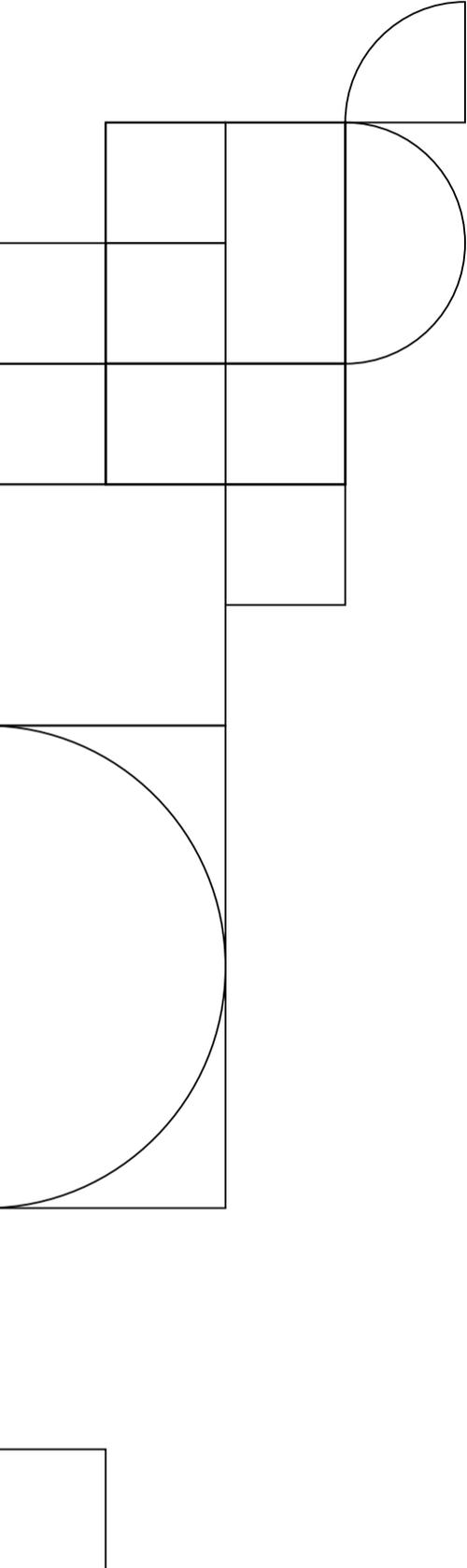
Martín Vanegas-Arias

Investigador asociado a la línea de Seguridad y justicia de Valor Público EAFIT.

Camila Bedoya

Asistente de investigación de la Línea de Seguridad y Justicia de Valor Público EAFIT.

Antioquia se ha visto empañada por la omnipresente influencia de los grupos de delincuencia organizada y las economías ilegales asociadas a estos. Estas redes criminales se dedican a una amplia gama de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas. Su presencia en las zonas rurales ha creado un clima de miedo e inestabilidad que pone en peligro la vida y los medios de subsistencia de la población local. Estas comunidades, ya de por sí marginadas y económicamente vulnerables, se llevan la peor parte de las operaciones delictivas que explotan sus recursos y perpetúan la violencia.

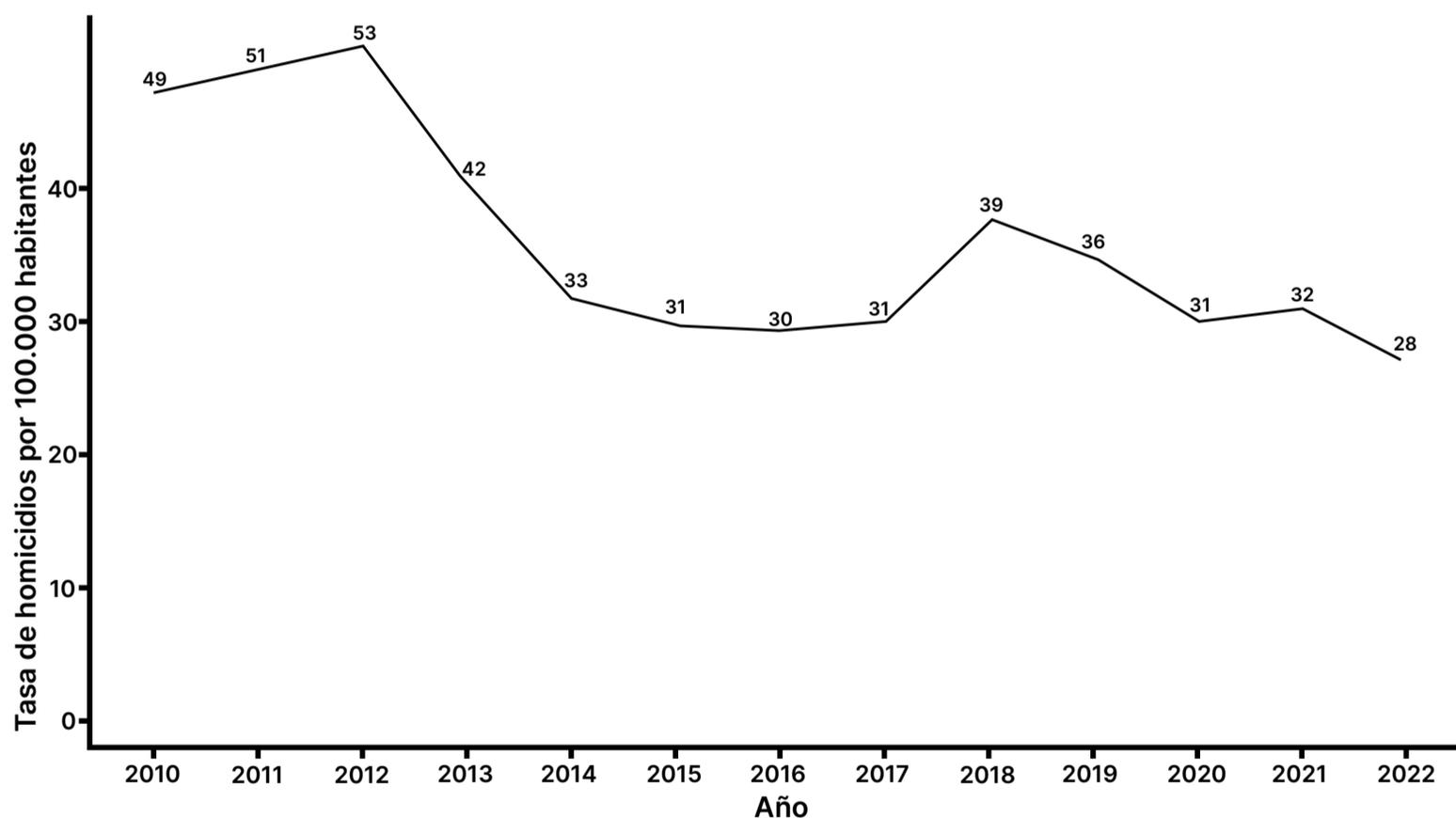


Las consecuencias de la delincuencia organizada y las economías ilícitas son especialmente pronunciadas en las regiones rurales de Antioquia. Estas zonas, a menudo dependientes de la agricultura, la minería y otras industrias tradicionales, se han convertido en caldo de cultivo para la actividad criminal. La alta prevalencia de homicidios es una realidad que no sólo se cobra vidas, sino que también genera una percepción generalizada de inseguridad, trauma y desesperación en estas comunidades. La violencia persistente y la pérdida de vidas obstaculizan la cohesión social necesaria para el desarrollo sostenible y despojan a la región de su inmenso potencial. A la luz de estos desafíos, es imperativo que la próxima administración adopte un enfoque múltiple para abordar la seguridad ciudadana en las zonas rurales de Antioquia. Este documento pretende proponer ideas sobre los temas críticos alrededor del crimen organizado, las economías ilegales y los homicidios, y proporcionar ideas útiles de cara al siguiente cuatrienio.

Panorama delictivo general de los últimos años

En este apartado se describe el panorama delictivo de Antioquia, teniendo en cuenta la tasa de homicidios, la tasa de hurtos a personas y la tasa de hurto de vehículos y motos por cada 100.000 habitantes, entre el período de 2010 a 2022.

Gráfica 1. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes

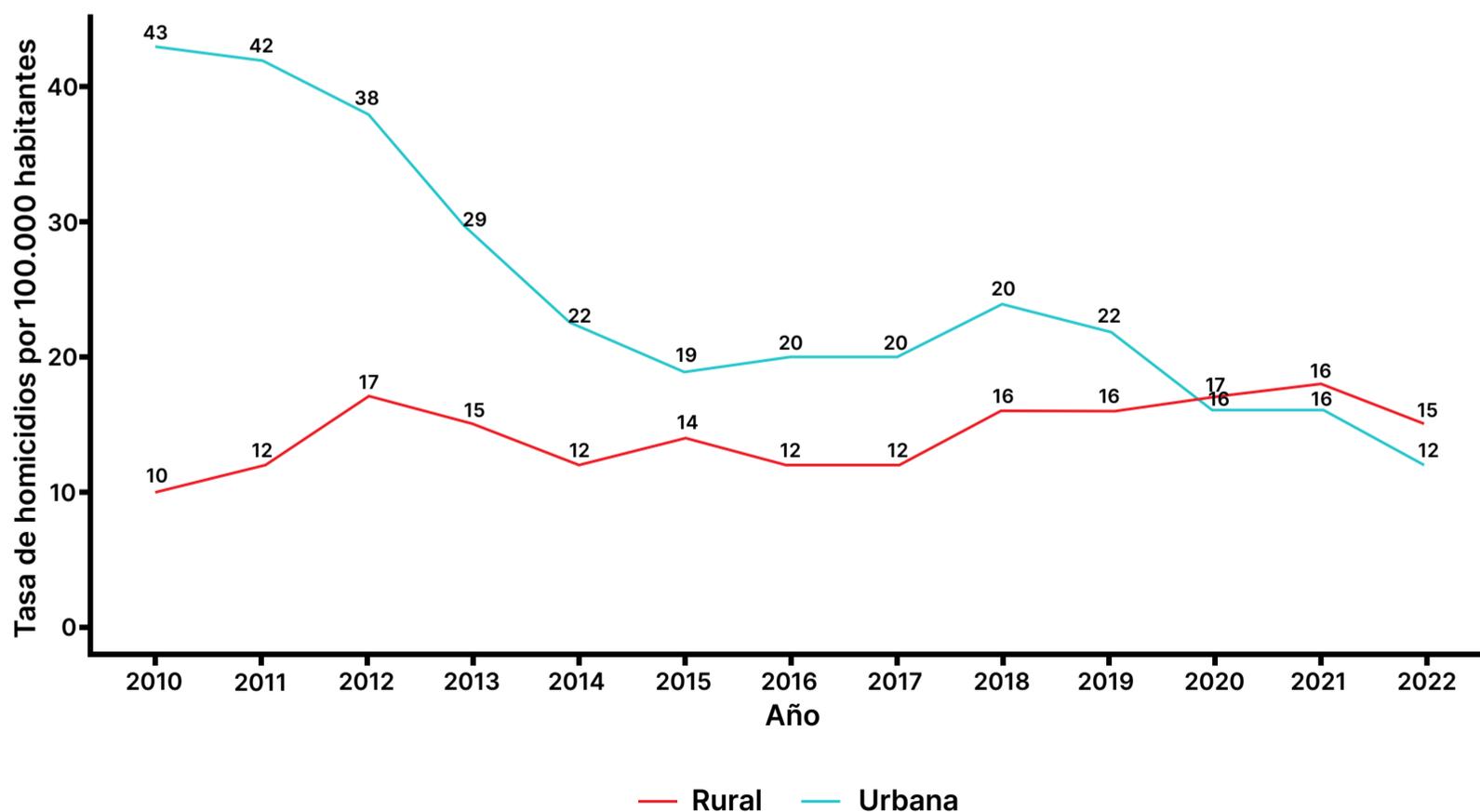


Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

En la gráfica 1 se muestra la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, entre 2010 y 2022 para Antioquia. La dinámica de este delito para el período entre 2012 y 2017 es decreciente, teniendo una variación de 22 puntos entre el primer y último año. En 2018 la tasa de homicidios incrementa a 39 puntos, no obstante, los años siguientes el

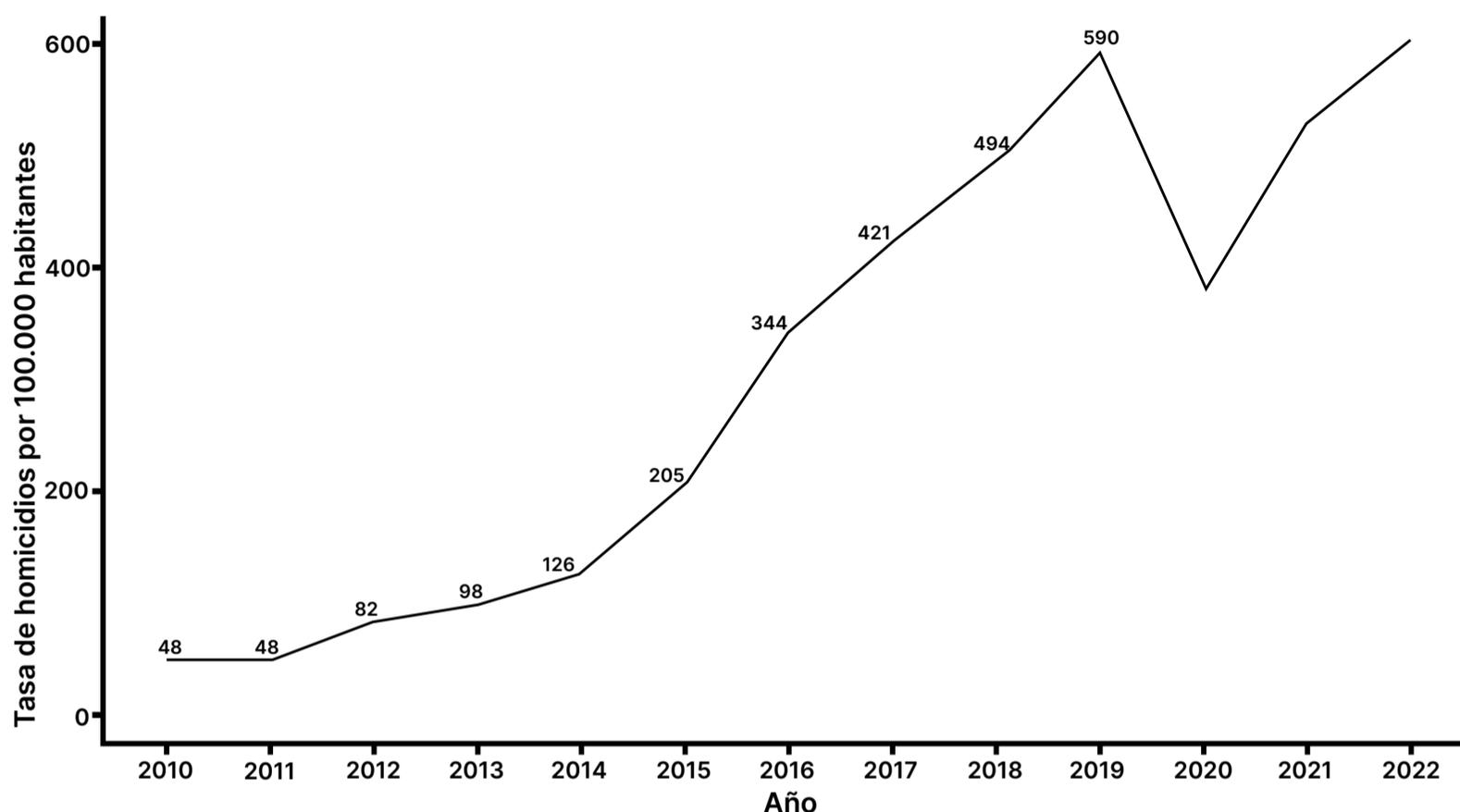
comportamiento de los homicidios es descendente. A cierre de 2022, la tasa de homicidios es de 28 puntos por cada 100.000 habitantes, siendo esta la más baja dentro del todo el período analizado. Aun así, al separar los homicidios entre rurales y urbanos, en la gráfica 2 se observa una leve tendencia creciente en la tasa de homicidios en la zona rural mientras que, en la zona urbana, la tendencia es decreciente. Incluso entre 2020 y 2022, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona urbana es menor que en la zona rural, llegando a tener en 2022 una tasa de 3 puntos menos que la tasa de la zona rural para este mismo año. Se resalta entonces que los logros en la reducción de los homicidios se han concentrado en el área urbana.

Gráfica 2. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes



Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

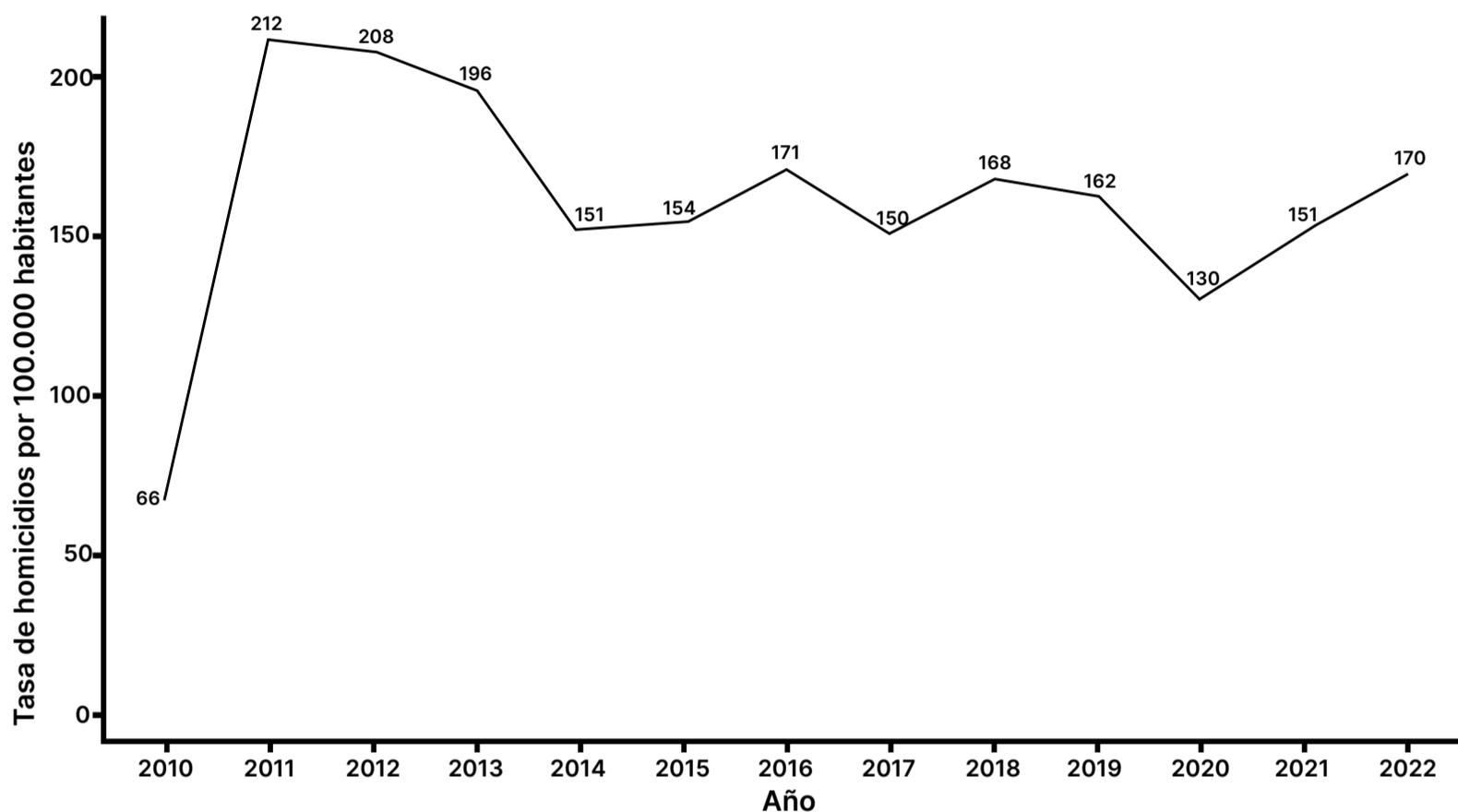
Gráfica 3. Tasa de hurtos a personas por 100.000 habitantes



Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

En cuanto a la tasa de hurtos a personas por 100.000 habitantes, entre 2010 y 2012 en Antioquia, la gráfica 3 presenta, en general, una dinámica creciente. Este comportamiento solo se ve interrumpido en el período de pandemia. Para el 2022 la tasa de hurtos a personas es de 602, estando aproximadamente 12 puntos por encima respecto al año 2019.

Gráfica 4. Tasa de hurtos a vehículos y motos por 100.000 habitantes



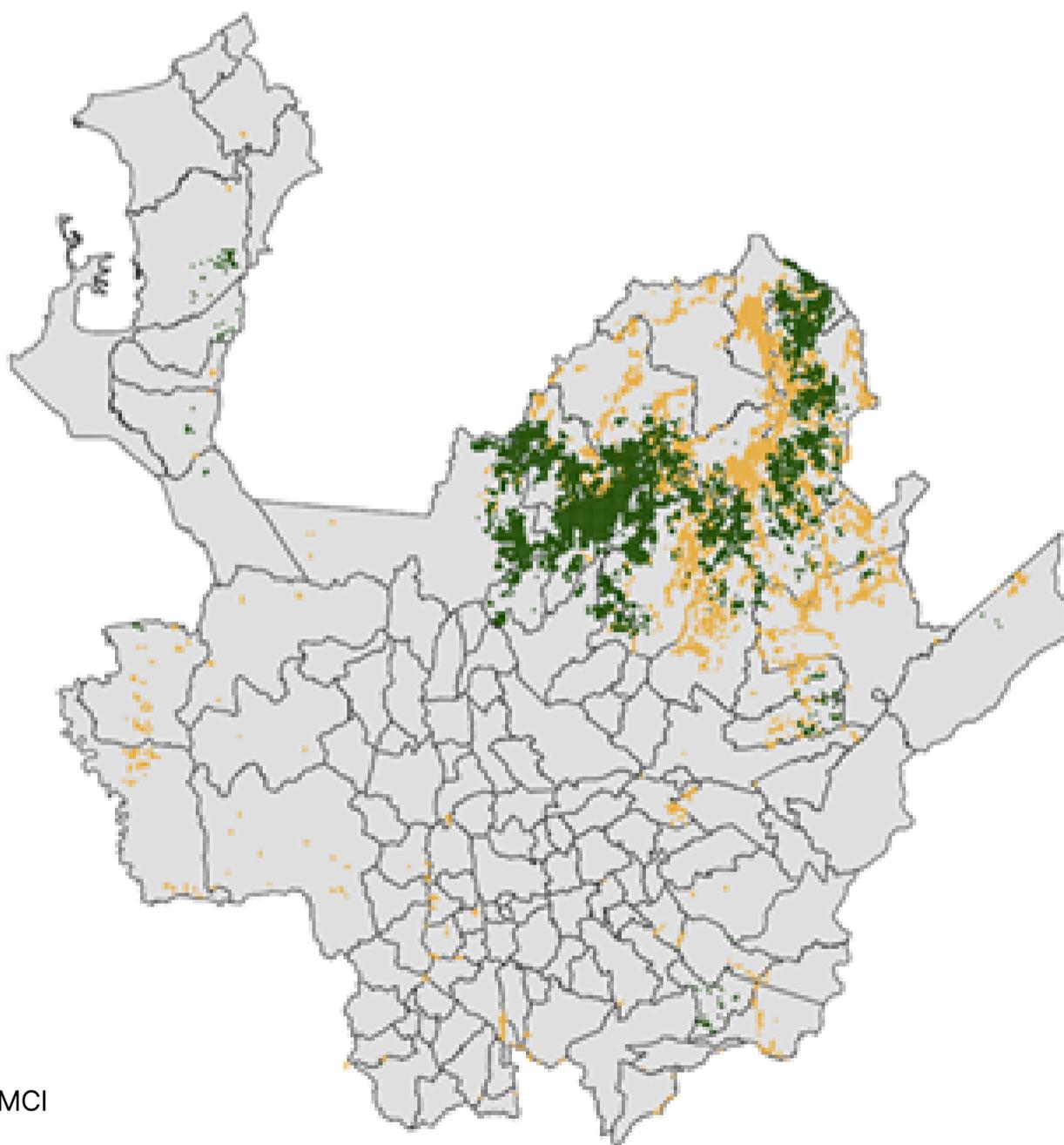
Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

La gráfica 4 presenta el comportamiento de la tasa de hurtos de vehículos y motos por 100.000 habitantes, entre 2010 y 2022. Esta gráfica muestra una dinámica descendente entre 2012 y 2014, pasando de 212 a 151, siendo 2012 el año con mayores hurtos de vehículos y motos. Entre 2015 y 2016 la tasa oscila entre 171 y 150 puntos. A partir de 2021, los hurtos a vehículos y motos incrementan, teniendo para 2022 una tasa de 170.

Adicionalmente, dentro del departamento hay dos fenómenos que afectan las dinámicas de seguridad: la minería ilegal y la presencia de cultivos de coca, dos fuentes importantes de financiación de organi

zaciones criminales de gran calado, como el Clan del Golfo. El mapa 1 presenta la concentración de minería a cielo abierto a través de explotación de oro de aluvión (amarillo), una proxy de minería ilegal y la concentración de cultivos de coca (verde). Del mapa se puede concluir que las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste son las que tienen una mayor incidencia de ambos fenómenos, y después en el resto del departamento hay pequeños focos de concentración con una magnitud mucho menor.

Mapa 1. Concentración de la minería ilegal y los cultivos ilícitos en Antioquia



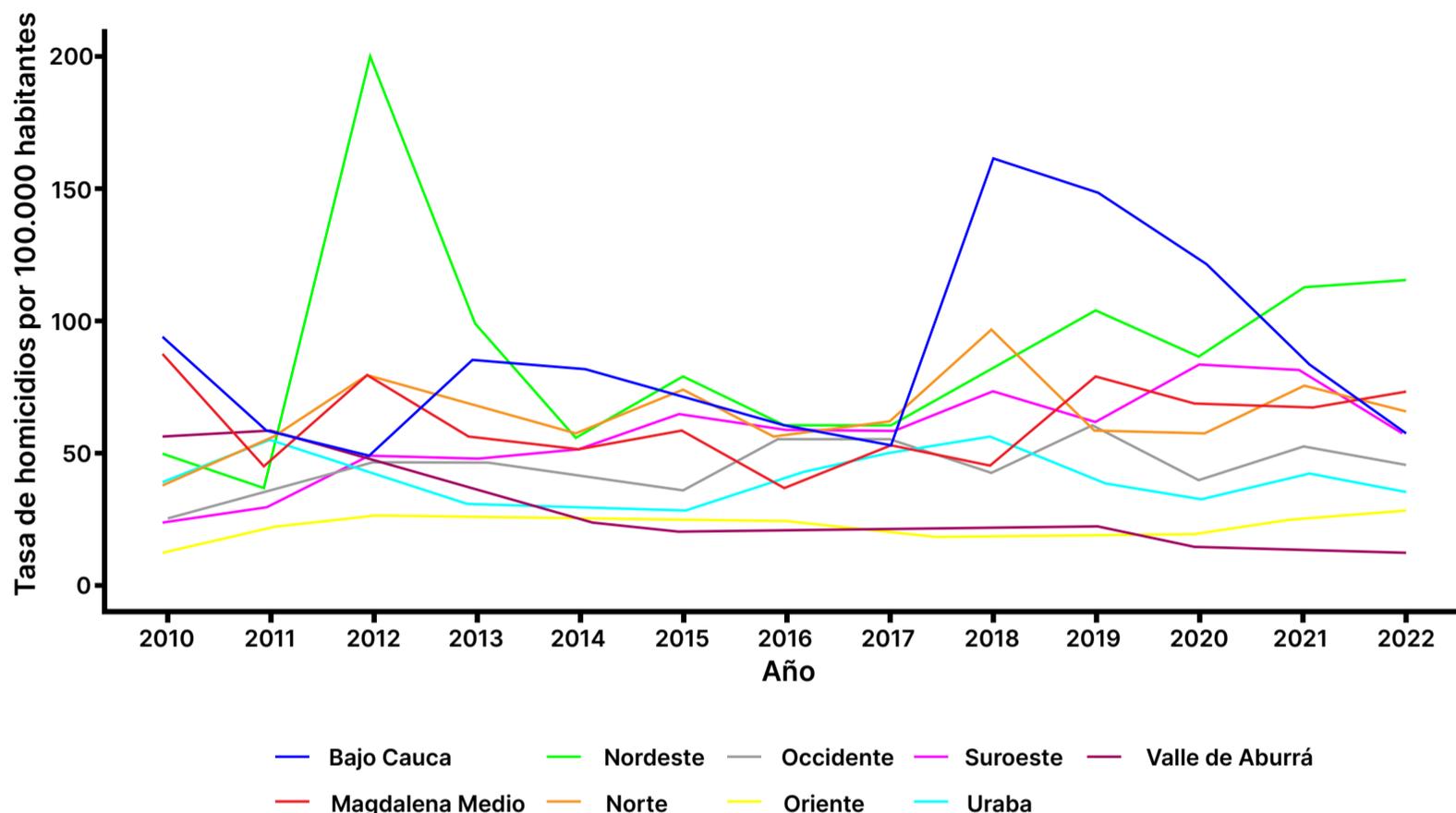
Fuente: SIMCI

Concentración del delito en las subregiones

En Antioquia, los diferentes delitos muestran concentraciones variables en sus diversas subregiones. Esta variación puede atribuirse a una serie de factores, como las características geográficas, las actividades económicas y las circunstancias históricas. Por ejemplo, las zonas con una presencia significativa de cultivos ilícitos y tráfico de drogas pueden experimentar mayores índices de delincuencia organizada, incluidos los delitos relacionados con las drogas y la violencia. Del mismo modo, las regiones con una fuerte industria minera pueden enfrentarse a retos relacionados con la minería ilegal y los delitos contra el medio ambiente. Además, los centros urbanos y las zonas densamente pobladas tienden a presentar mayores casos de delitos contra la propiedad debido a factores como la pobreza, la desigualdad y la disponibilidad de potenciales víctimas. Entender estos distintos patrones de concentración del crimen dentro de las subregiones de Antioquia es esencial para desarrollar estrategias a la medida que aborden las causas subyacentes y fomenten entornos más seguros para la población en general.

En esta sección se describe el comportamiento delictivo de la tasa de homicidios, la tasa de hurtos a personas y la tasa de hurtos a vehículos y motos por cada 100.000 habitantes para las 9 subregiones que comprende Antioquia, entre 2010 y 2022.

Gráfica 5. Tasa de homicidios por 100.000 habitantes

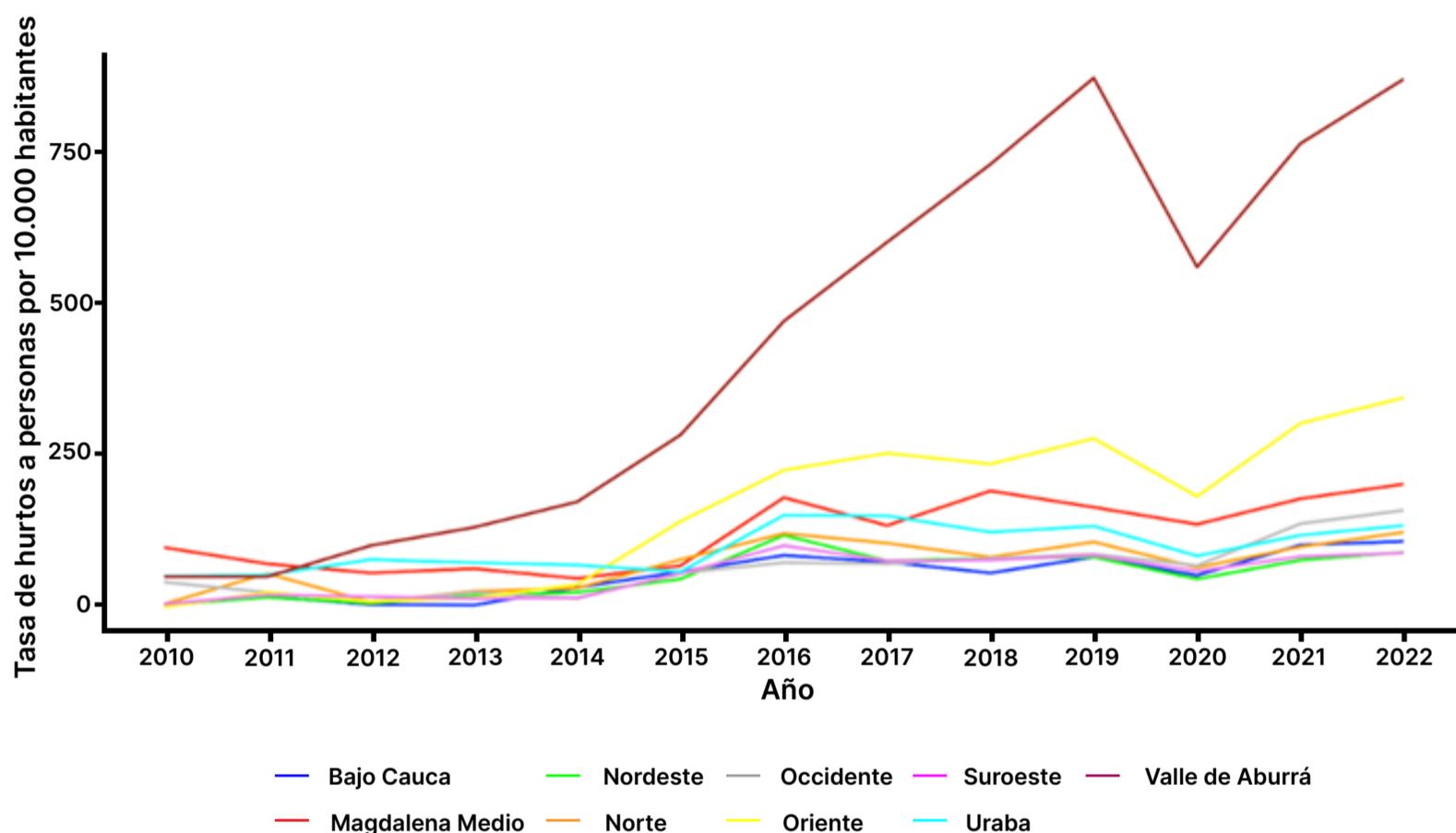


Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

Para el caso de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, en la gráfica 8 se resaltan dos picos altos, uno para el 2012 en la subregión del Nordeste con una tasa de 201 y otro para el 2018 en la subregión del Bajo Cauca con una tasa de 161. Para esta última subregión se observa que a partir de 2018 los homicidios presentan una dinámica descendente hasta 2022. Referente al Valle de Aburrá, la tendencia dentro del período de análisis es decreciente, incluso a 2022 cierra con la tasa de homicidios más baja respecto a las otras subregiones, con 13 puntos. Adicionalmente, en este mismo año se observa que el Nordeste tiene la tasa de homicidios más alta respecto al resto de

subregiones, con 116 puntos, seguido del Magdalena Medio, con 73 puntos por cada 100.000 habitantes.

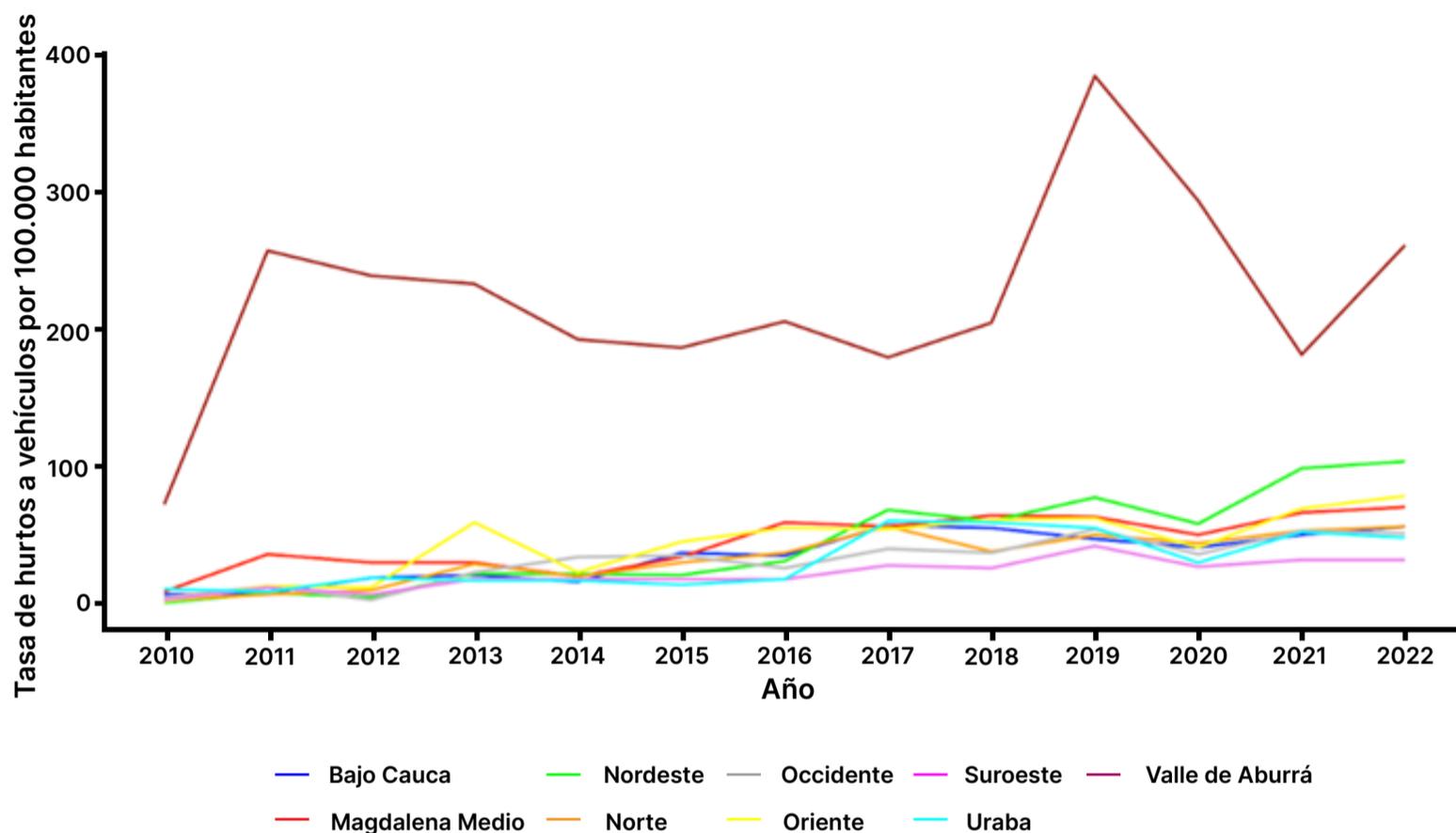
Gráfica 6. Tasa de hurtos a personas por 100.000 habitantes



Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

En la gráfica 9 se muestra la tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes, entre 2010 y 2022. En general, se observa que todas las subregiones tienen un comportamiento creciente, sin embargo, sobresale el Valle de Aburrá con las mayores tasas de hurtos de las 9 subregiones, solo siendo interrumpido en 2020, en 2019 se observa la mayor tasa de hurtos con 872 puntos y cierra en 2022 con una tasa de 870, sólo 2 puntos por debajo de 2019.

Gráfica 7. Tasa de hurtos a vehículos y motos por 100.000 habitantes



Fuente: SIEDCO - Policía Nacional de Colombia

El panorama presentado en la gráfica 10 de la tasa de hurtos a vehículos y motos por cada 100.000 habitantes, entre 2010 y 2022. Se evidencia que el Valle de Aburrá es la subregión con las mayores tasas respecto a las otras subregiones. Para 2019, el Valle de Aburrá presenta una tasa de 383.5 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las otras subregiones, en general, las tasas de hurtos a vehículos y motos son crecientes. En 2022, el Valle de Aburrá conserva la tendencia de mayores hurtos con 261 puntos, seguido de Nordeste, con 105 puntos por cada 100.000 habitantes.

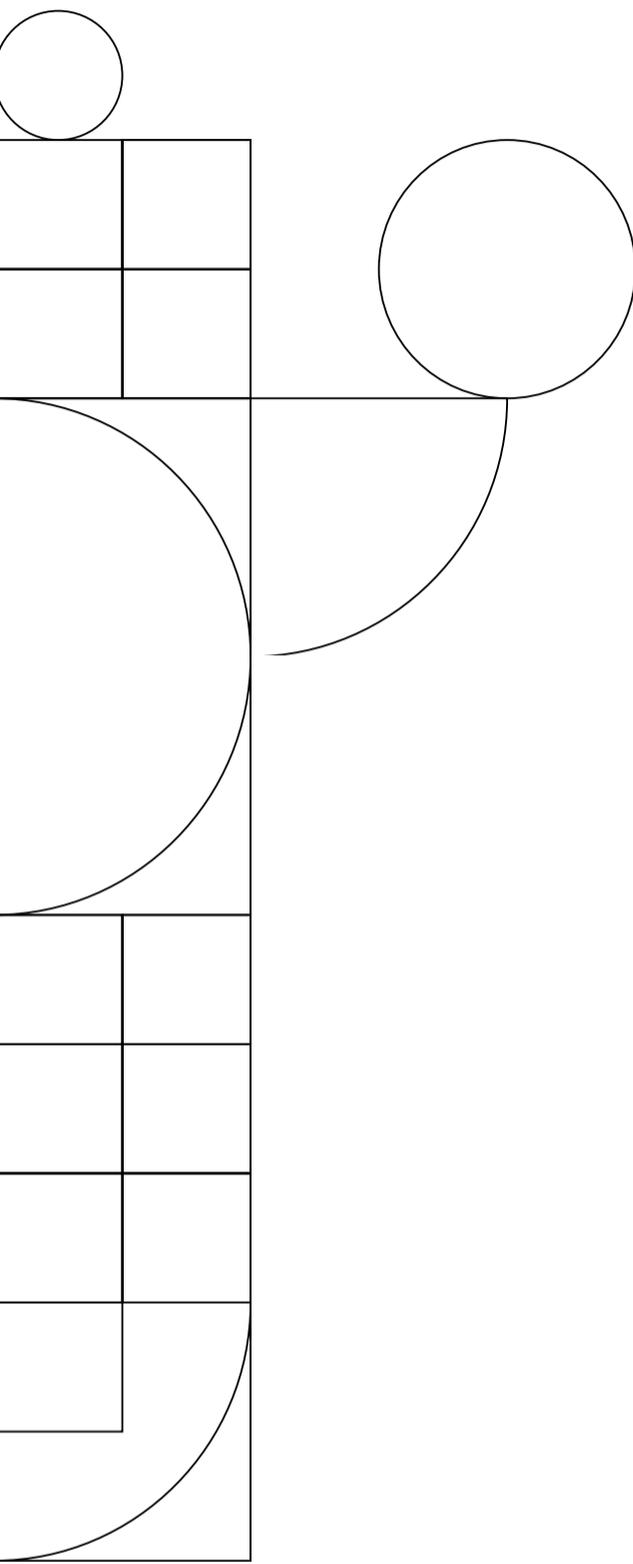
Problemas que los datos no muestran

Como en Medellín, para Antioquia identificamos los mismos tres asuntos, poco documentados en los datos administrativos, que requieren una mejor comprensión: la gobernanza criminal, la extorsión, la presencia de grupos criminales y otras economías criminales como la minería ilegal.

Gobernanza criminal. Como en el caso de Medellín, la gobernanza o gobierno criminal es un asunto crítico en muchas partes de Antioquia. En este caso toma matices diferentes, en tanto la presencia del Estado en zonas rurales es mucho más limitada. En algunas zonas de Urabá, el Bajo Cauca y el Nordeste, por ejemplo, los grupos criminales ejercen una regulación fuerte que llega al punto de interrumpir el transporte y establecer toques de queda.

Extorsión. En muchos municipios de Antioquia la extorsión es un asunto del día a día en negocios y, en algunas ocasiones, en hogares. Como en el caso de Medellín, no se presentan denuncias y esto hace que las autoridades no tengan una comprensión suficiente del problema. En consejos de seguridad en muchos municipios, las autoridades civiles manifiestan su preocupación por la extorsión y la respuesta de las autoridades de policía es que no hay denuncias y sin denuncias no pueden actuar. Este problema, que aqueja a gran parte de la población, termina siempre sin resolverse.

Presencia de grupos armados. Los grupos armados en Antioquia siguen teniendo una fuerte presencia. Se encuentran organizaciones como el Clan del Golfo, algunos grupos de Medellín que controlan mercados de droga en el oriente y el suroeste, el ELN y otras organizacio



nes que participan en múltiples economías ilegales, como la minería ilícita de oro y el narcotráfico. Es crítico entender estas organizaciones, su estructura, sus formas de funcionamiento y su relacionamiento entre ellas y con autoridades en muchos municipios, para poder diseñar estrategias que reduzcan la afectación que generan a la población.

Principales retos para el siguiente cuatrienio

De cara al cuatrienio 2024 - 2027 creemos que los principales retos en materia de seguridad y justicia para Antioquia son:

- En primer lugar, es esencial fortalecer la presencia y capacidad operativa de las instituciones de seguridad en las zonas rurales. Esto implica aumentar la dotación de personal policial, de otras fuerzas de seguridad y de la institucionalidad en general, así como mejorar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para garantizar la cobertura y respuesta adecuada en estas áreas. Además, se deben

- implementar estrategias de coordinación y cooperación entre las diferentes entidades estatales para abordar de manera integral los problemas de seguridad en el ámbito rural.

Además, es necesario establecer programas de prevención del homicidio rural que se enfoquen en las causas subyacentes de este fenómeno. Esto puede incluir iniciativas que promuevan la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de los lazos comunitarios, la generación de oportunidades económicas y la implementación de proyectos de desarrollo rural. Estas medidas no solo buscan reducir la incidencia del homicidio, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y fortalecer su resiliencia frente a la violencia.

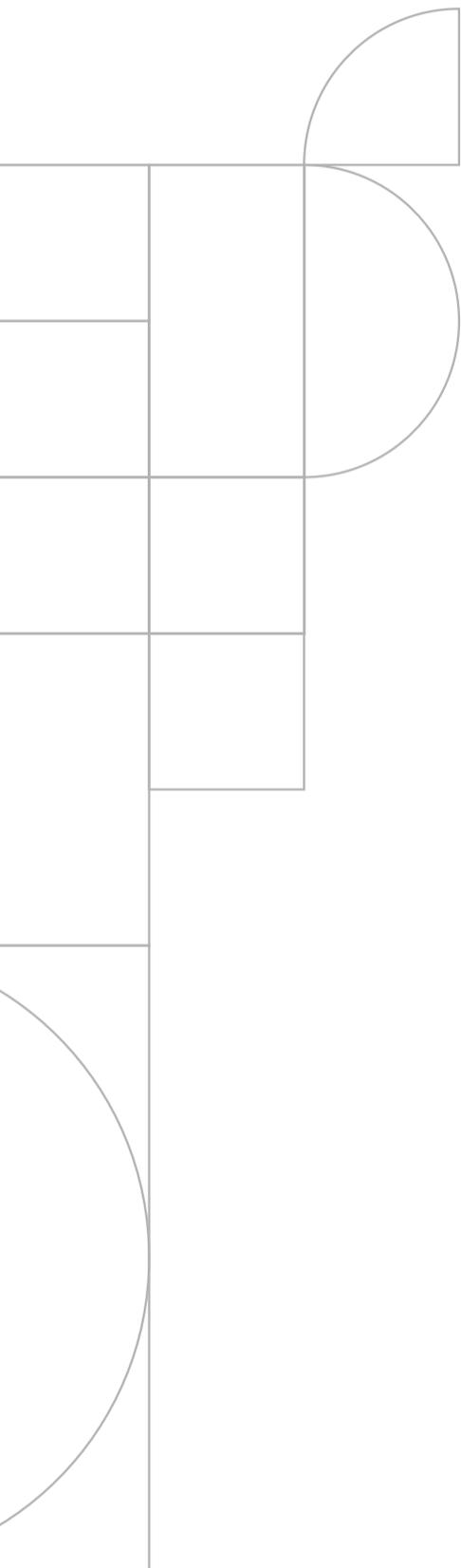
Adicionalmente, es importante establecer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, instituciones académicas y otros actores relevantes en la búsqueda de soluciones. Estas alianzas pueden contribuir con conocimientos especializados, recursos y experiencia en la implementación de programas y proyectos enfocados en la prevención y reducción del homicidio rural.

Finalmente, es crucial destacar que la estrategia para atacar el homicidio rural debe ser integral, sostenible y adaptada a las necesidades específicas de cada subregión. Requiere la asignación adecuada de recursos, la evaluación constante de las estrategias implementadas y la disposición para ajustarlas en función de los resultados y las dinámicas cambiantes. Con un enfoque integral y colaborativo, es posible abordar de manera efectiva el problema del homicidio rural y promover la seguridad y el bienestar en las zonas rurales del departamento.

- Atacar las economías ilegales, como la minería ilegal y los cultivos ilícitos, es una prioridad fundamental para debilitar las estructuras armadas y promover la seguridad en el departamento. Estas actividades generan importantes rentas para los grupos armados y fomentan la violencia, la corrupción y el deterioro del tejido social. Para abordar este problema se requiere una estrategia integral que combine medidas de control, prevención y desarrollo.

En primer lugar, es necesario fortalecer los mecanismos de control y persecución de las actividades económicas ilegales. Esto implica mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de combatir estos delitos y fortalecer la cooperación entre diferentes agencias a nivel local, regional y nacional. Además, se deben implementar medidas efectivas para detectar, investigar y sancionar a los responsables de la minería ilegal y los cultivos ilícitos, así como confiscar sus activos ilícitos.

Es fundamental también realizar esfuerzos para prevenir y desalentar la participación en estas economías ilegales. Esto implica implementar programas de educación y concientización dirigidos a la población, especialmente a los jóvenes, para destacar los riesgos y las consecuencias negativas de involucrarse en actividades ilícitas. Para atacar las economías ilegales de manera efectiva, es necesario impulsar el desarrollo socioeconómico y la infraestructura en estas áreas, brindando acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo. Asimismo, se deben establecer mecanismos de inclusión y participación ciudadana, involucrando a las comunidades en la toma de decisiones y en la planificación de proyectos de desarrollo.



La cooperación internacional desempeña un papel crucial en el combate contra las economías ilegales. Es necesario fortalecer la colaboración con otros países para intercambiar información, compartir buenas prácticas y coordinar acciones conjuntas contra las redes del crimen organizado transnacional. Además, se debe promover la responsabilidad compartida en la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos asociados a las economías ilegales.

Por último, es importante destacar que atacar las economías ilegales requiere de un enfoque a largo plazo y de una estrategia integral que involucre a múltiples actores y sectores de la sociedad. Requiere la coordinación y el compromiso de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como la participación de la sociedad civil, del sector privado y la comunidad en general. Con un enfoque integral y colaborativo es posible debilitar las estructuras armadas y promover la seguridad y el desarrollo sostenible en el Departamento.

- Abordar el problema de la presencia de grupos armados, como el Clan del Golfo y el ELN en el Departamento es una tarea fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de la región. Estos grupos representan una amenaza significativa para la estabilidad y el desarrollo ya que están involucrados en ac

- actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión y la violencia armada. Para desmantelarlos, se requiere una estrategia integral que combine acciones de seguridad, prevención, desarrollo y fortalecimiento institucional.

En primer lugar, es crucial fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad para enfrentar a estos grupos armados. Esto implica proporcionar recursos adecuados, como personal capacitado, equipos modernos y tecnología avanzada para llevar a cabo operaciones de inteligencia, control y neutralización. Además, se deben fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diferentes agencias de seguridad y justicia, tanto en el ámbito local como nacional, para garantizar una respuesta efectiva y coordinada.

Por otro lado, es fundamental implementar estrategias de prevención y desmovilización que aborden las causas subyacentes de la presencia de grupos armados. Esto implica invertir en programas sociales, educativos y económicos que brinden oportunidades legítimas y sostenibles a las comunidades vulnerables. Es importante promover la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social en las áreas afectadas para prevenir el reclutamiento y la colaboración con los grupos armados.

Se debe destacar que la desarticulación de los grupos armados no es suficiente por sí sola. También es necesario consolidar el control estatal en las áreas afectadas, garantizando la presencia de servicios básicos, el acceso a la justicia y el desarrollo socioeconómico. Esto implica invertir en infraestructura, salud, educación y programas de desarrollo rural, y fortalecer la gobernabilidad local y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Anexo 1. Tablas con tasas de homicidios, hurto a personas, hurto a vehículos y motos por cada 100.00 habitantes por subregión

Bajo Cauca													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	94,4	59,1	49,3	85	82	74,8	61,5	52,6	160,6	149	123,9	85	58,4
Hurto personas	5,4	18,9	6,3	5,2	33,8	60,4	87,4	76	58	83,5	53,7	104,2	110,5
Hurto vehículos	8,7	9,7	21,3	23,2	18,3	39,3	37,2	59,2	57,1	48,6	42,6	51,7	58,3

Nordeste													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	50,2	36,9	200,9	100	55,9	79,2	61,4	60,9	83,6	103,8	86,5	112,9	116
Hurto personas	4,6	17,7	8,2	21	25,8	48,2	119,7	78	82	83,8	48	78,9	91,6
Hurto vehículos	3	9,8	7,4	24,3	24,4	22,8	33,1	69,7	61,7	78,8	60,3	99,8	104,5

Norte													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	38,9	55	79,3	70,3	57,7	74,1	55	62	97,6	59,7	57,9	76,1	65,8
Hurto personas	7,3	57	9,6	28,4	32,9	79,5	122,6	106,9	83,6	109	67,4	101,5	124,9
Hurto vehículos	5,1	9,2	12,1	31,5	22,2	31,8	39,3	57,5	39,7	52,2	45,7	54,8	58,4

Occidente													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	23,7	36,8	46,5	46,5	43,1	36,6	57,3	55,9	43,2	62,6	40,1	53,1	46,9
Hurto personas	42,8	26	10,9	25,6	16,2	57,9	74,9	73,3	82	89,4	69,8	138,5	161,3
Hurto vehículos	6,8	15	4,9	25,3	36,1	36,6	27,6	42,1	39,4	55,8	38,1	55,4	53,4

Oriente													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	13,5	21,5	27	26	25,4	26,3	24,9	19,5	18,6	18,8	21,4	26,1	28,8
Hurto personas	2,4	25,8	10,7	17,3	39,2	143,3	226,6	254,8	237,3	278,8	183,8	304,3	346
Hurto vehículos	3,9	14,9	14,2	61,4	25,5	47,4	56,8	55,9	62,6	64	43,1	71,1	79,6

Suroeste													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	23,6	29,8	49,1	47,9	52,2	65,1	59,3	58,4	72,6	62	84,2	80,8	56,7
Hurto personas	6,7	21,9	18,7	16,4	16,7	57,4	102,8	78,3	78,8	87,1	61	85,5	91,4
Hurto vehículos	5,1	14,3	9	19,8	19,8	20,4	20,2	30,4	27,6	43,5	29,1	33,8	33,6

Urabá													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	39,7	55	43,5	31,2	28,7	28,3	42	49,9	55,6	40,1	32,5	42	35,7
Hurto personas	53,3	54,8	80,1	75,4	71,4	60,2	152,9	151,5	125	135,2	86	119,8	135,6
Hurto vehículos	12,7	11,2	20,5	19	19,1	16	20,4	62,4	60,7	56,6	31,7	54,1	50,1

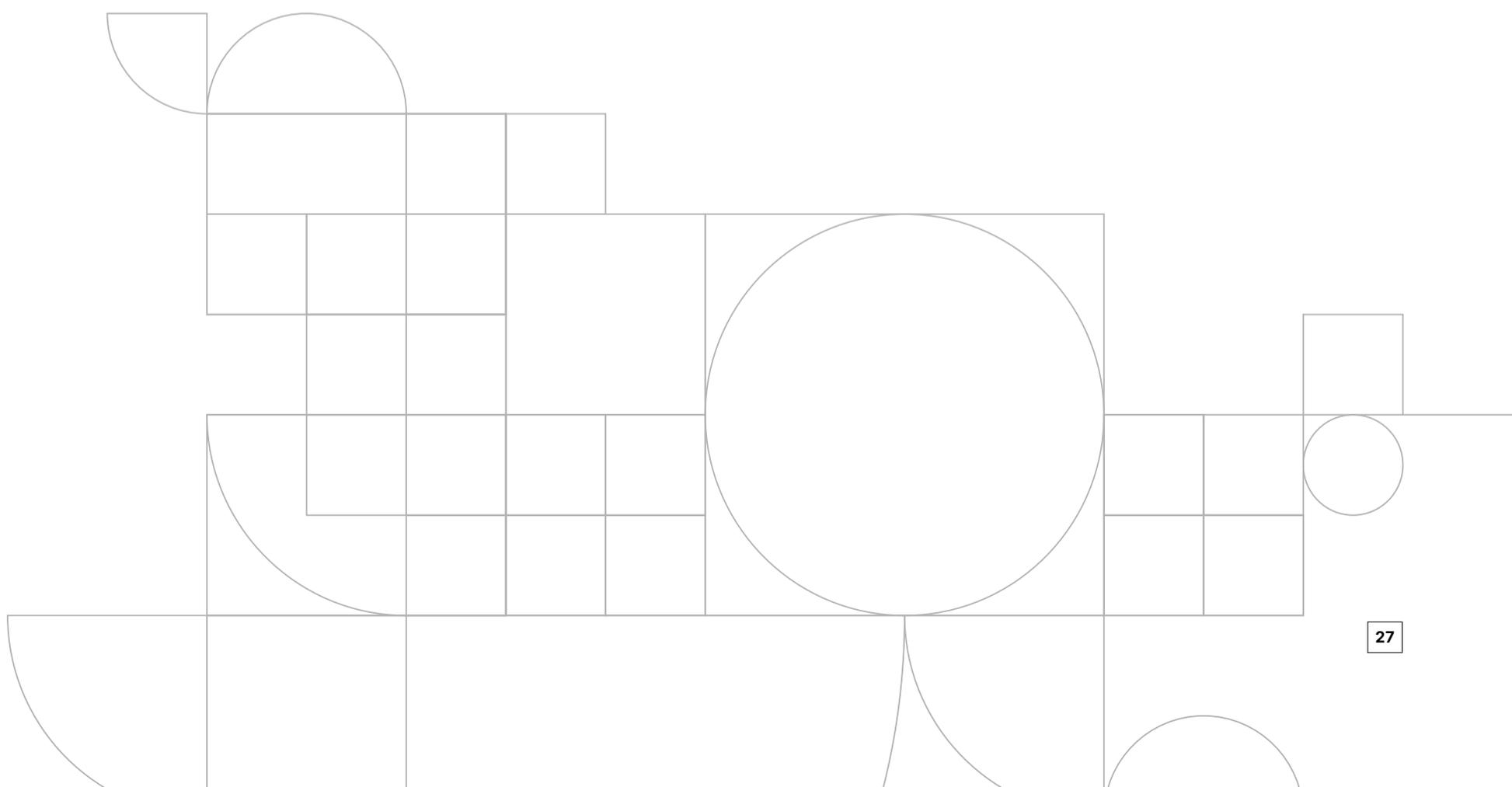
Valle de Aburrá													
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Homicidios	56,6	58,9	48,9	36,8	26,2	20,5	20,3	21,2	22,6	21,9	15,4	14,5	12,8
Hurto personas	51,5	52,3	103,1	132,8	175,2	284,7	472	602,1	730,3	872	561,4	764	869,5
Hurto vehículos	74,4	256,6	239,5	232,8	192,5	187,2	206,3	180,3	205	383,5	293,2	181,5	261,2

Mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas

En la Universidad EAFIT hemos investigado sobre las políticas públicas en los últimos 15 años. Desde el año 2021 trabajamos con la Gobernación de Antioquia en el análisis de la calidad del diseño de sus políticas. Se concluyó que era necesario renovar e incluso revocar algunas de ellas. Muchas políticas realmente no contaban con un problema público bien identificado, con una línea de base clara, ni con indicadores de seguimiento o evaluación. Sin estos elementos en su diseño, muchas políticas definidas en los últimos tres o cuatro períodos de la

gobernación eran más bien un conjunto de objetivos, algunas veces contradictorios, que no tenían una manera clara de llevarse a cabo. Lo más preocupante es que sin línea de base, presupuesto y seguimiento, cada gobernación entrante, debía definir en sus planes de desarrollo todos sus indicadores de seguimiento, presupuestos e incluso acciones. Esto implicaba que realmente, las políticas públicas no se estaban utilizando para darle estabilidad y dirección a la gestión del Estado en el largo plazo.

En este sentido, es clave que la Gobernación de Antioquia continúe con el ejercicio de rediseño de sus políticas públicas. De la misma manera, es clave que se rediseñe al Departamento Administrativo de Planeación, para que esté más orientado a las políticas y para que el Plan de Desarrollo y las políticas públicas se conecten de mejor manera. Convendría pensar en crear una subdirección de políticas públicas y en enfocar un esfuerzo muy grande a que toda la administración se enfoque en políticas más concentradas.



Conversar para confiar: Medellín y Antioquia deben usar el diálogo social y la cultura ciudadana para recuperar la confianza ciudadana e institucional

Autores

Adolfo Eslava Gómez

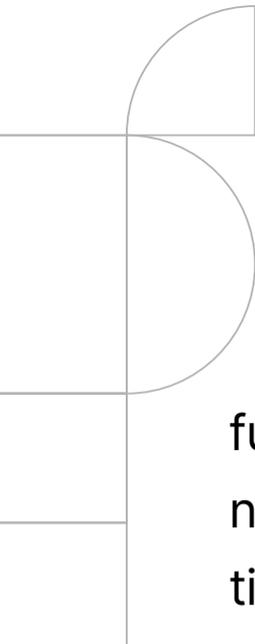
Decano de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT y director del Centro Humanista de la misma universidad.

Santiago Silva Jaramillo

Profesor de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT y director de Tenemos que hablar Colombia – Hablemos Medellín.

Conversar es mejor

Vivimos una crisis de confianza, pero puede ser una crisis fecunda siempre que la abordemos juntos. La pregunta que nos puede orientar es ¿qué debemos hacer?, en la casa, la cuadra, el campo o la ciudad, la clave es conversar. *Quien conversa, confía*, fue uno de los hallazgos de Tenemos que Hablar Colombia, la plataforma de diálogo que contó con las voces de más de cinco mil colombianos y cuyos resultados



fueron presentados en 2022. Contrario a lo que pueden ocasionar fenómenos como la polarización, la posverdad y el populismo, en el sentido de socavar el diálogo social, es posible asegurar que este tipo de conversaciones, como la acontecida en Chile ([Tenemos que hablar de Chile](#)), luego en Colombia ([Tenemos que hablar Colombia](#)) y ahora en Medellín ([Hablemos Medellín](#)), son escenarios que permiten superar miedos y prejuicios para evidenciar desacuerdos, pero también para identificar caminos que resuelven diferencias, por medio del protagonismo de la palabra.

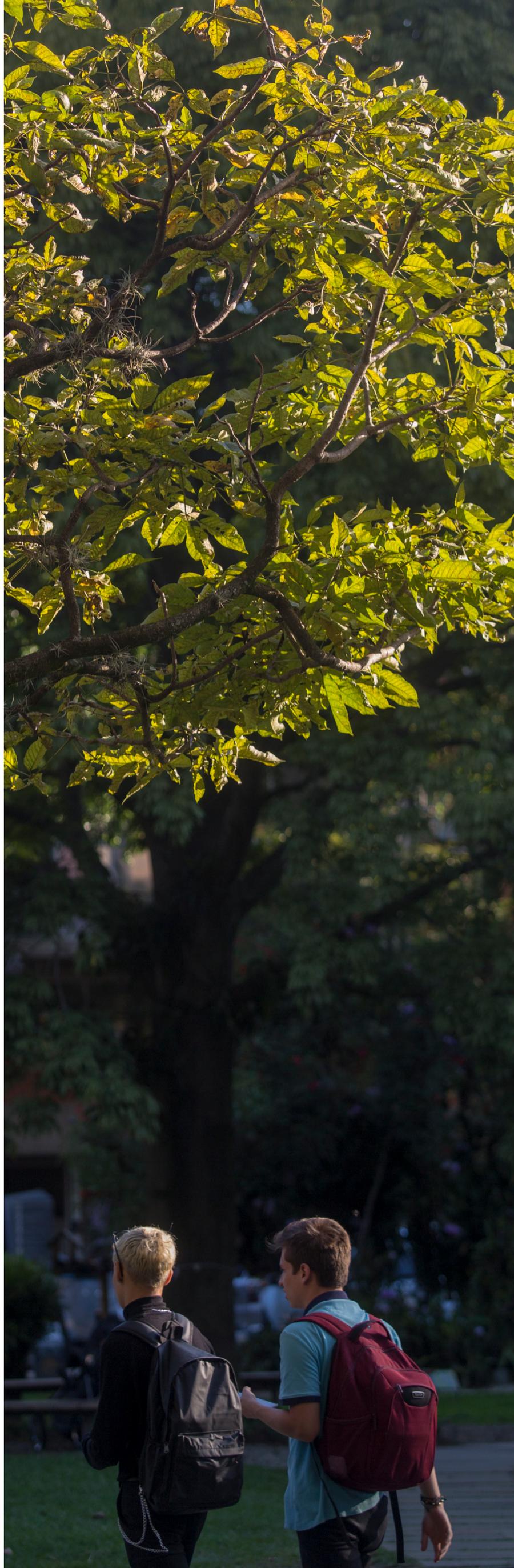
La confianza es la decisión de dejar parte de mi propio bienestar en manos de otro, es decir, confianza es vulnerabilidad de quien confía y es responsabilidad del depositario de confianza gestionar esa vulnerabilidad. Por eso, la desconfianza rampante y contagiosa tiene en la conversación a su conjuro. Es posible contrarrestar la desconfianza haciendo explícita la confianza cotidiana, esto es, aunque desconfiemos de variadas instituciones democráticas y de muchos actores políticos, confiamos en familiares, amigos y organizaciones con quienes interactuamos habitualmente.

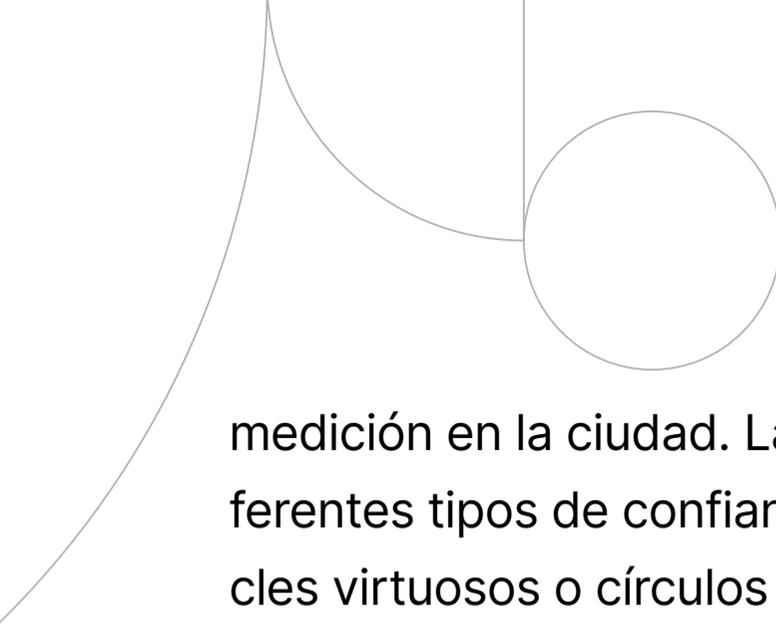
El contexto de las elecciones locales del año 2023 es una oportunidad para hacer frente al fenómeno de la desconfianza, fundado más en percepciones que en argumentos, mediante conversaciones alrededor de lo que nos motiva y moviliza como ciudadanía. La posibilidad de compartir perspectivas acerca de los problemas más apremiantes, con el fin de construir horizontes compartidos de futuro, a través de compromisos de acción colectiva, es el asidero del capital social revitalizado y de la esperanza renovada.

Por esta razón, resulta preciso abordar la pregunta *¿qué debemos hacer, ahora y juntos?*, como cuestión orientadora, tanto de tertulias informales como de los diversos espacios de debate público. La conversación es el vehículo para el cambio social que merecen nuestras realidades locales.

Una crisis de confianza

El mundo parece atravesar una crisis de confianza, es decir, una reducción sistemática de la confianza que las personas depositan en otros y en las instituciones que delimitan las reglas de juego sociales (Giraldo y Suárez, 2022). En Medellín, el porcentaje de personas que confían en otras en la ciudad pasó del 43% en 2009 al 31% 2021, según la Encuesta de Cultura Ciudadana. Es la reducción más pronunciada desde que se realiza esta

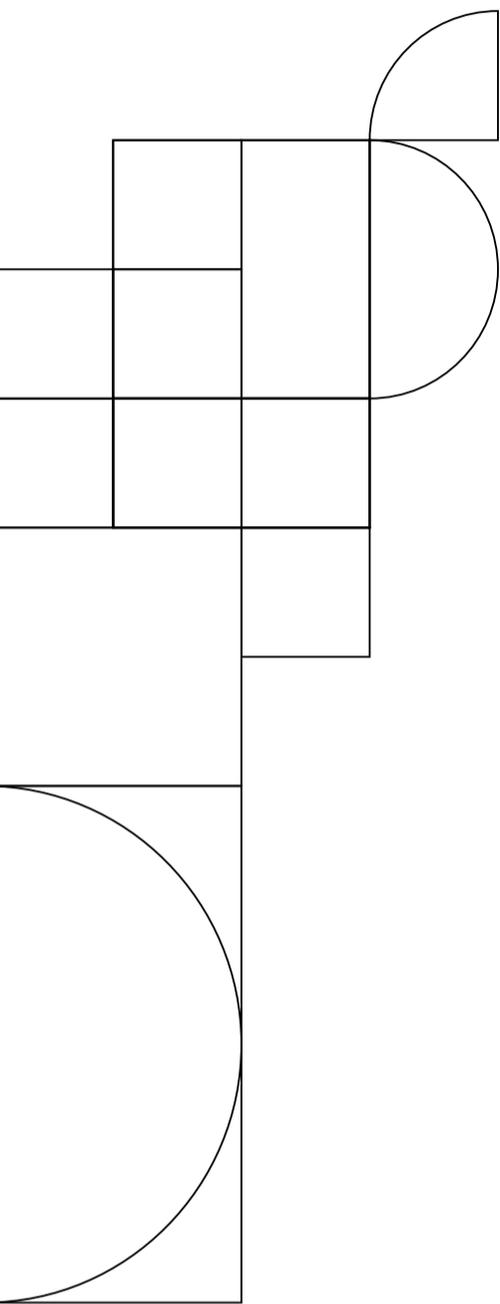




medición en la ciudad. La confianza funciona en subsistemas y los diferentes tipos de confianza suelen retroalimentarse para producir bucles virtuosos o círculos viciosos. De tal forma que no es sorprendente que también haya decrecido la confianza institucional. De acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos, la imagen favorable del Metro de Medellín pasó del 96% en 2019 al 86% en 2022 y el INDER bajó del 96% al 82% en el mismo periodo. Pero quizá las dos pérdidas de imagen favorable más pronunciadas se produjeron en Telemedellín, que pasó de una imagen favorable del 94% al 72%, y en EPM, que pasó de 90% al 72%, entre 2019 y 2022. La Policía, las inspecciones de familia, las comisarias, el ICBF y otros tantos también caen en aprobación (Medellín Cómo Vamos, 2023). La confianza también se vincula a la percepción que los ciudadanos tienen del proyecto colectivo que los reúne.

Paralelo a los decrecimientos en confianza interpersonal e institucional, uno de los capitales de movilización ciudadana más poderosos con el que cuenta la ciudad se resintió: el orgullo. De acuerdo con la Encuesta de Cultura Ciudadana, entre 2019 y 2021, el porcentaje de habitantes que se sentían “muy orgullosos” por la ciudad pasó del 52% al 37% y el de las personas que se sienten “poco orgullosas” pasó del 10% al 16%. Cifras un poco menos preocupantes, pero aun así llamativas, señala la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, que evidencia un panorama similar, con las personas que se sienten “orgullosas” o “muy orgullosas” de la ciudad en el 77%.

Estos deterioros se suman a reducidos espacios de participación ciudadana, señalados por el informe de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos (2023) y a un creciente escepticismo de la



participación formal encontrado en la Encuesta de Cultura Ciudadana (2022).

Sin embargo, también podemos evidenciar oportunidades. Procesos de participación y movilización, como Antioquia 2040, adelantado por la Gobernación de Antioquia; escenarios de conversación e incidencia pública, como Tenemos que hablar Colombia y Hablemos Medellín (2022a), y, por parte de la Universidad EAFIT (2022a), las más de sesenta iniciativas de diálogo social activas en 2021, de las cuáles hay al menos una docena en Antioquia, evidencian capacidades, interés y agenda de diálogo social.

Quien conversa, confía

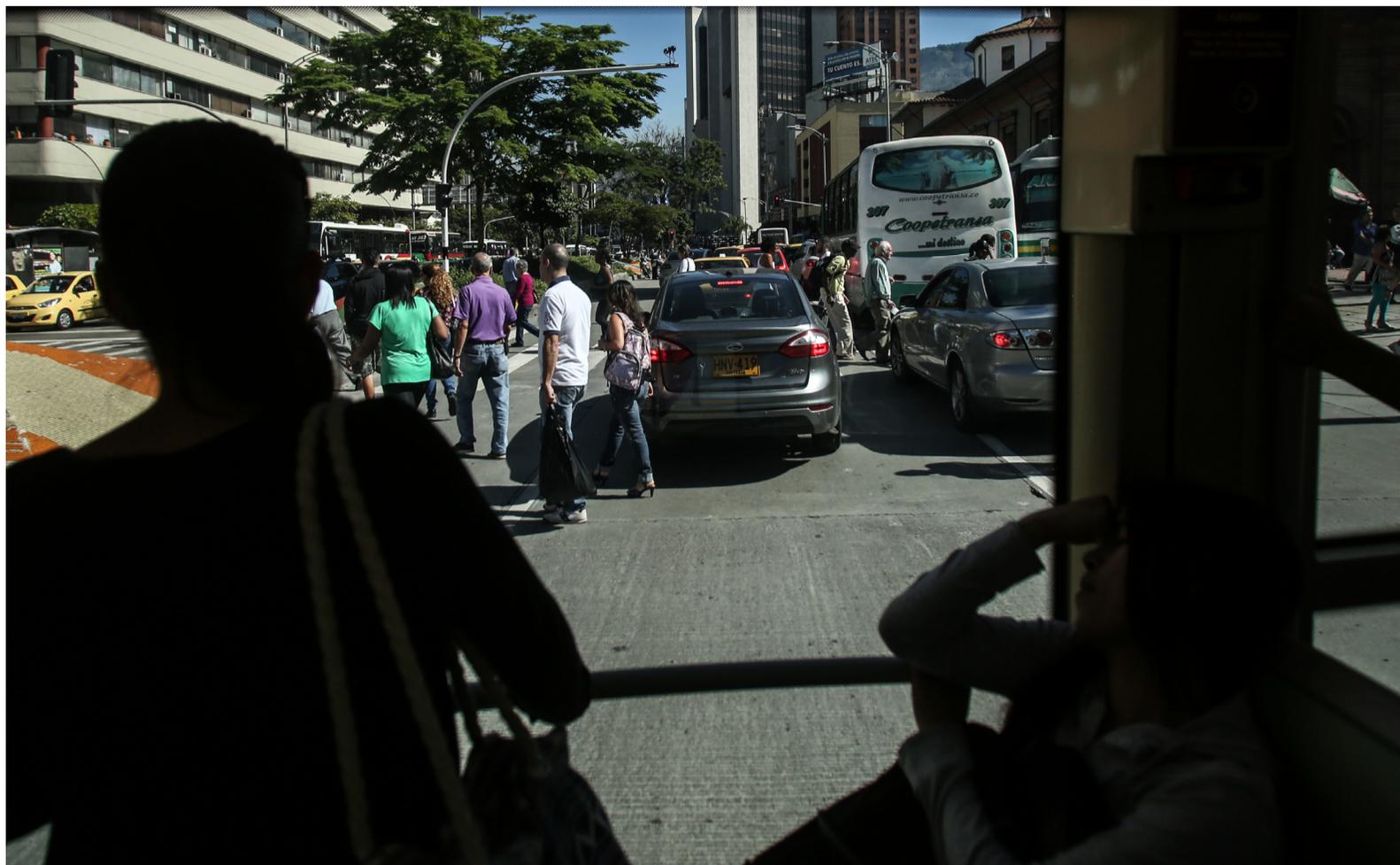


En 2021 y 2022 seis universidades colombianas, lideradas por la Universidad EAFIT, adelantaron el proceso de diálogo e incidencia ciudadana Tenemos que hablar Colombia. Su objetivo principal era propiciar la conversación entre miles de personas sobre qué cambiar, mejorar y mantener en Colombia y entregar el análisis de los resultados de esas conversaciones a tomadores de decisión nacionales (Tenemos que hablar Colombia, 2022a). Luego del primer mes de conversaciones, cuando casi

mil ciudadanos ya habían participado, la retroalimentación positiva de la experiencia de diálogo llamó la atención del equipo de la iniciativa y esto dio paso al diseño de un ejercicio semiexperimental para revisar lo que les pasaba a las personas luego de estar en las conversaciones. El equipo quería explorar las percepciones de los participantes, luego de pasar por la sesión de diálogo, respecto al futuro del país y sobre los demás colombianos. Una de las variables principales de este objetivo fue la confianza interpersonal, como medida del reconocimiento mutuo, y la percepción del otro respecto a un escenario de encuentro entre ciudadanos, como las sesiones de diálogo (Tenemos que hablar Colombia, 2022b).

En este sentido, se buscaba medir en los participantes su percepción sobre el diálogo y la confianza, su optimismo respecto del futuro del país y su confianza interpersonal y confianza institucional. El instrumento a través del cual se recogieron las observaciones de los participantes fue una encuesta, enviada vía correo electrónico a los participantes efectivos al final de las sesiones de conversación (grupos de tratamiento) y a los participantes inscritos que aún no habían tenido ocasión de asistir al ejercicio de conversación (grupo de control). La misma encuesta se envió de nuevo a los dos grupos una semana después de la primera, para tener idea sobre el mantenimiento en el tiempo de las respuestas.

Aunque las respuestas en otras variables dan una cuenta interesante de la relación que los participantes tienen con asuntos como el diálogo social, la democracia en lógica participativa y sus expectativas de cambio en Colombia, la diferencia más significativa entre los participantes que habían pasado por la experiencia de conversación y los



inscritos que estaban en la lista para hacerlo, fue su reporte de confianza interpersonal (Tenemos que hablar Colombia, 2022b). Los resultados obtenidos confirmaron un efecto importante de participar en escenarios de conversación como Tenemos que hablar Colombia y un aumento en la confianza. En el grupo de participantes de los diálogos, el 64% señaló que se puede confiar en la mayoría de las personas, mientras que, en los inscritos que no habían participado, solo lo hizo el 39%. Para la misma pregunta, una semana después, los porcentajes fueron 62% y 42%, respectivamente (2022b).

Este resultado es particularmente relevante en una coyuntura actual de reducción de la confianza interpersonal e institucional en Colombia, Antioquia y Medellín.

Innovación democrática para construir confianza

La experiencia de Tenemos que hablar Colombia y de las iniciativas de diálogo social, por fuera de los mecanismos tradicionales de participación, también resultan relevantes en un contexto de desgaste de la democracia representativa. En 1996 en Colombia, el apoyo a la democracia era del 60%, mientras que en 2020 es del 43%, según el Latino-barómetro. En los países de América Latina que mide esta encuesta, el cambio en estos últimos veinticinco años ha sido de unos quince puntos porcentuales. En este momento, un poco menos de la mitad de los latinoamericanos apoya la democracia. La distancia entre expectativas sociales y realidades globales, la alta percepción de corrupción, las dificultades de los gobiernos de la región para resolver viejos problemas perversos e, incluso, el ascenso de Internet y las redes sociales parecerían explicar algo de esta baja en popularidad de la democracia. Hay un escepticismo cotidiano sobre la representatividad que siempre resulta llamativo: los ciudadanos no creen que las decisiones públicas los involucren, los consulten y al final, los beneficien.

Este problema de participación se ha intentado abordar con mecanismos de decisión pública participativa. La Constitución de 1991, por ejemplo, introdujo nueve mecanismos de participación ciudadana, pero su uso ha sido esporádico, cuando no nulo. ¿No podremos idear alternativas?, ¿por qué no asumir que podemos mejorar las maneras en que nos gobernamos y tomamos decisiones? Efectivamente, la de-

mocracia puede ser mejorada, como lo ha hecho desde que existe, y esos procesos de innovación pueden agenciarse desde los gobiernos locales y regionales.

En 2013 el gobierno de Irlanda introdujo un mecanismo extraordinario para consultar con sus ciudadanos decisiones complejas: la deliberación participativa. Lo hizo a través de asambleas ciudadanas, reuniones de 100 ciudadanos, invitados de manera aleatoria, pero siempre representativos de la configuración socio económica y poblacional de sus habitantes. Durante varias sesiones, los participantes escuchaban expertos temáticos, posiciones contrarias y recogían y valoraban evidencias e información sobre el asunto que los convocaba. Las sesiones incluían escenarios de deliberación entre los participantes, más que para ponerlos de acuerdo, para poner a prueba sus argumentos e imaginar decisiones colectivas. Al final, luego de semanas de conversaciones, la asamblea votaba una decisión o recogía unas recomendaciones que presentaba a un comité del gobierno que evaluaría su implementación. Desde su existencia, se han realizado cinco asambleas ciudadanas en Irlanda, evaluando asuntos como el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos de las mujeres e, incluso, las medidas de protección de la biodiversidad del país.

Las asambleas son un mecanismo muy ingenioso de democracia deliberativa que permite escalar la legitimidad de la representatividad (cuidando que los participantes representen su población), manteniendo un principio de igualdad muy interesante: el azar. También, confían en la capacidad de sus ciudadanos de conocer más sobre un tema, escuchar información contraria a sus posturas personales y luego deliberar en la intención de imaginar la mejor solución. Si la de-

mocracia representativa y la tecnocracia en ocasiones pueden subestimar a sus gobernados, las asambleas intentan reparar eso, al involucrarlos en las decisiones sobre una idea de adultez ciudadana.

Restablecer y fortalecer lazos

Es posible asegurar que hay oportunidades importantes en la conexión entre conversación, conexión y transformación. El debate público de Antioquia y Medellín se ve necesitado de la reivindicación de estos conceptos y de sus lazos fundamentales (Eslava y Peralta, 2023). En este sentido, estamos convencidos de la tesis de que *conversar es mejor y quien conversa, confía*, de tal forma que este texto es una invitación a proteger el vigor de la conversación, como mecanismo de participación, reafirmación y resolución de asuntos públicos, que permite propiciar desacuerdos que pueden llevar a acuerdos, forjar visiones compartidas de futuro e, incluso, incrementar directamente la confianza que sentimos por otros. Lo anterior bajo los principios centrales de una “buena conversación” en la que se hacen explícitas las opiniones, se practica la escucha activa y profunda y se construyen argumentos comunes, esto es, la posibilidad que nos damos socialmente para contar con espacios y rituales de encuentro que pongan en el centro el cuidado de la palabra.

Referencias

Alcaldía de Medellín (2022). Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín, 2021.

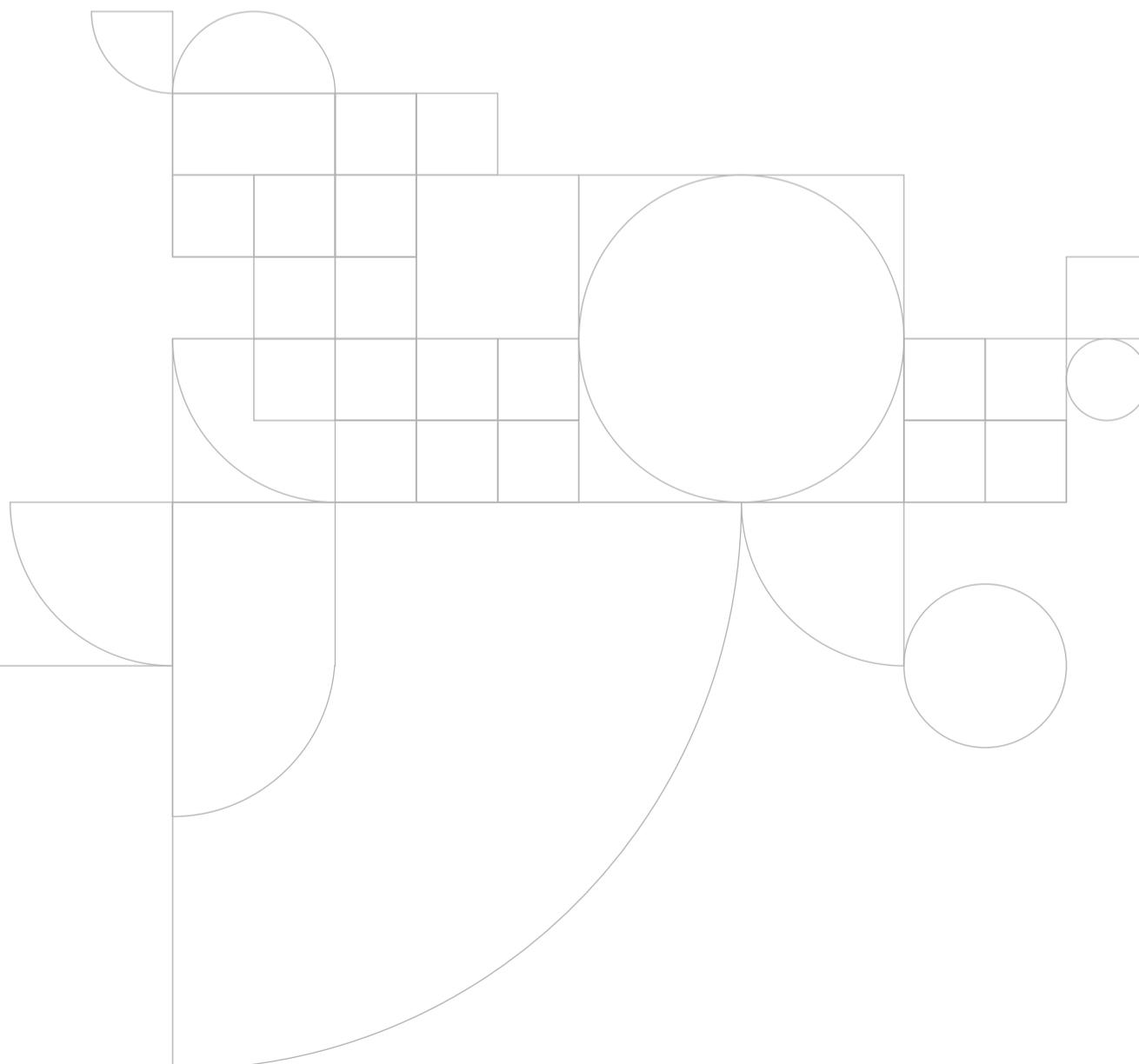
Eslava, A. y Peralta, A. M. (2023). Conversaciones sobre el cambio social. Centro Humanista EAFIT y Grupo SURA. Editorial Sílabas.

Giraldo, J. y Suárez, J. L. (Ed.). (2022) La confianza en el siglo XXI. Conceptos, estrategias y prácticas. Editorial EAFIT.

Medellín cómo vamos (2023). Informe de Percepción Ciudadana de Medellín.

Tenemos que hablar Colombia (2022a). Colombia a escala. Informe técnico. Disponible en: <https://tenemosquehablarcolombia.co/informes/tecnico.pdf>

Tenemos que hablar Colombia (2022b). Quien conversa, confía. Informe divulgativo. Disponible en: <https://tenemosquehablarcolombia.co/informes/confianza.pdf>



3 claves para la gobernanza y la administración pública en Antioquia

Autores

Santiago Leyva

Profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, y coordinador de la línea de Gobierno y democracia en Valor Público EAFIT

Carolina Sánchez

Profesora de la Escuela de Derecho, e investigadora asociada a Valor Público EAFIT

Mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas

En la Universidad EAFIT hemos investigado sobre las políticas públicas en los últimos 15 años. Desde el año 2021 trabajamos con la Gobernación de Antioquia en el análisis de la calidad del diseño de sus políticas. Se concluyó que era necesario renovar e incluso revocar algunas de ellas. Muchas políticas realmente no contaban con un problema público bien identificado, con una línea de base clara, ni con indicadores de seguimiento o evaluación. Sin estos elementos en su diseño, muchas políticas definidas en los últimos tres o cuatro períodos de la gobernación eran más bien un conjunto de objetivos, algunas veces contradictorios,

que no tenían una manera clara de llevarse a cabo. Lo más preocupante es que sin línea de base, presupuesto y seguimiento, cada gobernación entrante, debía definir en sus planes de desarrollo todos sus indicadores de seguimiento, presupuestos e incluso acciones. Esto implicaba que realmente, las políticas públicas no se estaban utilizando para darle estabilidad y dirección a la gestión del Estado en el largo plazo.

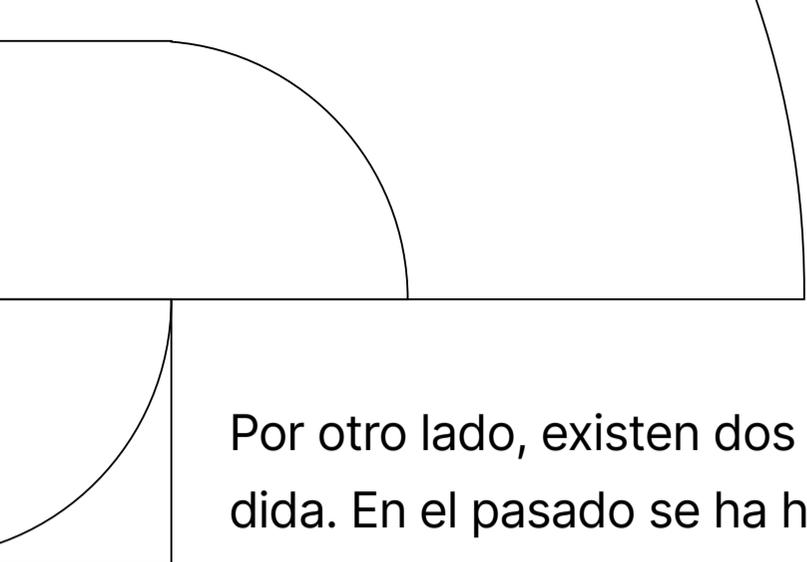
En este sentido, es clave que la Gobernación de Antioquia continúe con el ejercicio de rediseño de sus políticas públicas. De la misma manera, es clave que se rediseñe al Departamento Administrativo de Planeación, para que esté más orientado a las políticas y para que el Plan de Desarrollo y las políticas públicas se conecten de mejor manera. Convendría pensar en crear una subdirección de políticas públicas y en enfocar un es



fuerzo muy grande a que toda la administración se enfoque en políticas más concentradas.

Fortalecimiento de las provincias y creación de nuevas áreas Metro para Oriente y Urabá

En la Universidad EAFIT también hemos trabajado durante las últimas dos décadas en temas de descentralización. Un tema clave para la Universidad ha sido el del fortalecimiento de los Esquemas Asociativos Territoriales, especialmente el de las provincias (Antioquia tiene 6) y del Área Metropolitana. En cuanto a las provincias, es clave que el Departamento trabaje con el DNP en el ejercicio de repensar esta figura, pues hasta el momento no cuenta con una ley que les otorgue a las provincias competencias e ingresos específicos. Sin estas reglas claras, la figura de las provincias resulta muy débil y poco viable. No obstante, no hacer nada tampoco es una opción, ya que de los 125 municipios de Antioquia el 95% es categoría 5 y 6, lo cual implica que estos municipios por sí solos no pueden resolver todos sus problemas, pues no cuentan con las economías de escala o las capacidades administrativas para resolver temas de servicios públicos, políticas públicas o servicios específicos. Es por esto que es necesario que Antioquia se convierta en un departamento de provincias, pero que a su vez estas sean repotenciadas en un ejercicio conjunto con el Congreso y el Gobierno Nacional. Antioquia debe liderar esta agenda de las nuevas provincias, con competencias y recursos claros, asignados mediante una ley.



Por otro lado, existen dos regiones que requieren soluciones a la medida. En el pasado se ha hablado de establecer un área metro para el Oriente y para Urabá. Sin embargo, estas iniciativas no avanzaron mucho porque la figura de un área metropolitana bajo el marco normativo de la Ley 1625 de 2013 no resulta atractivo para los municipios vecinos al que sería el municipio núcleo. En este sentido, pensamos que se requiere tramitar una nueva figura en el Congreso que, siguiendo el ejercicio desarrollado por la región Metropolitana de Bogotá, trabaje con un marco que permita establecer una relación más equitativa entre municipios asociados. Igualmente, se requiere que la nación financie estas iniciativas mediante recursos del SGP, de tal manera que dichas iniciativas sean viables.

Conglomerado y 2040

Finalmente, la gobernación de Antioquia acaba de definir una visión para el 2040. Este importante ejercicio debe tener continuidad y se debe reflejar en los planes de las entidades del conglomerado. Esto puede implicar la necesidad de actualizar también el diseño institucional y las funciones de muchas entidades del conglomerado. Dado que se tendrá un nuevo plan de largo plazo, con una nueva vocación, se debe revisar el conjunto de entidades y sus funciones. La Universidad EAFIT está acompañando a la gobernación de Antioquia en esta tarea, pero es muy clave que esta mirada continúe y se profundice.

Capítulo 2

Sostenibilidad del Planeta

EAFIT busca fortalecer la educación para el desarrollo sostenible en toda la comunidad universitaria para que su relación con la naturaleza sea armónica y así aportemos a la construcción de una sociedad sostenible.

Autor

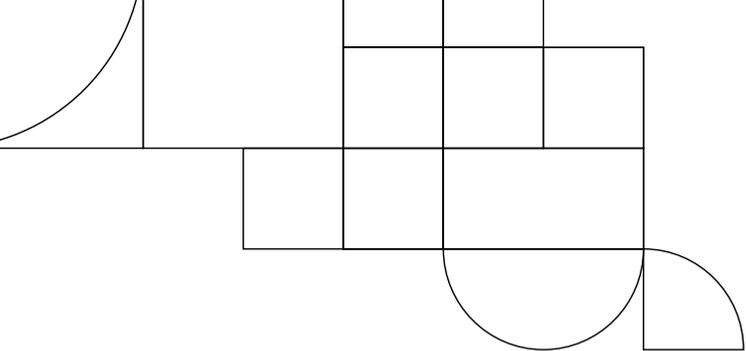
Urbam

Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT

Procesos para la transformación y el desarrollo territorial de las subregiones y los territorios rurales: una deuda en la construcción de equidad

Existe un sesgo urbano en el planteamiento de procesos de transformación y desarrollo territorial, el cual ha perpetuado el proceso migratorio del campo a la ciudad.

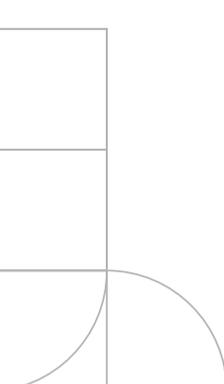
De acuerdo con la ONU, la población urbana mundial casi se triplicó durante el proceso de industrialización del siglo XX. Actualmente, más de la mitad de la población mundial habita en zonas urbanas y se proyecta que, para el año 2050, esta cifra pueda llegar al 66%. Lo preocupante es que las zonas urbanas solo ocupan el 3% del suelo, generan el 80% de la riqueza mundial y consumen hasta un 76% de los



recursos naturales. Lo anterior es consecuencia de la tendencia mundial de enfocar el crecimiento económico en las zonas urbanas, atrayendo inversiones, recursos, puestos de trabajo, demanda de vivienda e infraestructura y servicios básicos. Paralelamente se da el despoblamiento de algunas zonas rurales, con la consecuente degradación del paisaje productivo.

El fenómeno mundial de migración campo-ciudad, también se presentó en la ciudad de Medellín. Durante el siglo XX, la ciudad sufrió un aumento desbordado de su población, ocasionado, tanto por el crecimiento vegetativo de la población urbana, como por el incremento de las migraciones desde el campo (producto del atractivo de Medellín como foco de desarrollo industrial y oportunidades de empleo). El aumento poblacional desbordado fue detonante de la formación de barrios precarios e informales, que se convirtieron en la solución de vivienda para la población de bajos recursos. Como resultado de lo anterior, se produjo una ciudad segregada en las dimensiones física, social y económica, la ciudad informal se concentró en las zonas del norte y en las partes altas de las laderas.

Es en este contexto que, a partir de los años noventa, se empiezan a estudiar e implementar programas para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los barrios marginales, buscando saldar la deuda social acumulada. Se apostó entonces por la transformación estructural de estos barrios, a través de procesos integrales, donde se ejecutaron estrategias de educación y cultura, articuladas con la transformación física del territorio, como el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Informales (PRIMED) y los Proyectos Urbanos Integrales (PUI). No obstante, estos avances atienden los síntomas de un problema y no



sus causas, originadas en las menores oportunidades encontradas en la ruralidad o en la búsqueda de oportunidades más disponibles en la ciudad. Son escasas las reflexiones y proyectos ejecutados en función de la construcción y mejoramiento de la ruralidad. Si bien el campo ha sido base y fuente de lo urbano, se ha mantenido en una posición de subordinación. Es en este escenario desigual, las ciudades, asociadas al imaginario de mayores oportunidades y calidad de vida, continúan atrayendo a la población rural. De esta manera persiste la presión sobre las precarias periferias urbanas, que continúan siendo pobladas con la llegada de habitantes desde la ruralidad.

De manera simultánea, las ciudades ejercen presión sobre las áreas rurales, al ser cada vez más dependientes de ellas. La ruralidad suministra a las ciudades casi la totalidad de los alimentos, el agua, la energía y las materias primas que sus habitantes consumen, además de ser el lugar donde van a parar los desperdicios que las ciudades generan.

En Antioquia, la disparidad entre el campo y la ciudad salta a la vista al evaluar el porcentaje de hogares en condición de pobreza por NBI. Como se puede observar en la tabla 1, en Medellín y el Valle de Aburrá existe un menor porcentaje de hogares respecto a las demás regiones del departamento.

Tabla 1 Porcentaje de hogares en condición de pobreza por NBI por subregión y zona en el Departamento de Antioquia.

Territorio	Rural	Urbano	Total
Medellín	4,82	7,45	7,40
Valle de Aburrá	8,91	7,85	7,90
Bajo Cauca	23,44	17,49	19,54
Magdalena Medio	17,35	17,94	17,70
Nordeste	22,32	32,26	27,82
Norte	19,19	16,13	17,47
Occidente	16,10	19,40	17,53
Oriente	8,81	9,00	8,93
Suroeste	15,80	16,56	16,19
Urabá	30,86	27,08	28,52

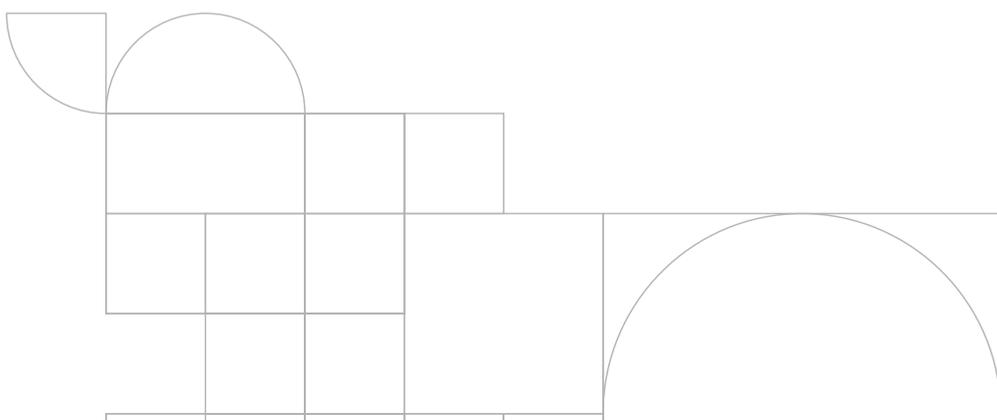
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida – 2021. Gobernación de Antioquia.

La siguiente subregión con menor porcentaje es Oriente (segunda región más urbanizada del departamento) y las subregiones con mayor porcentaje son Urabá, Nordeste y Bajo Cauca, coincidiendo con su menor conectividad con la capital departamental. Llama la atención que las regiones de Nordeste y Bajo Cauca, territorios marcados por economías extractivas auríferas, registren entre los mayores valores en comparación con las demás regiones del departamento, evidenciando como la explotación de los recursos naturales no ha conllevado a una mejoría en la satisfacción de necesidades de sus habitantes. Situación similar se presenta en el Urabá antioqueño, donde los ingre-

Los paisajes percibidos por los amplios monocultivos de plátano y banano no parecen verse reflejados en un beneficio para sus pobladores. Estos datos ayudan a explicar la gran densidad poblacional que concentra el Valle de Aburrá, con un 62% de la población departamental viviendo en el 1,8% del territorio, lo que genera grandes desequilibrios territoriales. Es un modelo inequitativo donde la ruralidad cada vez se percibe con menores condiciones para el desarrollo de una vida digna.

En este contexto, la construcción de grandes proyectos de infraestructura vial, como las Autopistas para la Prosperidad, trae consigo una transformación del paisaje rural. La mayor conectividad abre la puerta al crecimiento de actividades económicas ligadas a la producción agropecuaria de mayor escala, al desarrollo de centros logísticos o puertos secos y a la explotación turística. De esta manera, surgen retos asociados a cómo dichas oportunidades económicas puedan ser realmente aprovechadas y apropiadas por las comunidades locales y no únicamente por fuerzas económicas externas al territorio; haciendo necesaria la creación de valor territorial para sus habitantes.

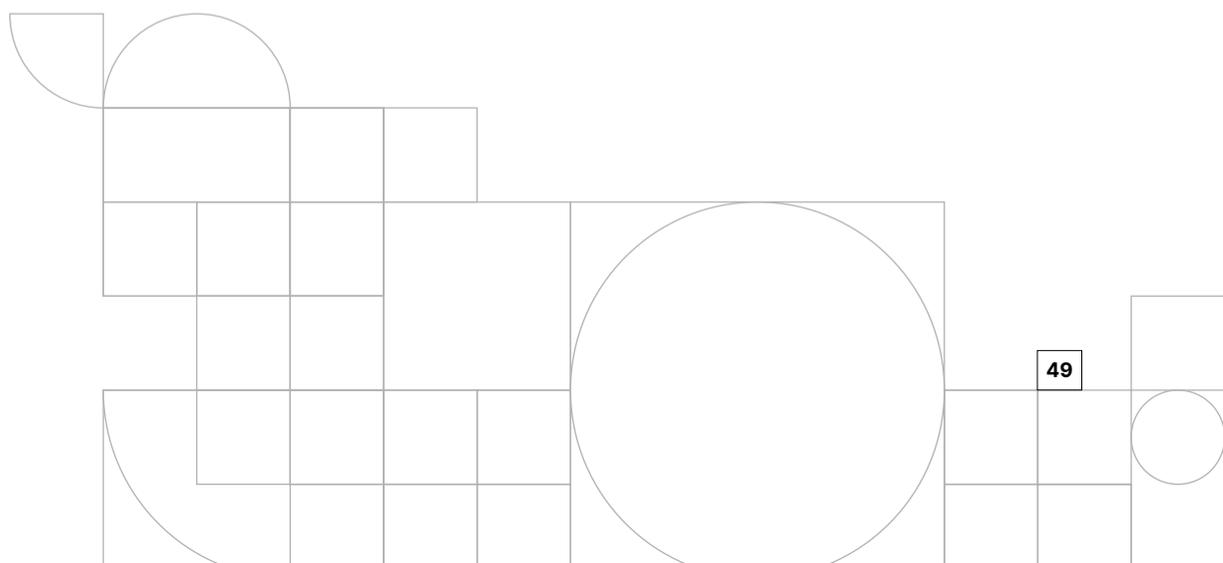
Es en este escenario de mayor cercanía, entre el campo y la ciudad, que el crecimiento desbordado y el ritmo desenfrenado de lo urbano ha llevado a los habitantes con mayores ingresos económicos a buscar la tranquilidad y cualidades paisajísticas de las zonas rurales, sin renunciar a las comodidades que brinda la ciudad. De allí surgen fenómenos de suburbanización y la consiguiente gentrificación de cada



vez más sectores rurales. Lo anterior, acentúa la inequidad, pues actividades urbanas vestidas de ruralidad desplazan la producción agropecuaria a lugares más remotos y se intensifica la marginación de la población campesina, quien no puede competir económicamente por el valor de estos suelos, acelerándose también los procesos de migración del campo a la ciudad.

En este panorama, se hace urgente el desarrollo de procesos enfocados en la transformación y desarrollo territorial desde y, no solo, hacia lo rural, con inversiones en el campo antioqueño enfocadas en la construcción de la equidad y del mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina, en donde se considere el valor natural, simbólico y cultural del territorio y se superen los sesgos urbanos que llevan a visualizar las zonas rurales como áreas baldías y deshabitadas, a la espera de ser trabajadas.

El desarrollo de una Medellín equitativa requiere poner en consideración las relaciones urbano-rurales que la ciudad teje con los demás municipios del Departamento, superando los límites de la región del Valle de Aburrá. No existirá equidad mientras Medellín se entienda como una “isla”, pues no es posible la construcción de equidad en las ciudades, mientras los pobladores rurales estén condenados a una menor calidad de vida por el hecho fortuito de nacer por fuera de un imaginario perímetro urbano.



Adaptación al cambio climático y equidad territorial

Las acciones para la adaptación al cambio climático deberán enfocar esfuerzos en los contextos más vulnerables.

En el marco de la crisis climática, las poblaciones más vulnerables, quienes en muchos casos coinciden con las poblaciones más afectadas por el conflicto, serán las que afrontarán de manera más crítica sus impactos, derivando en un desarrollo insostenible e inequitativo para la ciudad y la región.

Actualmente, desde la academia y el sector privado se adelanta la búsqueda de alternativas innovadoras que permitan reconocer los procesos de apropiación, mitigación y adaptación que hacen las comunidades en los territorios.

De esta manera será posible identificar estrategias que pueden ser implementadas inmediatamente, con efectos en la anticipación a pérdida humanas y materiales, la desincentivación de la ocupación en ecosistemas estratégicos y la adaptación de viviendas e infraestructura pública.

Una mirada integral, transdisciplinaria y con enfoque territorial, sumada a la capacidad articuladora y presupuestal de los gobiernos, permiti-



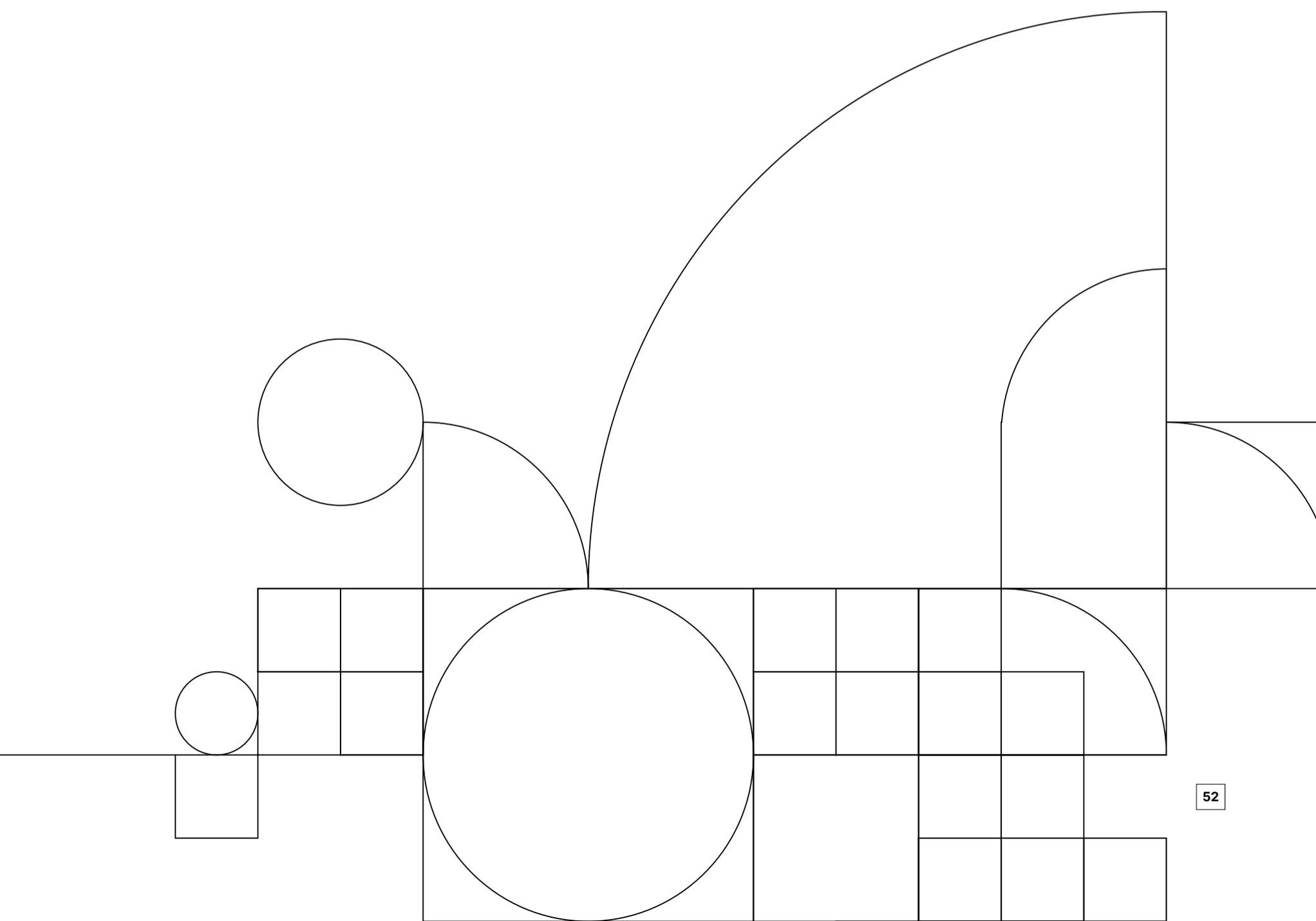
rá en el próximo cuatrienio pasar a la acción. Si bien hay responsabilidades político-administrativas en límites territoriales específicos, es necesaria la articulación y trabajo conjunto para abordar entornos de cuencas, bordes urbano-rurales, zonas con riesgo por deslizamiento, bordes costeros, zonas de protección ambiental, entre otros escenarios que pueden ser compartidos por diferentes territorios. Las soluciones de adaptación se encuentran tanto en la escala local como en la escala de la biorregión a la que pertenece. Por tanto, los mecanismos de asociatividad entre municipios, acuerdos y diálogos metropolitanos y supramunicipales y plataformas de incidencia deberán pasar a acciones compartidas, pero con responsabilidades específicas, en el marco de visiones estratégicas.

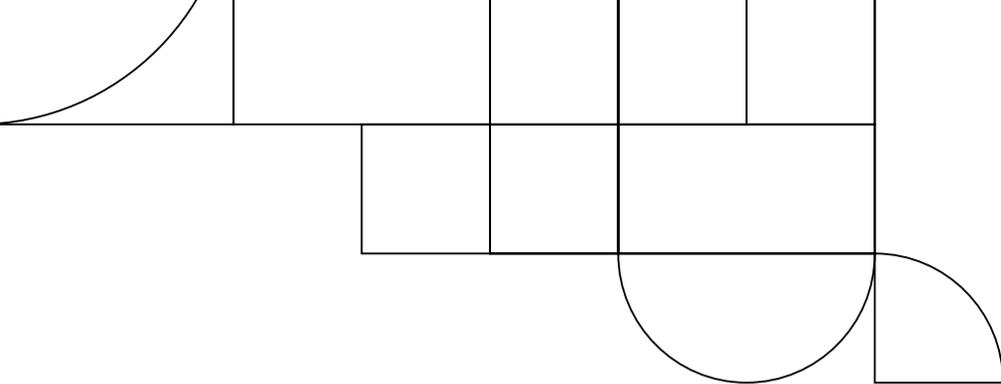
El enfoque de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y las nuevas tecnologías se deben integrar al diseño de la vivienda, el espacio público y las infraestructuras para la adaptación y mitigación al cambio climático . Por ejemplo, la ejecución de proyectos de mejoramiento Integral de barrios con las comunidades, la renovación urbana, las infraestructuras de movilidad y equipamientos.

Por tanto, orientar los esfuerzos a promover la justicia social y ambiental harán de la ciudad y la región un contexto en armonía con su naturaleza y competitivo para el desarrollo. Los pasos dados en el Urbanismo

Social pueden ser la base de un Urbanismo Climático, que incluya todos estos aspectos.

Esfuerzos en los que ha participado la Universidad EAFIT, como son Rehabilitar la montaña, el Sistema participativo de alertas tempranas InformaRisk, los Planes municipales Integrales para los Municipios de Urabá, la Visión estratégica para el Atrato, los aportes al desarrollo de la Provincia Cartama, entre otros, siguen siendo vigentes y pertinentes como un camino ya recorrido de diálogo, análisis y acciones para la estructuración de los planes de desarrollo.





Calidad del hábitat rural: principal problema de la vivienda en Antioquia

En Antioquia, el porcentaje de viviendas en déficit cualitativo duplica al porcentaje de viviendas en déficit cuantitativo. A su vez, en las zonas rurales el déficit cualitativo impacta el doble de porcentaje viviendas respecto a las zonas urbanas.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “el déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes”. Y “el déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional”

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2021, en el departamento el 19,31% de las viviendas califican como déficit cualitativo, frente a un 8,47% de las viviendas definidas dentro del déficit cuantitativo. La mayor magnitud de los problemas en la calidad de la

vivienda –sobre los problemas de cantidad- se repite en cada una de las subregiones, con excepción del Magdalena Medio, incluso para el Valle de Aburrá el porcentaje de viviendas en déficit cualitativo quintuplica a las viviendas con déficit cuantitativo.

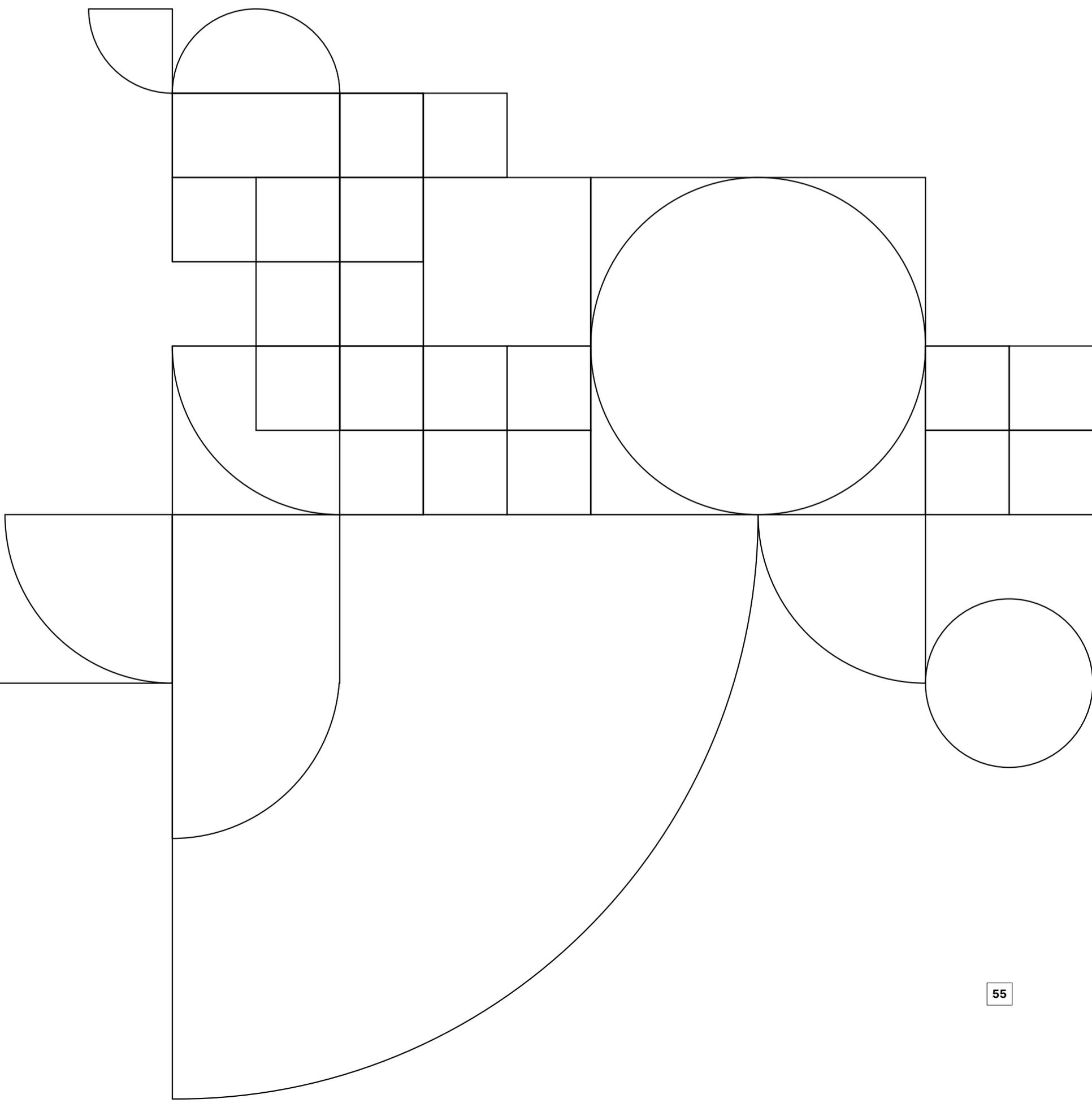
Adicional a lo anterior, esta encuesta evidencia que el porcentaje de viviendas en déficit (en sus dos modalidades) en todas las subregiones es superior en las zonas rurales respecto a las urbanas. Con un déficit cualitativo rural de 32%, que duplica el 16,18% de las zonas urbanas, y un déficit cuantitativo rural de 17,48%, que casi triplica el 6,26% de las zonas urbanas.

Tabla 1 Porcentaje de viviendas con déficit cuantitativo y cualitativo por subregión y zona en el Departamento de Antioquia

Territorio	Déficit cualitativo			Déficit cuantitativo		
	Rural	Urbano	Total	Rural	Urbano	Total
Antioquia	32,00	16,18	19,31	17,48	6,26	8,47
V. de Aburrá	21,42	14,91	15,32	5,95	3,70	3,84
Bajo Cauca	30,60	25,57	27,32	40,46	16,99	25,17
Magdalena M.	24,04	13,37	17,80	11,97	24,11	19,08
Nordeste	40,22	33,23	36,35	16,24	10,57	13,10
Norte	37,64	17,76	26,76	11,51	8,92	10,09
Occidente	37,79	24,18	31,94	15,67	14,45	15,14
Oriente	34,26	13,86	21,88	5,94	3,44	4,42
Suroeste	37,86	18,58	27,89	9,06	7,27	8,14
Urabá	29,46	21,15	24,32	56,28	29,65	39,81

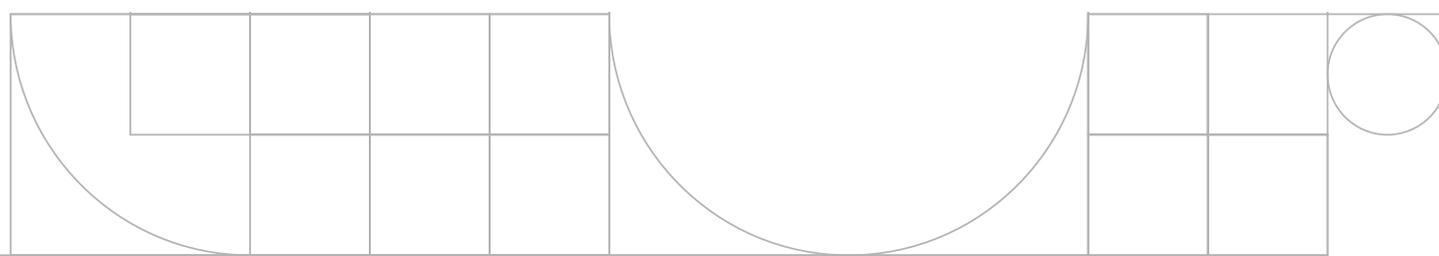
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida – 2021. Gobernación de Antioquia

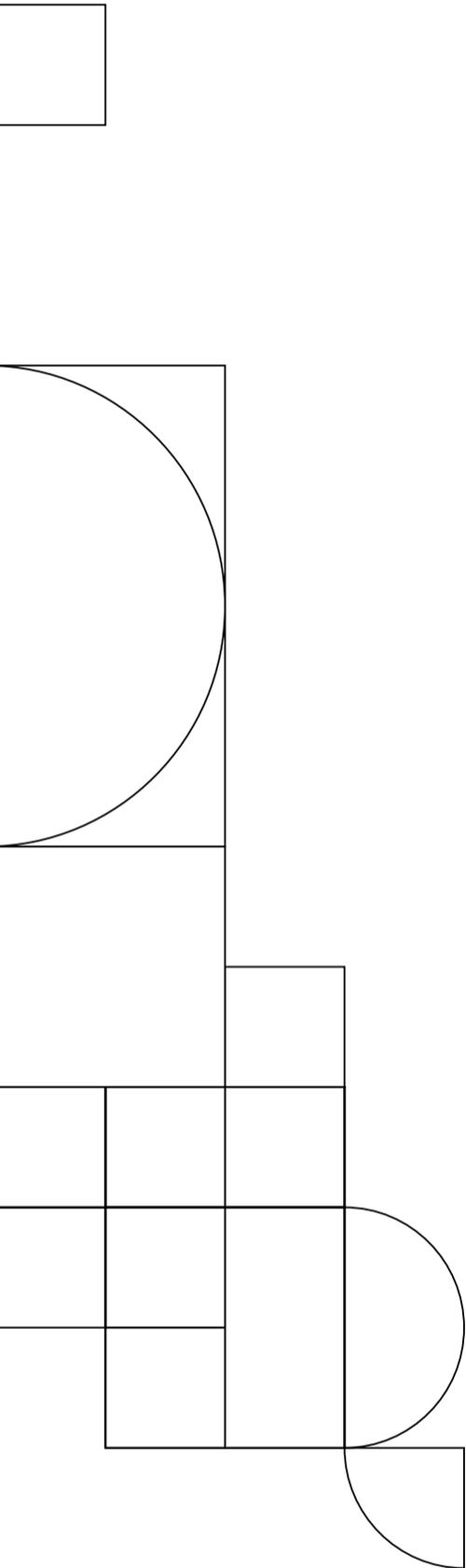
Es importante contrastar estos valores con la apuesta histórica con la que se ha atendido los problemas de la vivienda, donde se ha privilegiado la construcción de vivienda nueva en zonas urbanas, contrario a las soluciones que en realidad se necesitan para el territorio.



Antioquia, faro dinamizador de la transición energética nacional implementando estrategias de conversión energética y adaptación al cambio climático

La matriz energética en Colombia tiene una importante participación de la generación hidráulica como la fuente principal de generación eléctrica, con una elevada participación de la región antioqueña gracias a su riqueza hídrica. No obstante, existen deficiencias importantes en la distribución y dificultades de acceso a energía de zonas apartadas del país que no cuentan con infraestructura para acceder al sistema interconectado. Sumado a lo anterior, se tiene identificado que los procesos industriales, de transporte y de consumo en general de energía y combustibles en el país aprovecha tan solo cerca del 35% de la energía que se puede obtener de ellos.

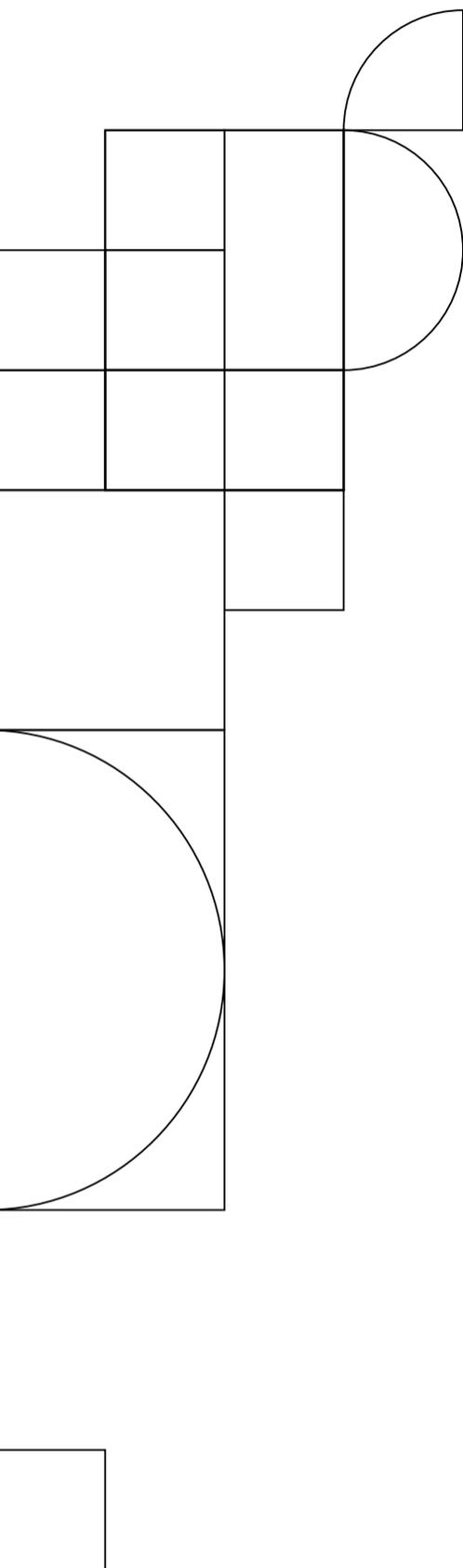




Los dos aspectos mencionados evidencian la necesidad de que las regiones contribuyan, desde sus particularidades y diversidad, con la ampliación del espectro de fuentes de energía que permitan la generación de energía propia en territorios no interconectados y a su vez aporten al incremento de la capacidad instalada de producción de energía eléctrica nacional. Adicionalmente, el crecimiento proyectado y la reindustrialización demandan la implementación de estrategias para un mayor aprovechamiento de la energía en todos los procesos de consumo humano, por lo que la transición energética en Colombia traza retos regionales y locales orientados a la diversificación de fuentes de energía aprovechando la capacidad distribuida que las regiones tienen dadas sus características particulares, de modo que se facilite el acceso a la energía de la población.

Con base en lo expuesto, se identifican los aspectos que requieren una alta priorización y que deben atender los gobiernos venideros:

1. Establecimiento de mecanismos de integración en vías con infraestructura de movilidad eléctrica, como las zonas de recarga para vehículos eléctricos.



2. Programas basados en identificación de fuentes de biomasa derivados de producción agrícola y actividades forestales, para aprovechamiento en producción de energía (identificación de fuentes, modelos logísticos de acopio y transporte). Ciclo completo hasta implementar plantas de aprovechamiento de la biomasa para producción de energía en subregiones del departamento y zonas rurales.
3. Programas de acompañamiento rural para implementación técnica de fuentes de energías renovables, entrenamiento y capacitación de poblaciones y líderes para la apropiación del conocimiento necesario en la implementación de fuentes de energía renovables.
4. Promoción y reglamentación de comunidades energéticas urbanas, suburbanas y rurales (creación de comunidades energéticas y reglamentación de uso, acceso y tarifas) con estrategias de diferenciación por localización que facilite el acceso.
5. Programas de promoción de aprovechamiento de fuentes hídricas de pequeña escala para generación de energía eléctrica por picocentrales hidroeléctricas (PCHs) en zonas rurales y subregiones del departamento.

6. Integración de estrategias con gobiernos locales para lograr mejoras en el aprovechamiento energético de sectores industriales (apoyados en tecnologías de industria 4.0) y de transporte (modelos de optimización de ruteo, operaciones y logística de distribución conectado con tecnologías de monitoreo y seguimiento).

Capítulo 3

Futuros de la educación

Desde EAFIT tenemos el propósito forjar futuros para la educación que transformen de manera sostenible las prácticas y los ecosistemas de aprendizaje eafitenses, locales y globales.

Autores**Claudia Zea**

Directora Centro Imaginar Futuros

Diego Leal

Director asociado Centro Imaginar Futuros

Yamile Galeano

Líder ecosistema de formación Centro Imaginar Futuros

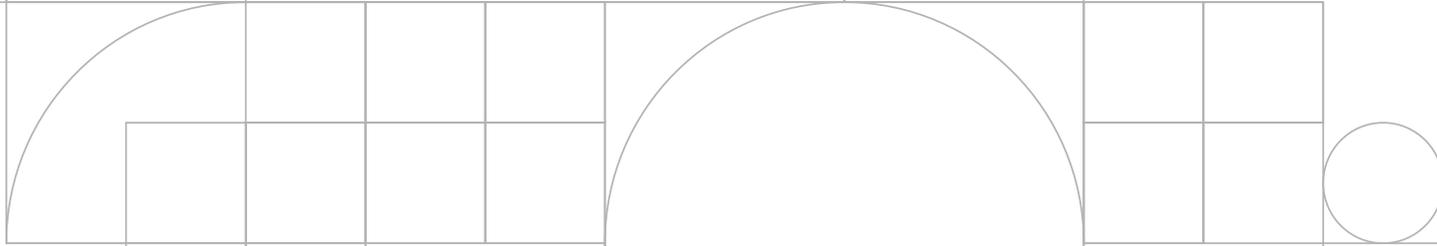
Mario Vargas

Director de EAFIT Social

La oportunidad de imaginar y co-crear futuros posibles y deseables

Toda sociedad refleja en gran medida el efecto de las decisiones de sus líderes. En su seno se gestan de manera permanente nuevos liderazgos, inspirados en los más diversos matices e ideologías, pero pareciera que a todos les incita el promover el bienestar de las comunidades para las que se postulan. La pregunta obligada se sitúa en ¿desde donde asegurar efectividad y coherencia en dicha competencia? Durante muchos años, al menos en el concierto político y social, pareciera que era un asunto hereditario, con todo lo paradójico que esto plantee, sin embargo, gracias a la dinámica de los tiempos ha cobrado relevancia el formarse al liderazgo como complemento de la vocación y condición natural del líder.

Una primera evidencia brota de la pertinencia a partir de una afirmación universalmente consensuada: no se puede influir sobre lo que no se conoce. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, potencia mundial de la vida” señala la obligación de promover las cátedras obligatorias en historia, geografía, educación física en la etapa básica y media en todas las instituciones educativas del país, así como la educación en artes y programación. Leer el contexto, validar



de manera participativa las iniciativas y demandas sociales y comunitarias en un territorio específico, se convierte en un lente urgente de activar. Siguiendo este hilo, la información verificada y el conocimiento aplicable será una adecuada proveeduría y un entrenamiento ideal para un sano liderazgo. El rol de la academia en este asunto será, sin lugar a duda, el de ofrecer herramientas y métodos para estimular dicha agudeza visual, así como observar y ordenar el conocimiento y la experiencia social para devolverla en contenido, aprendizaje, reto y oportunidad de nuevo conocimiento.

La aspiración de “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”¹ exige talento, competencia y capacidad en quienes asuman el reto de hacerlo posible, a la vez que sensatez de saber que no podrán hacerlo solos.

La colaboración armónica entre los distintos niveles de decisión pública, la participación de la ciudadanía, los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el uso de la información territorial en la toma de decisiones integrales y coordinadas y la adecuada prestación de servicios al ciudadano relacionados con derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tenencia, uso, valor y desarrollo del territorio, demandan conocimientos específicos, datos validados, realidad vivida y talento entrenado, acciones todas que reflejan el ser y que hacer de la academia,

¹ Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida

como actor preponderando del desarrollo y bienestar de la sociedad.

El período 2020-2023 estuvo marcado por dos hitos que perturbaron las rutas trazadas para el desarrollo de los procesos educativos en todo el planeta: la ocurrencia (antes inimaginable) de una pandemia que reveló importantes brechas de aprendizaje, profundizó en otras ya existentes y representó un retroceso en diversos indicadores de desarrollo social; y la masificación de la inteligencia artificial como señal de un futuro con cambios profundos en los mercados laborales y en las profesiones, que plantea tanto retos como oportunidades para el cierre de brechas educativas y sociales. Los años siguientes serán decisivos para que la política pública territorial defina las bases que aceleren la recuperación de aprendizajes y promuevan una transformación de paradigmas que nos lleve a un futuro de la educación más equitativo y floreciente.



Calidad e innovación educativa: hacia una transformación de paradigmas que contribuya al cierre de brechas

La Agenda Antioquia 2040² promovió una discusión amplia en la que la educación se perfila como motor de transformación social, que “desde la innovación y la tecnología potencia la cohesión y el capital humano, aporta a la disminución de desigualdades, a la construcción de paz y al reconocimiento de la identidad cultural”³. Para las comunidades participantes en el diálogo, la educación y formación es el aspecto prioritario de inversión que, aunque ocupa el quinto lugar en cuanto a demandas sociales, está íntimamente ligado al desarrollo económico, rural y agropecuario, así como a las preocupaciones sobre cultura e identidades, y ambiente y sostenibilidad⁴.

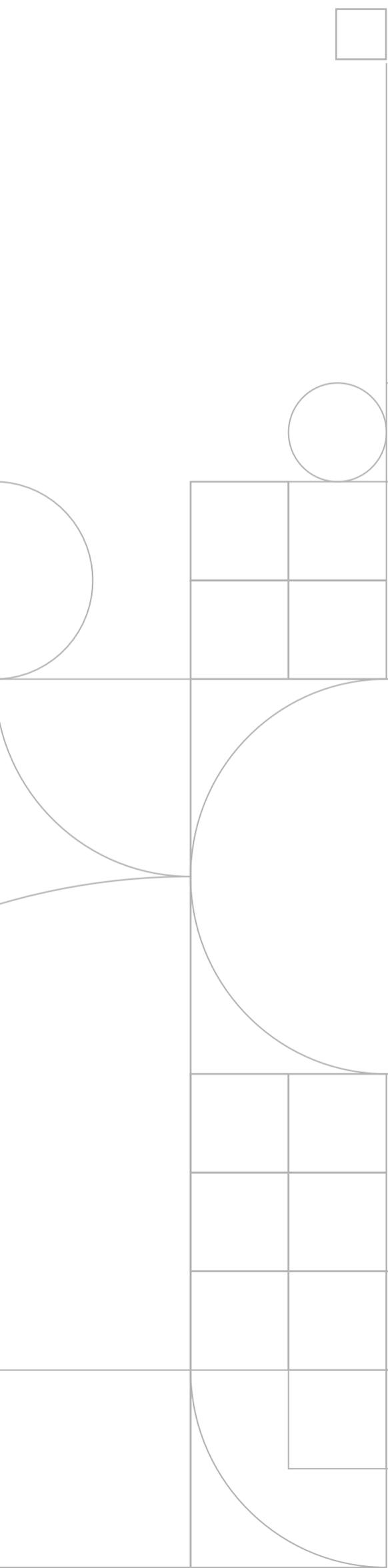
Los próximos años representan una oportunidad y a la vez un desafío, no sólo de alinear la política pública con las propuestas expresadas por las comunidades del departamento, sino de sentar las bases que

² Gobernación de Antioquia (2021). *Agenda Antioquia 2040: Gran diálogo social por la vida*.

<https://agendaantioquia.com/wp-content/uploads/2022/08/Gran-dialogo-social-por-la-vida.pdf>

³ Gobernación de Antioquia (2021). *Visión Antioquia 2040*. <https://agendaantioquia.com/visionantioquia2040/>

⁴ Gobernación de Antioquia (2021). *Participación Antioquia 2040*. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiZTNmOTdhOWUt-NjkyMC00YWl2LThiYzEtMWFmYjEzNmRiMDgwliwidCI6IjY0MmYxNTllLThmMTItNDMwOS1iODdjLWNiYzU0MzZlYzY5MSlsmMiOjR9>



permitan avanzar hacia los futuros delineados para 2030, 2040 y 2050. Para este fin, es clave desarrollar capacidades, en todos los actores educativos, para comprender y aprovechar la cuantiosa información existente y usarla en la toma de decisiones, los datos del Observatorio de Trayectorias Educativas del Ministerio de Educación⁵, del Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación⁶, de la Lupa para la Educación de Antioquia⁷ de Proantioquia y la Línea de base de la Agenda Antioquia 2040, así como la información de las Pruebas Saber y Evaluar para Avanzar que provee el ICFES.

Sin embargo, tomar las mejores decisiones es sólo una parte del reto. También será necesario implementar, en una escala departamental, iniciativas que vinculen a los actores educativos de manera coordinada, generen las capacidades necesarias para gestionar la innovación educativa y avancen en la transformación de paradigmas, aprovechando el camino recorrido hasta el momento.

Entre las herramientas útiles para este fin se encuentra el Índice de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional, que, durante 2022, recopiló información sobre la situación de las sedes

5 Observatorio de Trayectorias Educativas. <https://ote.mineduccion.gov.co/>

6 Observatorio a la Gestión Educativa. <https://obsgestioneducativa.com/>

7 Lupa para la Educación de Antioquia. <https://proantioquia.org.co/lea>

educativas frente a diversos aspectos de la innovación educativa. Igualmente, entre 2020 y 2022 se llevaron a cabo procesos de acompañamiento que permitieron, a los equipos de las secretarías de educación del Departamento, hacer un reconocimiento de sus capacidades y definir planes territoriales de innovación educativa, que construyen sobre la experiencia de la Universidad EAFIT en el desarrollo de iniciativas encaminadas a la consolidación de culturas de innovación en el contexto escolar, como el Plan Digital Itagüí y el Plan Saber Digital (Bogotá).

Cabe destacar que el momento actual amerita, adicionalmente, una exploración de las implicaciones de las soluciones de inteligencia artificial en el contexto educativo local, aspecto que no estaba tan presente en el panorama durante la elaboración de la Agenda Antioquia 2040. Los próximos cuatro años serán decisivos para que los niños y niñas que están actualmente en los grados iniciales cuenten con las bases necesarias para habitar un mundo que podrá estar marcado por la automatización y en el cual las habilidades de lectura y comprensión textual, lógico-matemáticas, digitales y, sobre todo, socioemocionales serán fundamentales para prosperar y avanzar en la comprensión cambiante de lo que nos hará únicos como humanos.

Acceso y cobertura rural: un desafío histórico con futuros posibles

En Colombia, la educación rural ha sido un desafío histórico debido a la falta de acceso a recursos y a infraestructuras educativas adecuadas. A pesar de que la cobertura educativa en las zonas rurales ha mejorado en los últimos años (según datos del Ministerio de Educación), aún existe una brecha significativa en comparación con las áreas urbanas, la cual está evidenciada en los indicadores educativos compartidos por diversas entidades.

La dispersión geográfica, sumada a las limitaciones de conectividad, aumenta los retos desde el punto de vista de la gestión pública, al dificultar la comunicación entre los establecimientos educativos y los equipos de las Secretarías de Educación. Experiencias recientes lideradas por la Universidad EAFIT muestran la importancia de implementar modelos de acompañamiento técnico específicos para la ruralidad, que tengan en cuenta la diversidad de las regiones, que propendan por la consolidación de ecosistemas territoriales y que promuevan el desarrollo de liderazgos distribuidos entre los múltiples actores, a partir de un ejercicio de escucha activa y fortalecimiento de la empatía. Si bien los datos son relevantes para lograr una mirada comprensiva del territorio, el acercamiento respetuoso a la vivencia de las comuni-



dades es fundamental para fortalecer el sentido de posibilidad y alinear expectativas y necesidades.

En esta línea, acompañar a las comunidades en el análisis del Plan Especial de Educación Rural (PEER) ayudará a asumir la educación rural como un proceso de desarrollo territorial que contribuya al desarrollo de procesos de aprendizaje desde una visión social, educativa y comunitaria, conectada con las oportunidades globales y a la vez con las identidades locales.

De manera similar, la puesta en marcha de procesos de formación que ayuden a los profesores a reconocer sus ambientes y redes personales de aprendizaje y las oportunidades existentes para enriquecerlos a lo largo de sus carreras profesionales, enfocados en procesos de reflexión y prácticas de enseñanza en el aula informadas por la evidencia, la combinación de materiales educativos pertinentes para los territorios y en el cultivo activo de comunidades de práctica en microrregiones, son aspectos relevantes para

que el docente se convierta en un modelo efectivo de los hábitos de aprendizaje necesarios para prosperar en el futuro.

Es claro que estas acciones deberán tener como trasfondo la disminución de las brechas en el desarrollo de competencias básicas, especialmente en procesos de lectura, escritura y pensamiento matemático, que en muchos casos se suman a la deserción escolar observada durante la pandemia, así como a la necesidad de contar con estrategias de continuidad que aumenten la resiliencia del sistema educativo, frente a nuevas crisis sanitarias, ambientales o de otros tipos.

El aprovechamiento de las oportunidades derivadas del incremento en el acceso de la tecnología; de los nuevos modelos híbridos de aprendizaje, que se han fortalecido después de la pandemia; de los enfoques en habilidades prácticas y vocacionales acorde con los contextos de los territorios; de la aparición de nuevas formas de colaboración a través de comunidades y redes de apoyo, y del enfoque en la sostenibilidad y la educación ambiental requerirá de mecanismos de acompañamiento multinivel que fortalezcan las capacidades de las secretarías de educación municipales para que acompañen, a su vez, a las sedes educativas en el desarrollo de planes de fortalecimiento factibles y orientados a la creación de mejores futuros para los estudiantes, sus familias y sus comunidades.

Educación para los empleos del futuro: el desafío de crear desde hoy un ecosistema laboral articulado, flexible y resiliente

El reciente estudio sobre el *Futuro de los trabajos*, editado por el Fondo Económico Mundial⁸, presenta un panorama comprensivo de las fuerzas que están impulsando la transformación de los mercados laborales y las prioridades en desarrollo de habilidades para los próximos cinco años. Aspectos como la disminución en el poder adquisitivo de los salarios como resultado del aumento global en el costo de la vida (que localmente resuena con el 29,3% de antioqueños que en 2021 no tenían ingresos suficientes para suplir sus necesidades básicas⁹); las expectativas cambiantes y las preocupaciones de los trabajadores sobre la calidad del trabajo, y la aceleración de la adopción de tecnologías, como la inteligencia artificial generativa en todas las áreas de la actividad humana, plantean retos inmediatos para la educación en todos los niveles.

8 World Economic Forum (2023). *Future of Jobs Report 2023*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>

9 Medellín Cómo Vamos (2022). *En Medellín y el Valle de Aburrá disminuye la pobreza, pero aún no se recuperan niveles prepandemia*. <http://www.medellincomovamos.org/pobreza-en-medellin-disminuye-en-2021>

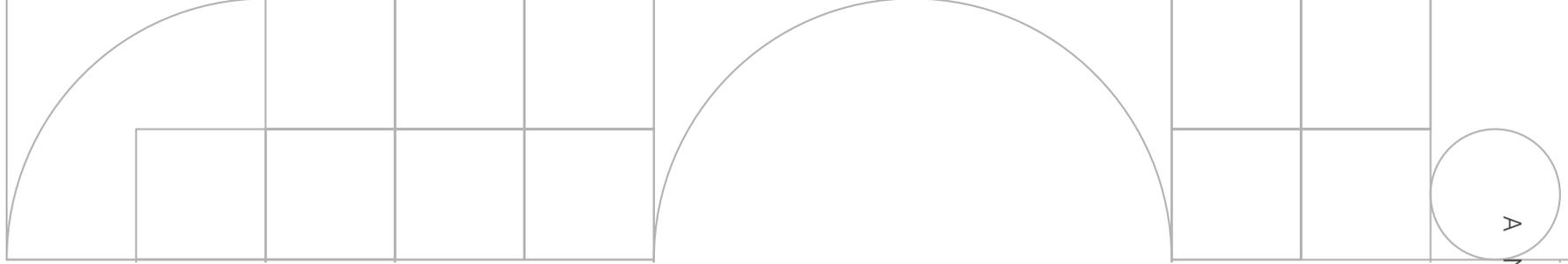
En esta línea, es clave **consolidar nuevas rutas para el desarrollo de talento** que complementen aquellas existentes a través de la educación formal, que resulten pertinentes para los jóvenes que no estudian, ni trabajan (los cuales alcanzan un 23% de la población de jóvenes en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá¹⁰). El Centro Nodo, de la Universidad EAFIT, ya adelanta propuestas en esta dirección, que se suman a la labor que realiza el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) y que pueden enriquecerse con otras iniciativas de aceleración de talento, como The Knowledge Society (TKS)¹¹, que permitan disminuir la tasa de desempleo en población joven (15 a 28 años), que, para el caso de Medellín, alcanza un 17,5% en 2023¹².

Un reto inmediato para la política pública es lograr la articulación de un ecosistema de desarrollo del talento que logre fortalecer la oferta formal existente y articularla con los numerosos actores emergentes que ofrecen experiencias de aprendizaje no formales. Sentar las bases de modelos de upskilling y reskilling efectivos y ágiles, que atiendan las brechas de ocupación existentes (en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la bre-

10 Alianza por la Inclusión Laboral (2022, p.48). *Informe nacional de empleo inclusivo INEI 2021-2022, AM Valle de Aburrá*. <https://www.fundacioncorona.org/sites/default/files/Valle%20de%20aburra.pdf>

11 The Knowledge Society. <https://www.tks.world>

12 DANE (2023). *Mercado laboral: Gran encuesta integrada de hogares*. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/EMPLEO_DESEMPLEO/pres-GEIH-abr2023.pdf



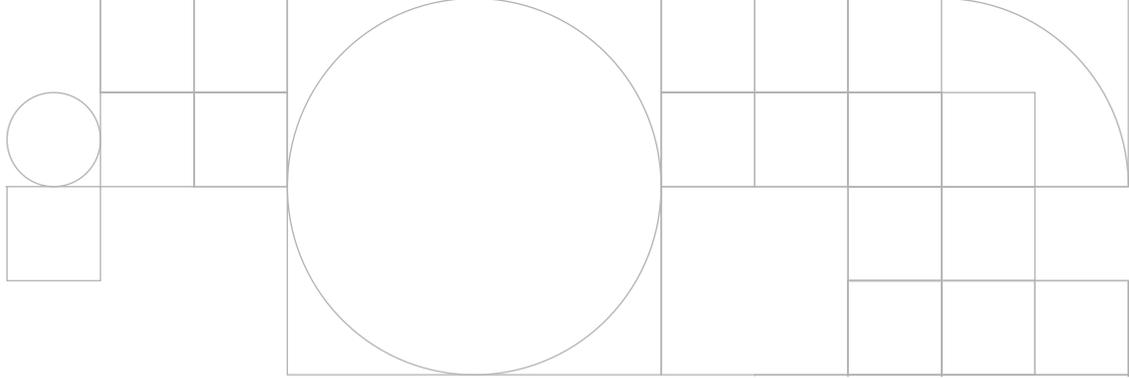
cha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres para 2021 era de 4,3%)^{13,14}

Adicionalmente, será relevante profundizar en el análisis de las implicaciones del cambiante y complejo ecosistema laboral global, que no sólo ha posicionado a Medellín como un destino muy atractivo para los nómadas digitales, sino que, gracias al trabajo remoto, está permitiendo a ciudadanos en diversos municipios del departamento acceder a ventajosas opciones laborales internacionales. Es importante que el desarrollo de las competencias –digitales, socioemocionales, financieras, de idioma, entre otras– que permitan a más niños, niñas y jóvenes aprovechar estas oportunidades, esté acompañado de una discusión sobre los impactos positivos y negativos tanto a nivel individual como comunitario.

Sin embargo, lo más retador no es encontrar soluciones para los problemas de hoy, sino identificar rutas que permitan contar con experiencias educativas “a prueba de futuro”, desarrollando desde ya las habilidades que serán indispensables en los próximos 20 años y que permitan consolidar un ecosistema laboral flexible y resiliente. En este sentido, la política pública en educación necesita seguir profundizando en temas como la robótica y las áreas STEAM, mientras empieza a explorar de manera más clara la relación entre el desarrollo de competencias y la sostenibilidad; las economías circulares y regenerativas, y la generación de nuevos emprendimientos que propendan por el florecimiento de la humanidad.

¹³ Alianza por la Inclusión Laboral (p.45). *Informe nacional de empleo inclusivo INEI 2021-2022, AM Valle de Aburrá.*

¹⁴ DANE, *Mercado laboral: Gran encuesta integrada de hogares.*



Liderazgo y educación

Aprendí de mi padre la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas. El no vanagloriarme con los honores aparentes; el amor al trabajo y la perseverancia; el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución a la comunidad.

Marco Aurelio, Meditaciones, 16.

¿Cuáles asuntos realmente tocan de manera directa la relación entre la educación y el liderazgo para contribuir al bienestar de la sociedad? Un primer asunto recae en el binomio conocimiento – empleabilidad, siendo esta última variable un movilizador de bienestar relevante por su capacidad de generar valor económico directo e indirecto e, incluso, contribuir a través de la dinámica productiva al incremento de la demanda agregada, en la medida en que los salarios se convierten en liquidez al interior de los circuitos económicos de satisfacción de necesidades. Datos recientes de la Encuesta del mercado laboral realizada por el DANE¹⁵ ofrecen elementos concretos de análisis.

El PND señala estrategias y caminos sobre los que estas brechas pueden ser cerradas: el fortalecimiento de una oferta de servicios para la formación, el bienestar, la generación de ingresos, fortalecimiento de capacidades para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, así como servicios de cuidado y de desarrollo de capacidades para las personas que requieren cuidado o apoyo, pero también

¹⁵ DANE, Mercado laboral: Gran encuesta integrada de hogares.

demandas en el liderazgo y la toma de decisiones a nivel local y territorial para el fortalecimiento de las estrategias de ampliación y uso significativo del tiempo escolar y la protección de las trayectorias de vida y educativas para aumentar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, a través de una oferta educativa más diversa con formación integral, que integre la cultura, el deporte, la recreación, la actividad física, las artes, la ciencia, la programación, la ciudadanía y la educación para la paz.

Relevante, en una sociedad que reclama a gritos la equidad y la integración, es el desafío de garantizar que personas con discapacidad ingresen a la educación superior, permitiéndoles el goce efectivo del derecho a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y graduación. Esto no se resuelve solo con cupos o deseos sino con formación especializada e inversión en los distintos escenarios formativos y sociales y con la premisa que la discapacidad no es un asunto de personas, sino de familia y sociedad. Esto lo valida el estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Saldarriaga Concha¹⁶.

Como estos, son múltiples los retos que demandan del liderazgo educado y consolidado su acción firme y objetiva, incluso en la consolidación de una estrategia integral para democratizar las TIC y desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología en el país; en el establecimiento de programas de alfabetización digital con enfoque étnico, participativo, de género y diferencial; en el fortalecimiento de las instituciones públicas, privadas, mixtas y populares, orientadas a

16 Fundación Saldarriaga Concha y Laboratorio de Economía de la Educación, LEE de la Pontificia Universidad Javeriana (2023). *La educación en Colombia para población con discapacidad, realidades y retos*. <https://lee.javeriana.edu.co/documents/5581483/7042223/educaci%C3%83%C2%B3n-poblacdiscapacidad2023.pdf/82562bc0-279d-bacc-2603-03ba1d3b2ec5?t=1677678590206>

la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de los procesos productivos del sector de las culturas, las artes y los saberes, que garanticen la creación, producción, circulación y apropiación de las expresiones artísticas y culturales en todo el territorio nacional; en el diseño y fortalecimiento de programas, proyectos y estrategias destinados a fomentar las vocaciones y la formación en CTel, a generar el conocimiento y las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de alta calidad, así como a promover la transferencia y apropiación del conocimiento, con el fin de generar impactos positivos en los ámbitos social, ambiental y económico del país, como lo señala el PND.

De “Los futuros inevitables de la universidad. Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida”¹⁷ recogemos la invitación desde la academia a empatizar, redescubrir y valorar las capacidades propias y a iniciar una conversación estratégica en todas las instancias de la universidad que le permita analizar y comparar, de manera permanente, aquellos sectores sociales y empresariales en los que la universidad tiene capacidades de intervenir, aportar y diferenciarse, para construir o comprender de manera colectiva y participativa una visión compartida, un propósito de transformación masiva, una causa a la que quiera unirse.

Desde el liderazgo una invitación a la actualización consciente, a la formación rigurosa, a la conciliación de intereses locales con desafíos globales a la luz de los principios de una gestión regenerativa de nuevas estrategias centradas en la justicia, la paz y la equidad, como pilares de la ética y el bienestar de la sociedad.

¹⁷ Pardo, H. (2023). *Los futuros inevitables de la universidad. Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida*. https://futurosdeluniversidad.net/wp-content/uploads/2023/05/Futuros_Universidad_HPK.pdf

Referencias

Alianza por la Inclusión Laboral (2022). *Informe nacional de empleo inclusivo INEI 2021-2022, AM Valle de Aburrá*. <https://www.fundacioncorona.org/sites/default/files/Valle%20de%20aburra.pdf>

DANE (2023). *Mercado laboral: Gran encuesta integrada de hogares*. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/EMPLEO_DESEMPLEO/pres-GEIH-abr2023.pdf

Departamento Nacional de Planeación (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida*. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026/Paginas/default.aspx>

Fundación Empresarios por la Educación (2022). *Observatorio a la Gestión Educativa*. <https://obsgestioneducativa.com/>

Fundación Saldarriaga Concha y Laboratorio de Economía de la Educación, LEE de la Pontificia Universidad Javeriana (2023). *La educación en Colombia para población con discapacidad, realidades y retos*. <https://lee.javeriana.edu.co/documents/5581483/7042223/educaci%C3%83%C2%B3n-poblacdiscapacidad2023.pdf/82562bc0-279d-bacc-2603-03ba1d3b2ec5>

Gobernación de Antioquia (2021). *Agenda Antioquia 2040: Gran diálogo social por la vida*. <https://agendaantioquia.com/wp-content/uploads/2022/08/Gran-dialogo-social-por-la-vida.pdf>

Gobernación de Antioquia (2021). *Visión Antioquia 2040*. <https://agendaantioquia.com/visionantioquia2040/>

Gobernación de Antioquia (2021). *Participación Antioquia 2040*. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiZTNmOTdhOWUtNjkyMC00YWI2LThiYzEtMWFmYjEzNmRiMDgwliwidCI6IjY0MmYxNTIILThmMTItNDMwOS1iODdjLWVNiYzU0MzZiYzY5MSIsImMiOjR9>

Medellín Cómo Vamos (2022). *En Medellín y el Valle de Aburrá disminuye la pobreza, pero aún no se recuperan niveles prepandemia*. <http://www.medellincomovamos.org/pobreza-en-medellin-disminuye-en-2021>

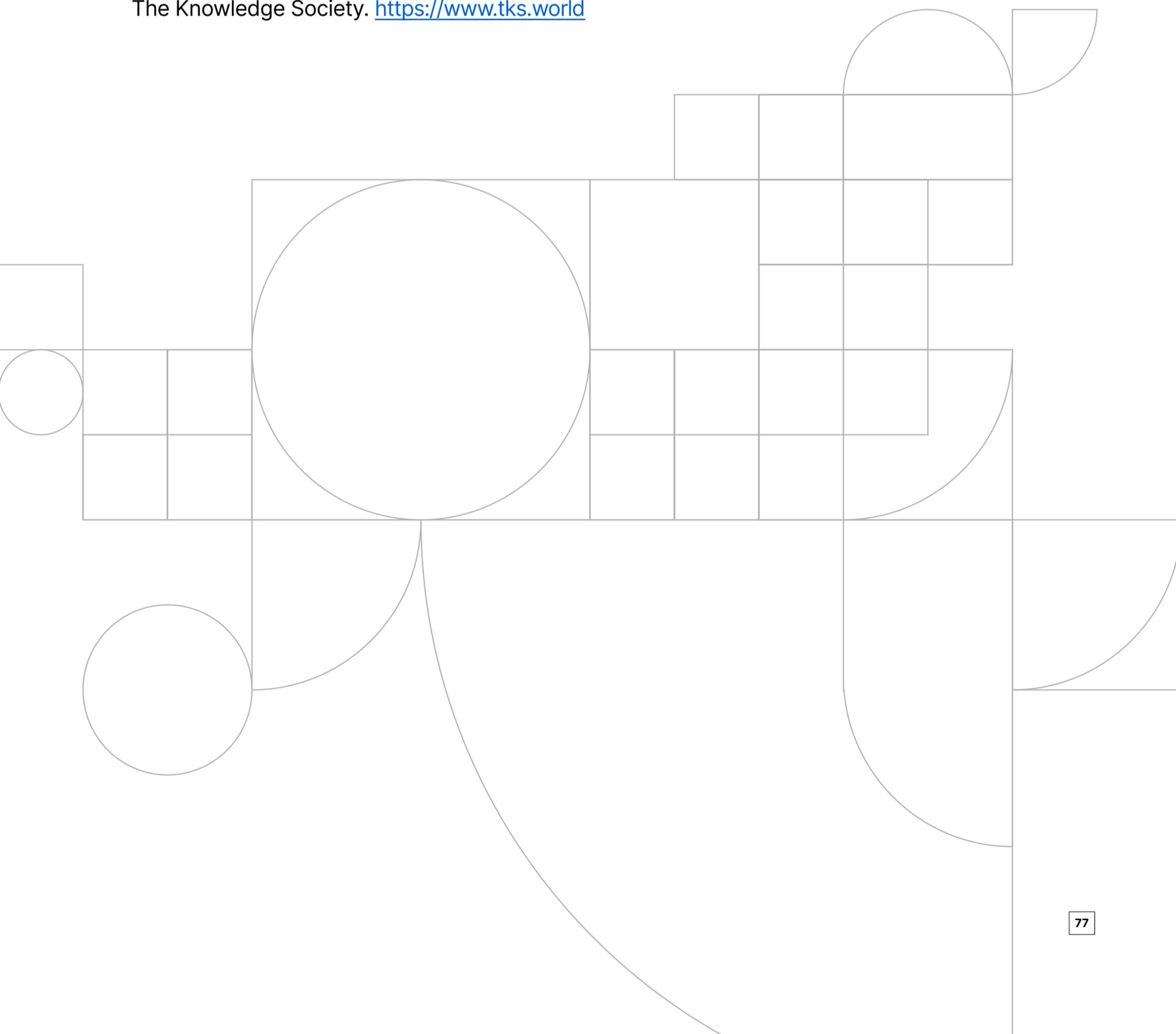
Ministerio de Educación Nacional (2022). *Observatorio de Trayectorias Educativas*. <https://ote.mineduacion.gov.co/>

Pardo, H. (2023). *Los futuros inevitables de la universidad. Ideas para gestores hacia la consolidación híbrida*. https://futurosde launiversidad.net/wp-content/uploads/2023/05/Futuros_Universidad_HPK.pdf

Proantioquia (2023). *Lupa para la Educación de Antioquia*. <https://proantioquia.org.co/lea>

World Economic Forum (2023). *Future of Jobs Report 2023*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>

The Knowledge Society. <https://www.tks.world>



Capítulo 4

Cuidado y bienestar

La Universidad está fortaleciendo su sistema de ciencias del cuidado y de la vida, partiendo de un principio de respeto por la vida como base para el autocuidado, para el bien ser, el bien vivir y el bien estar. Esta es una visión amplia del universo, como el lugar común que habitamos y nos lleva a entender que somos parte de la naturaleza y estamos conectados con la tierra y la vida.

Apuntes para la superación de la pobreza en Antioquia

Autores

Olga Lucia Romero

Directora de Valor Público, Centro de Estudios e Incidencia de EAFIT.

Andrea Echavarría

Analista de Valor Público EAFIT.

Enfrentar la pobreza y la desigualdad debe ser prioritario en las agendas públicas de quienes aspiran a los cargos públicos departamentales. Ello obedece no solo a que en la crisis sanitaria se evidenciaron bajas condiciones para controlar los indicadores de pobreza, sino también porque esta problemática ha dejado en evidencia serias desigualdades territoriales en el departamento que es necesario zanjar (Muñetón y Vanegas, 2014).

Para 2021, de acuerdo con las cifras del DANE, Antioquia tenía una incidencia de pobreza del 29,3%, es decir que alrededor de 2.000.000 de personas, 3 de cada 10 personas, en Antioquia sobrevivían con menos de \$366.566 al mes. La pobreza extrema fue de 7,3%, un poco más de 500.000 personas sobrevivían con menos de \$153.700 al mes. Entre 2012 y 2019, Antioquia había logrado reducir la pobreza en alrededor de 5 puntos porcentuales, sin embargo, la pandemia trajo

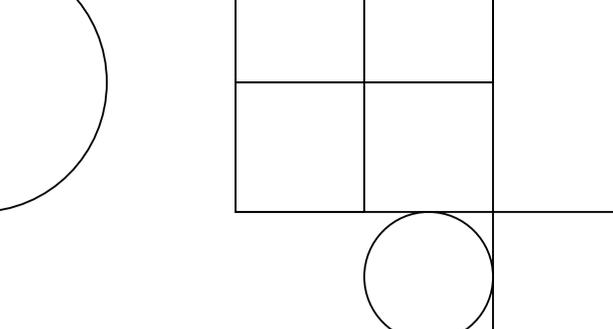
una afectación importante a los más vulnerables, incrementando la incidencia de la pobreza a niveles del 2012, un retroceso de casi 10 años. En el 2021 Antioquia logró retomar la senda prepandemia, sin embargo, sus niveles siguen siendo altos y es importante que se sigan focalizando esfuerzos para la disminución de la pobreza y la desigualdad y alcanzar el objetivo de su erradicación total.

Para entender mejor la pobreza y desigualdad en el departamento, el índice de pobreza multidimensional (IPM) del 2022 evidencia donde se encuentran los principales rezagos. Si bien se ha venido presentado una reducción en el índice, pasando de 27,6% en 2010 a 10,7% en el 2022, se evidencia una diferencia importante entre zona urbana y rural del departamento. Esto se ha analizado a la luz de lo que se conoce como distribución espacial de la pobreza, medida a través de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde la distribución de estas muestra una correlación espacial de primer orden entre los municipios del departamento. Así, los municipios centrales tienen un porcentaje de población con NBI por debajo de la media, contrario a lo que ocurre con los municipios de la zona de frontera (Muñetón y Vanegas, 2014; Valencia, 2017).

Las políticas implementadas para la disminución de la pobreza y desigualdad deben partir no solo



desde el enfoque territorial, sino también desde una perspectiva de construcción de paz e implementación de los Acuerdos. Lo anterior teniendo en cuenta estudios que evidencian que la experiencia del conflicto armado es uno de los obstáculos para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza (Loaiza, et al., 2018; Muñetón y Maya, 2016). Entre las recomendaciones para los aspirantes a la gobernación se destaca la importancia de focalizar políticas públicas para insertar a las subregiones periféricas en las dinámicas de desarrollo social y económico, apostando a estrategias para la promoción de nuevas actividades productivas y mayor generación de valor y diversificación de las economías rurales. Al respecto, el índice de Calidad de Vida nos indica que se deben focalizar esfuerzos en la región de Bajo Cauca y Urabá.



Adicionalmente, se destaca entre los principales retos la prevalencia del trabajo informal, con 66% de los hogares con privación en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el bajo logro educativo, con 39,9% de los hogares en privación, además de haber sido el indicador que tuvo un mayor incremento entre 2021 y 2022, y el rezago escolar, con 22,9% de hogares con privación. Así, los principales esfuerzos de política del departamento se deben enfocar a la generación de empleo y el acceso y retención en la educación, especialmente secundaria. Mejorar la oferta educativa en instituciones de educación postsecundaria, trabajar en la consolidación de nuevas cadenas productivas, capacitar a la población de las subregiones periféricas en el reconocimiento y aprovechamiento de sus potencialidades y crear estrategias conjuntas con empresas de los territorios para promover la contratación de población joven, son algunas de las estrategias que se recomienda tener en cuenta (López, et al., 2013).

De igual forma, se advierte una brecha en pobreza según el sexo del jefe del hogar, 12,1% para mujeres y 9,5% para hombres. Ello invita a los candidatos a priorizar y fortalecer estrategias de política pública con enfoque de género, que redistribuyan y reconozcan el valor del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Al respecto, es importante tener en cuenta a las mujeres adultas mayores, pues suelen ser las de mayor vulnerabilidad en términos de acceso a la seguridad social, educación y pobreza.

Referencias

Muñetón, G., & Maya, M. (2016). Sobre la relación entre el conflicto armado y la pobreza. Apuntes teóricos en Colombia y expresiones espaciales en Antioquia.

Muñetón, G. y Vanegas, J. G. (2014). *Análisis espacial de la pobreza en Antioquia, Colombia*. *Equidad & Desarrollo* (21), 29-47.

Valencia, G. D. (2017). *La desigualdad en Antioquia: la situación de las subregiones*. *Estudios políticos*, (9), 40-51.

Loaiza, O., Muñetón, G., y Vanegas, J. G. (2018). Un análisis exploratorio de la relación entre pobreza multidimensional y conflicto armado: el caso de Antioquia en Colombia. *Revista Desarrollo Y Sociedad*, 1(80), 11-51.

López, M. Mesa R. y Tabares, E. (2013). *Mercado Laboral en las Subregiones del Departamento de Antioquia: Diagnóstico y Recomendaciones de Política para el Oriente y el Urabá*. *Perfil de Coyuntura Económica*, (21), 139-171.

La salud: uno de los principales determinantes de la calidad de vida de los ciudadanos

Autores

Gabriel Mesa

Director del área de Ciencias del Cuidado y de la Vida de EAFIT.

Javier Antonio Gutiérrez

Jefe de Programas Académicos del área de Ciencias del Cuidado y de la Vida de EAFIT.

Águeda Lucía Valencia

Coordinadora académica y administrativa del área de Ciencias del Cuidado y de la Vida de EAFIT.

El goce del grado máximo de salud¹ que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En efecto, estar sano y vivir una vida libre de enfermedades es uno de los aspectos que las

1

- En promedio, alrededor de una tercera parte de las personas en los países de las Américas (29,3%) reportaron no buscar atención en salud cuando lo necesitaron debido a múltiples barreras de acceso.
- Entre los que reportaron no buscar atención, el 17,2% atribuyó su decisión a barreras organizativas (ej. largos tiempos de espera, horas de atención inadecuadas, requisitos administrativos engorrosos).
- Las barreras financieras fueron reportadas en el 15,1% de los casos, la disponibilidad inadecuada de recursos (ej. falta personal de salud, medicamentos e insumos) en el 8,4% de los casos y las barreras geográficas en el 5,4% de los casos.
- Es importante destacar que el 8,0% atribuyó su decisión a barreras de aceptabilidad (ej. barreras lingüísticas, falta de confianza en el personal de salud o maltrato por parte del personal, preferencia por la medicina tradicional e indígena).
- Las personas en el quintil de riqueza más pobre fueron más propensas a experimentar barreras de aceptabilidad, financieras, geográficas y de falta de disponibilidad de recursos.

Fuente: Leveraging household survey data to measure barriers to health services access in the Americas en <https://www.paho.org/es/temas/funciones-esenciales-salud-publica> 2023.



personas más valoran; además, ser saludable posibilita el tener un trabajo, obtener un ingreso adecuado y participar en un amplio rango de actividades sociales (OCDE, 2013).

La agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible contempla la importancia de la salud en el marco de la sostenibilidad, por lo que consigna en el Objetivo 3 lo concerniente a Salud y bienestar. La Organización de Naciones Unidas considera que el progreso ha sido desigual entre países como al interior de ellos, por tanto, los enfoques multisectoriales son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud (PNUD, 2019).

Desde esta mirada amplia, y en coherencia con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la gestión de la salud de las poblaciones por parte de las autoridades debe estar enfocadas a desarrollar las capacidades, en todos los niveles institucionales y junto con la sociedad civil, para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a la salud, actuando sobre los determinantes sociales y de riesgo y que tienen un efecto en la salud de la población.

Para ello se sugiere favorecer la estructuración de un Sistema Local en Salud basado en la Atención Primaria, que es la base de un sistema de salud sólido. A la par, se recomienda priorizar la promoción, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico temprano y la gestión de enfermedades, así como reducir la carga sobre los servicios de atención especializada dado que es más costo-efectivo para un estado y una sociedad. En las acciones concretas que lleven a esto, se propone:



1. Desarrollar estrategias para una adecuada gobernanza y la rectoría del sector, para liderar, conducir, regular, modular la financiación, vigilar el aseguramiento, articular la prestación de los servicios con las ejecuciones de las funciones esenciales de la salud pública (Ley 1122 de 2011, Ley 1438 de 2011). Para esto se debe:

- Mejorar los sistemas de información, alineados con los avances tecnológicos y las ciencias de la información y lo datos, (salas situacionales en salud) que permitan la toma de decisiones para la planificación, ejecución de políticas, programas o proyectos y para anticiparse o predecir.
- Establecer línea de base en indicadores claves de salud, tales como control prenatal, mortalidad materna, bajo peso al nacer, sífilis congénita, desnutrición infantil, enfermedades no transmisibles (hipertensión y diabetes), obesidad, enfermedades infecciosas.
- Establecer metas de indicadores priorizados para conectar con políticas públicas y a todos los actores del sistema (prestadores, aseguradores, gobierno, empresas y familias).
- Estructurar políticas públicas basadas en atención primaria y que involucren a todos los



grupos de interés. Discutirlas ágilmente para una puesta en común.

- Adecuar la planificación y gestión de la salud a las necesidades espaciopoblacionales.
 - Atender e el Plan Decenal de Salud Pública como el principal instrumento para la orientación y el ordenamiento sectorial y su relación con los planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo, para implementar la acción intersectorial por la salud.
 - Fortalecer los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud para el trabajo participativo y colaborativo
 - Fortalecer los mecanismos de participación social en salud establecidos en la ley, para establecer una respuesta participativa, intersectorial y la aplicación de un modelo que intervenga los grupos y familias, desde los equipos básicos de atención.
2. Fortalecer el Financiamiento Sostenible del Sistema. Se entiende por sostenibilidad financiera del sistema el equilibrio entre la suficiencia de los recursos financieros para el cuidado de la salud y su aplicación para responder eficientemente y con calidad a las necesidades en salud de la población, en el marco del seguro, para ello tener en cuenta:

- 
- Desarrollar modelos de valoración exhaustiva desde la económica en salud de las atenciones para las principales situaciones de salud
 - Desarrollo de un plan de incentivos que promueva la salud y no la enfermedad
 - Articulación de actores y capacidades territoriales para definir modelos, redes y rutas y de atención de acuerdo con las necesidades poblacionales y que sean costo -efectivas.
 - Vigilar el Riesgo Financiero de Aseguradores y prestadores
 - Recaudos de las rentas cedidas, regalías, juegos de azar y otros impuestos para apoyar los costos para desarrollar acciones de salud pública y para mecanismos de financiamiento y formas de organización de los servicios de salud diferentes a la competencia regulada
3. Fortalecer el aseguramiento, que es la garantía que brinda el estado para la atención integral en salud de toda la población, ordenando fuentes de financiamiento, agrupando recursos financieros del sistema de salud de forma solidaria, con criterios de equidad, con un sistema de gestión de riesgos financieros y de salud, dirigido y controlado por el Estado. Desde las regiones se puede contribuir:

- Promoviendo políticas y programas que garanticen el acceso equitativo a la atención en todos los sectores y las regiones.
- Liderando la planificación y acción intersectorial para modificar determinantes, condicionantes y riesgos para la salud.

4. Fortalecer la prestación de los servicios: el estado debe organizar la prestación de servicios con criterios de equidad, suficiencia, pertinencia, oportunidad, acceso, continuidad, de manera que se atiendan las necesidades de salud de la población con la mejor calidad, garantizando el derecho fundamental a la salud. Para eso debe:

- Modelar una estructura de prestación de servicios de salud locales o territoriales con enfoque familiar y comunitaria que articule los niveles de atención en salud, para garantizar la atención integral e integrada de la salud de familias y comunidades.
- Coordinar, en articulación con los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, la conformación de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), basadas en un modelo de cooperación, superando el concepto de competencia que ha primado hasta ahora.



- Favorecer un sistema de garantía de calidad de los servicios.
- Mejorar la infraestructura de salud, aumentar el número de profesionales de la salud y asegurarse de que las comunidades más remotas también tengan acceso a servicios de calidad.
- Forjar una política regional clara para el desarrollo del talento humano en salud, en coherencias con las necesidades de región.
- Fortalecer el modelo de atención de emergencias y desastres.

Capítulo 5

Los retos de género

Desde la Universidad EAFIT promovemos y trabajamos por una cultura de respeto y una vida libre de violencia y discriminación en temas de género y diversidad; acogemos y respetamos la diferencia y ofrecemos mecanismos de mediación para superar las diferencias.

Autores**Carolina Lopera**

Profesora de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno.
Jefe de gestión de proyectos de Valor Público EAFIT.

Juan Rafael Peláez

Profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT.

Vida libre de violencias

Las violencias contra las mujeres, basadas en el género, continúan siendo uno de los principales problemas públicos en Medellín y Antioquia. Estos hechos se explican por las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, la subvaloración femenina y las construcciones culturales y sociales que naturalizan y justifican su existencia. Dentro de esta dimensión se hace necesario realizar una intersección frente al ciclo de vida, toda vez que las niñas sufren una violencia desproporcionada.

Las violencias contra las mujeres son diversas, sin embargo, los datos que tenemos actualmente se centran en algunas que, por su sistematicidad, relevancia y afectaciones a bienes jurídicos protegidos, se han venido registrando, entre ellas la violencia intrafamiliar (de acuerdo con el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, el 77,4% de las víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia son mujeres, cuyos principales agresores son la pareja o algún familiar). Esta situación se vive en Antioquia y Medellín. De acuerdo con el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (SISC), para el 2023 se han reportado 2.297

casos, 1.661 han sido sobre mujeres y 344 sobre niños y niñas, entre los 6 y 11 años.

En Medellín, a junio de 2023 tenemos registro de 8 presuntos feminicidios, 2 más que el año pasado.

No obstante, violencias como el acoso sexual callejero, el ciberacoso, entre otros, son fenómenos que, aunque recurrentes, se encuentran con mucho subregistro.

Economía del cuidado: trabajo doméstico y del cuidado no remunerado (TDYCNR). Las mujeres dedican más tiempo en labores del cuidado no remunerado que los hombres

El cuidado sigue siendo uno de los asuntos medulares de las desigualdades de género. La división sexual del trabajo y la existencia de roles y estereotipos de género han perpetuado la comprensión de que las mujeres deben asumir la provisión del cuidado. Las políticas existentes aún ubican el cuidado prioritariamente en la familia y dentro de ella en las mujeres. Hay un correlato entre el cuidado y las mujeres.

Conforme al boletín técnico de 2021 de la cuenta satélite de economía del cuidado, en Colombia las mujeres aportan el 77,7% del total de horas anuales dedicadas al TDYCNR, el restante 22,3% lo realizan los hombres. Esa participación porcentual se aumenta a 79% cuando se trata de mujeres en los estratos 1 y 2, lo que evidencia que el análisis del cuidado debe tener enfoque interseccional, que contemple la cla-

se social y condiciones como la migración, la edad, la pertenencia étnica, entre otros factores.

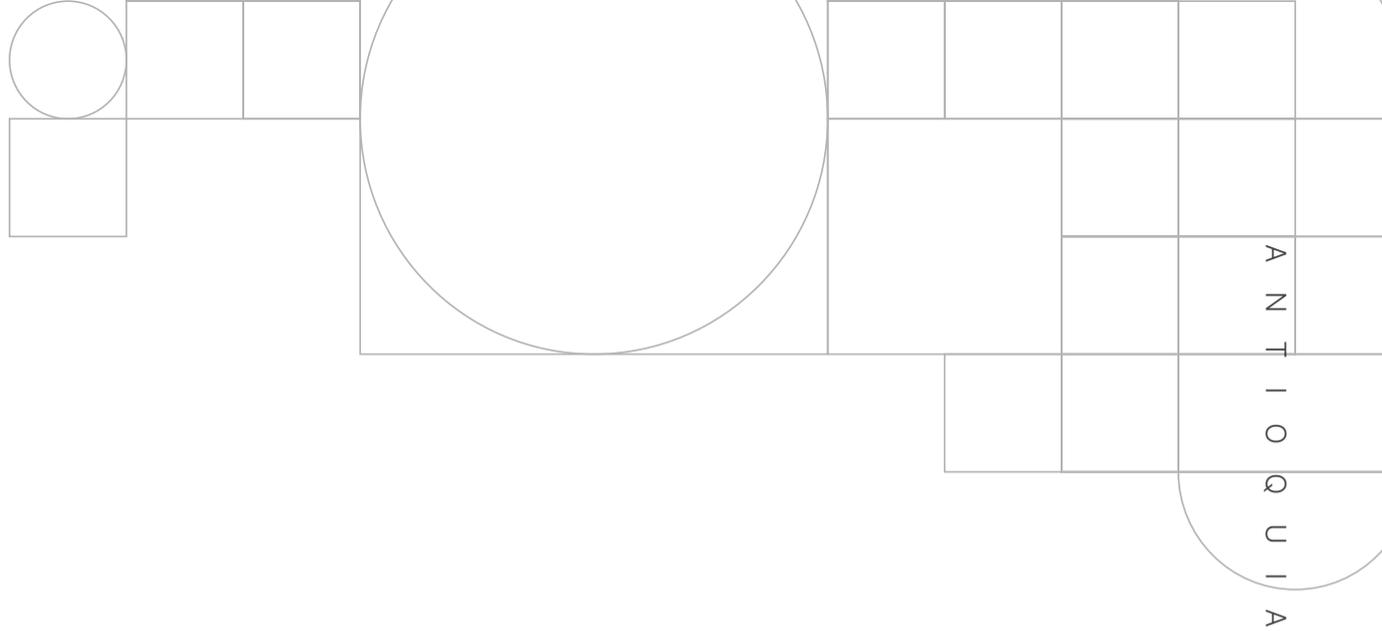
Autonomía económica y pobreza

El acceso a trabajos dignos y bien remunerados, el acceso a la propiedad privada, al emprendimiento, a la banca, a la tecnología, a la tierra y la administración de los propios bienes contribuyen a la autonomía económica y autonomía física de las mujeres. Según la última nota estadística de brechas salariales publicada por el DANE, en 2021 la brecha de ingreso en Colombia fue de 6.3%, con una marcada tendencia a la baja. En 2019, esta brecha era de 12.9%. Hay que revisar con atención estos datos pues, no obstante, la brecha salarial es de 39.3% en personas sin ningún nivel educativo y de 28.4% para las mujeres rurales.

Por su parte, las cifras son preocupantes en las tasas de desempleo que presentan las mujeres en el municipio de Medellín. En 2022, el desempleo femenino en la ciudad fue de dos dígitos, ubicándose en el 12.5% o el equivalente a más de 125 mil mujeres desempleadas, según el último informe de calidad de vida de las mujeres 2022 de Medellín *Cómo Vamos*.

Por otro lado, si bien Medellín y el Área Metropolitana en 2021 fue la ciudad con el menor porcentaje de pobreza monetaria entre las grandes ciudades colombianas (27.6%), también fue la que mayor diferencia registró en el nivel de pobreza entre hombres y mujeres. Así, la pobreza femenina se ubicó en 2021 en 28.7%, 2.4% por encima que la pobreza masculina. La explicación principal es que las mujeres destinan un promedio de 7 horas y 39 minutos al día al TDYCNR y tienen menores oportunidades de entrar al mercado laboral por los estereotipos en la división sexual del trabajo (el hombre proveedor y la mujer cuidadora), entre otros factores que tienen arraigo social y cultural.

Estos niveles de pobreza se refuerzan con otra serie de situaciones adversas, como el acceso a comida y el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria. Según cifras de Medellín Cómo Vamos, en su informe de calidad de vida de las mujeres 2022, el 29.5% de las medellinenses dejaron de comer menos de tres comidas diarias, cifra agravada en la zona norte del municipio en donde el 60% de las mujeres padecen de hambre. Esta es la cifra más alta desde hace 17 años.



Educación

El ámbito educativo es un escenario primordial para la transformación cultural y la eliminación de estereotipos de género imperantes en la cultura. A pesar de los avances en términos de cobertura, acceso y calidad en la educación, así como las diferentes estrategias y programas emprendidos por las universidades, tanto públicas como privadas, para abordar las violencias basadas en género, los resultados de las Pruebas Saber 11^o evidencian problemas en el rendimiento académico de las mujeres.

En el periodo 2016-2022, el rendimiento de los hombres en todas las áreas de conocimiento de las Pruebas Saber 11 es superior. Estas diferencias tienen importantes brechas en el puntaje promedio en las áreas de matemáticas y de inglés, con 3.5% y 2.6% respectivamente. Al analizar el rendimiento de las mujeres según el estrato socioeconómico, se encuentra que la brecha global es de 11.4% para el estrato 1, mientras que el puntaje promedio de las mujeres es 2% mayor que el de los hombres en el estrato 4. Lo anterior explica que la falta de autonomía económica, la pobreza y la falta de oportunidades tiene relación directa con el rendimiento académico de las mujeres.

En cuanto a la educación superior, las tasas de graduación en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (CTIM) sigue siendo predominantemente favorable al sexo masculino. En 2021, la participación de graduación en carreras CTIM fue de 54% para los hombres y 46% para las mujeres, cifra que se mantiene prácticamente igual

desde 2001. En 2021, las áreas con menor proporción de mujeres graduadas fueron las de servicios (13%), seguido de ingeniería, industria y construcción (39%), y, por último, en tecnología de información y comunicaciones (47%). Por su parte, en educación posgradual, hay menos mujeres doctoras con un 33% de mujeres matriculadas al año 2021, lo cual puede estar relacionado con la doble y triple jornada femenina, la crianza de niños y niñas y el trabajo de cuidado, estrechamente vinculado con los roles de género que imperan en la cultura.

Estas cifras indican la necesidad de transformar los estereotipos y roles de género que se reproducen en el sistema educativo desde los primeros años de educación, lo cual es uno de los factores que influye en las áreas vocacionales, tanto de mujeres como de hombres. También es necesario seguir fortaleciendo el papel de las mujeres en la ciencia, visibilizando sus aportes a la investigación y promoviendo acciones al otorgamiento de becas con criterios de género en los programas de estímulos del sector público y privado para el acceso a la educación superior.

Embarazos adolescentes y embarazos infantiles

Una de las problemáticas que es causa y consecuencia de las desigualdades de género es el embarazo infantil y adolescente. Esta problemática es multicausal, se presenta por uniones tempranas y matrimonios serviles, violencia sexual, restricción al acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros asuntos, y a su vez genera perpetuación de círculos de pobreza.

Adicionalmente, el embarazo infantil, esto es, embarazos de niñas menores de 14 años, se constituyen en teoría en un delito, en tanto en Colombia los actos o actividades sexuales con personas menores de 14 años están prohibidas.

En general se observa que las tasas de fecundidad nacional han disminuido. En especial, para Antioquia, las tasas de fecundidad en niñas entre 10 – 14 años (embarazo infantil) han descendido de 3.7 en el 2015 a 2.6 niñas en el 2020. Frente a adolescentes, también se ha observado un decrecimiento pasando de 61.3 adolescentes en 2015 a 48 adolescentes en 2020.

No obstante, Antioquia lidera a nivel nacional el número de nacimientos tanto en niñas como en adolescentes. Para el 2020 se presentaron 656 nacimientos en niñas menores de 14 años que corresponden al 14,6% del total nacional y 12.258 nacimientos en adolescentes que representaron el 11.2% del total nacional. Esta realidad

es mucho más preocupante en los centros poblados y rural disperso. Y es que, si bien existe una reducción de las tasas de fecundidad nacional y departamental, dicha tendencia no se observó en los centros poblados y rural disperso, donde hubo un incremento. Nuevamente Antioquia concentró el mayor porcentaje de nacimientos en niñas y adolescentes de centros poblados y rural disperso en 2020, presentándose el 14,6% de las madres de 10 a 14 años y el 11,2% de las madres de 15 a 19 años. (DANE, 2022, Nota estadística de embarazo).

Esta realidad coincide con los datos disponibles sobre uniones tempranas, que según el DANE se presentan en mayor medida en los centros poblados y rural disperso, en contraste con las cabeceras municipales, donde ha descendido según el promedio nacional.

Estas cifras evidencian que las niñas y adolescentes rurales de Antioquia deben estar en el centro de la atención tratándose de desigualdades de género y que, al ser multicausal, cada una de las posibles causas identificadas deben ser abordadas con enfoque de interseccionalidad. Una de las causas está relacionada al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que aún implica grandes desafíos para las mujeres: muchas mujeres no tienen autonomía para la toma de sus decisiones, como la negativa de tener relaciones sexuales con la pareja, el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a la atención de salud que desea recibir. El ejercicio de estos derechos debe procurarse, no solo en mujeres adultas, sino en niñas y adolescentes, que también sufren las implicaciones culturales de no acceder a los mismos.

Interseccionalidad

Las intersecciones son aquellos cruces o capas que se fusionan entre sí, generando condiciones de vida únicas en las mujeres. Existen múltiples interseccionalidades que van más allá de la orientación sexual y del género, como la raza, nacionalidad, edad, clase social, situación de discapacidad o lugar de residencia. Estas intersecciones generan, muy a menudo, situaciones de desventaja y de exclusión.

Las políticas públicas vienen incorporando el enfoque de interseccionalidad como una manera de reconocer que el conjunto de desigualdades socioeconómicas tiene repercusiones para la diversidad de mujeres. En un informe de la Personería de Medellín, a septiembre de 2022, 582 indígenas Emberá se encontraban en situación de mendicidad en la ciudad, de los cuales 245 eran niños, niñas y adolescentes. De otro lado, según cifras de esta misma entidad, el desplazamiento forzado hacia Medellín aumentó 140% en enero 2023 con respecto al 2022, con un total de 405 personas víctimas, 238 más que en 2022.

Por su parte, y según cifras de la Alcaldía de Medellín, entre enero del 2021 y mayo de 2022 lle-

garon 3905 personas afro e indígenas desplazadas del Chocó. Las vulneraciones a los derechos humanos en otras subregiones de Antioquia y de Colombia hacen de las grandes ciudades un sitio de permanente llegada de miles de familias que buscan oportunidades de empleo y educación.

Por último, hay que generar oportunidades de empleo para las mujeres en condición de discapacidad y fortalecer los diferentes espacios democráticos de participación para el logro de una ciudad y un departamento más plural, diverso e incluyente. Otra importante tendencia a futuro indica que, para 2035, en Medellín el 60% de las personas mayores de 60 años serán mujeres, lo cual requiere de esfuerzos importantes para atender a este grupo etario y reconocer sus necesidades.

Mujeres rurales

Las desigualdades de género tienen unos efectos acentuados en las mujeres rurales. Observar esta interseccionalidad resulta fundamental porque permite realizar una lectura específica de problemáticas sociales como la educación, salud, seguridad, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros asuntos. En Antioquia esta lectura es fundamental dado que, de acuerdo con el DANE (2021, DANE, nota estadística de mujeres rurales Colombia), del total de las mujeres rurales en Colombia, 11.3% se encuentra en el departamento, seguido por Cauca, Nariño y Córdoba. Adicionalmente, un porcentaje muy significativo de las mujeres rurales a nivel nacional (24,5%), se reconocen como parte de un grupo étnico, principalmente indígenas y negras, mulatas o afrodescendientes.

En educación existe una brecha de 6.5% entre las mujeres y niñas urbanas y las mujeres y niñas rurales frente a saber leer y escribir. Con relación a las mujeres que estaban estudiando en el 2020, la brecha entre urbanas y rurales es de 6.1%. Las principales razones esbozadas por las mujeres rurales que no estaban estudiando (entre los 6 y 21 años) son: “encargarse de los oficios del hogar (23,7%), falta de dinero o costos educativos elevados (19,8%), embarazo (9,6%) o porque no le gusta o interesa estudiar (9,6%)” (DANE, 2021).

Otro asunto de las mujeres rurales es el matrimonio infantil, las uniones tempranas y la fecundidad. El embarazo infantil y adolescente es significativamente mayor en las zonas rurales de Colombia.

4 de cada 10 mujeres rurales se encuentra en situación de pobreza multidimensional (Dane, 2021), esto es el 37,3% de las mujeres rurales, en comparación con un 12,6% en las mujeres urbanas. Con relación a la pobreza monetaria, 44.6% de las mujeres urbanas se encontraban en situación de pobreza monetaria.

Con relación al trabajo de las mujeres rurales, se hace diferenciación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Frente al trabajo remunerado, en el ámbito nacional se tiene que la tasa de ocupación de las mujeres rurales fue de 29, 2%, mientras la de los hombres fue de 68,8% y de las mujeres urbanas 40,6%. Con relación al TDYCNR, se observa que la división sexual del trabajo permanece, las mujeres se encargan mayoritariamente del trabajo no remunerado, mientras los hombres realizan trabajo remunerado. El 92,9% de las mujeres rurales de 10 años y más realizaron trabajo no remunerado, aunque dicha cifra no dista mucho de las mujeres rurales, en donde participaron el 90,2% en estas actividades.

Capítulo 6

Ciencia, tecnología e innovación

Con el objetivo de impactar a toda la sociedad, nuestro propósito desde la Universidad EAFIT es aportar, desde la conexión de la ciencia, la tecnología y la innovación, soluciones a los problemas concretos y desafíos que las organizaciones y la humanidad nos demandan.

La concentración de los procesos de ciencia, tecnología e innovación en Antioquia, parten de Medellín hacia las subregiones. Por eso, este análisis departamental es clave para tomar decisiones en Medellín.

Autores**Camilo García**

Director de Innovación, Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de EAFIT.

Germán Tabares

Coordinador de inteligencia CTI, Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación de EAFIT.

Ciencia

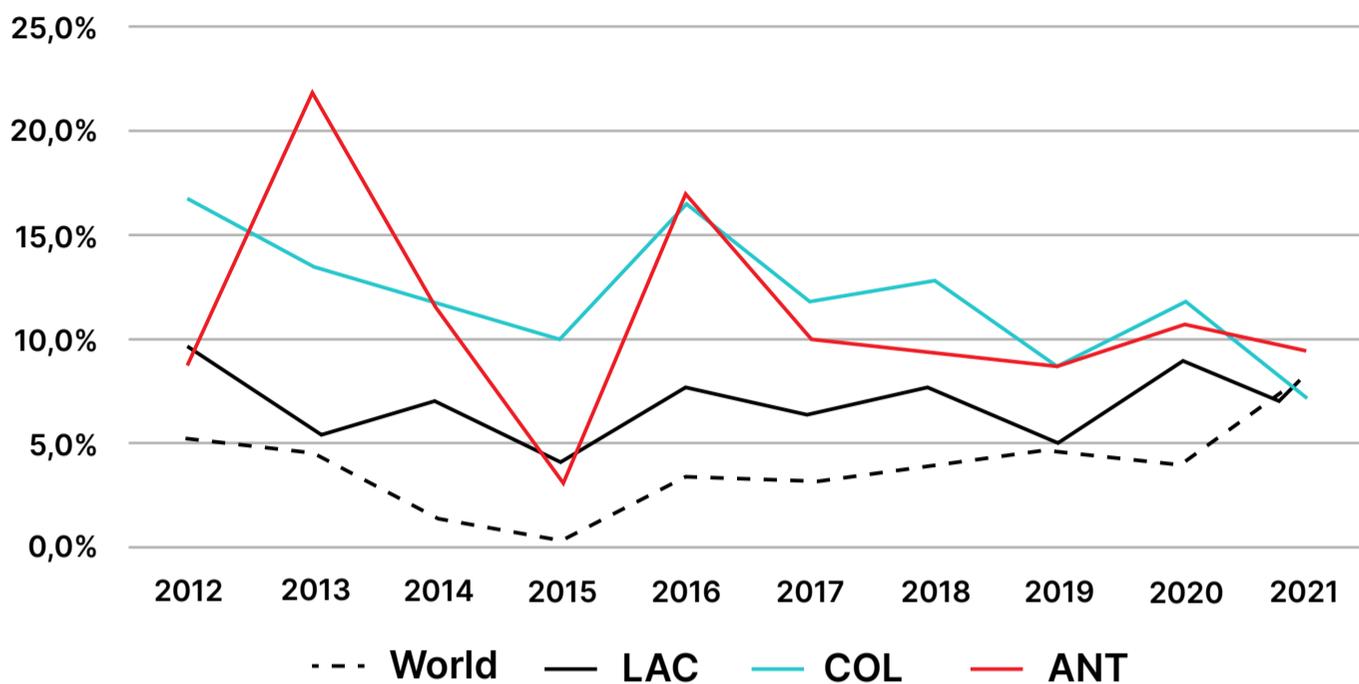
Antioquia pierde participación en investigación en el país

El ritmo de crecimiento de las publicaciones científicas en Antioquia ha sido inferior al del país. El número de investigadores, y las becas para formarlos, muestran un rezago considerable.

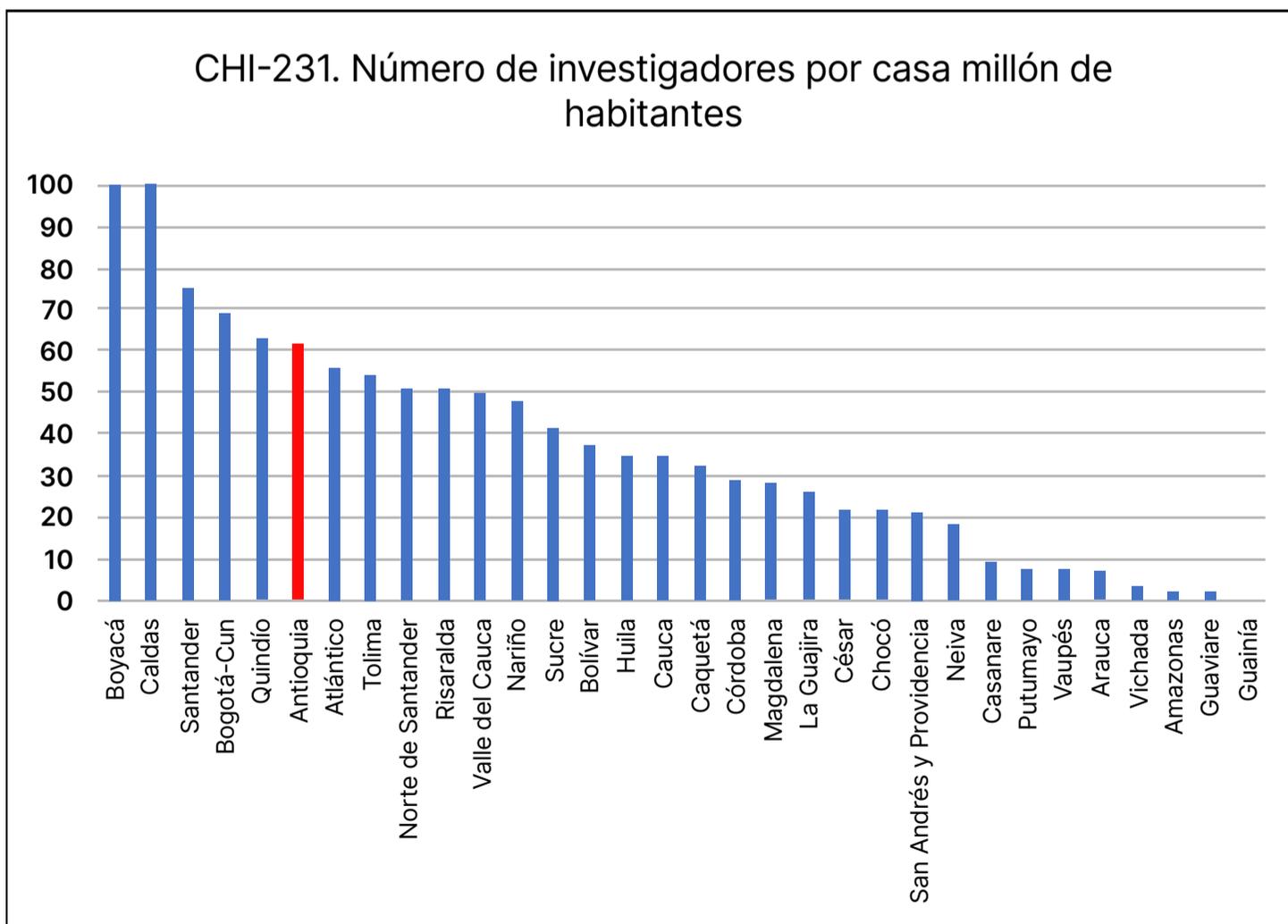
La generación de nuevo conocimiento es un componente fundamental de la construcción de una sociedad del conocimiento, en la que el entendimiento de la naturaleza sirva para enfrentar sus desafíos y contribuir al bienestar colectivo. Tradicionalmente, dicho conocimiento se materializa en publicaciones indexadas en revistas científicas. En este aspecto, Antioquia ha mostrado un ritmo de crecimiento inferior de lo observado en el país en su conjunto durante la última década, con la consiguiente pérdida de participación.

Ante este hecho, cabe resaltar que el departamento cuenta con un menor número de investigadores por millón de habitantes que otras regiones del centro del país como Boyacá, Santander, Bogotá-Cundinamarca y el eje cafetero. Adicionalmente a esto, la tasa de becas en posgrados de investigación (maestrías y doctorados) es todavía más baja. Según la información provista por el índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), el departamento ocupa el decimotercer lugar en este último aspecto, lejos de otras regiones del centro del país como Bogotá-Cundinamarca y el Eje Cafetero.

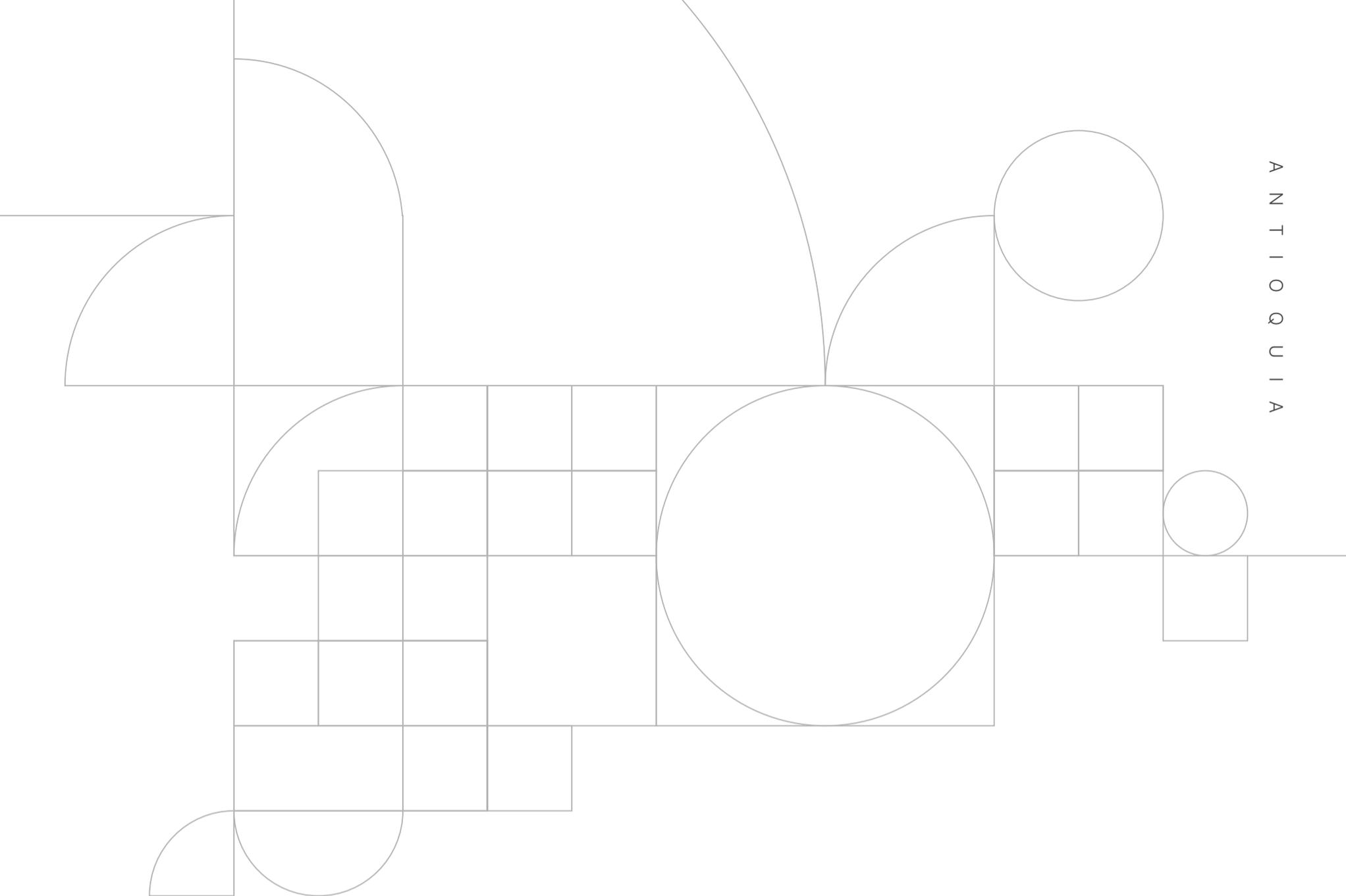
Variación de las Publicaciones



Fuente a Elaboración propia con base a información de SCOPUS.



Fuente b Elaboración propia con base en el IDIC 2021.



En conclusión, Antioquia enfrenta el enorme reto de revertir la tendencia actual de pérdida de participación en la generación de nuevo conocimiento y así asumir un papel protagónico en la vida científica colombiana. Esto solo será posible superando su rezago en materia de formación de talento humano orientado a esta actividad.

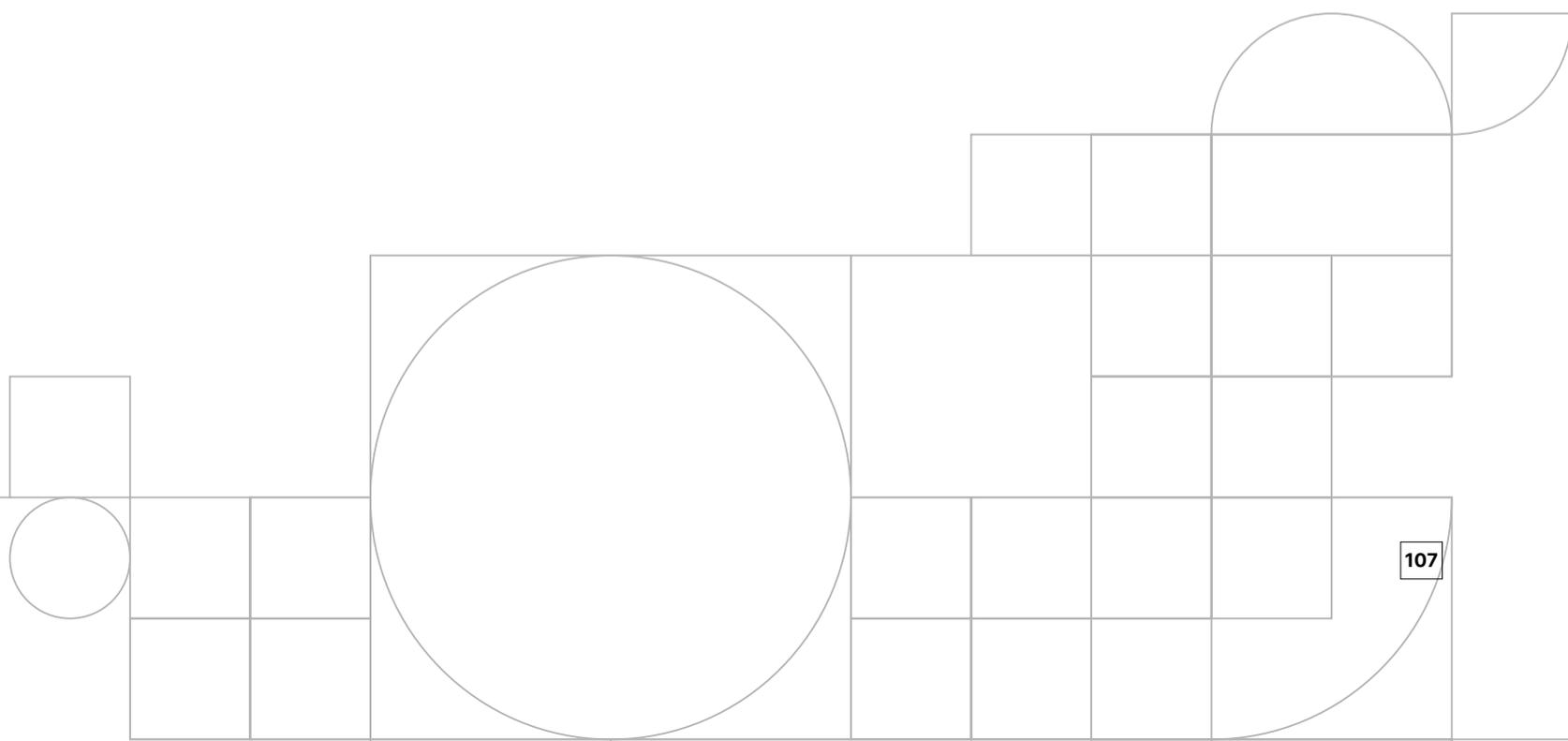
Desde EAFIT, proponemos poner en marcha políticas públicas orientadas a la formación de capital humano al servicio de la investigación científica, con un importante enfoque territorial. De tal forma que, aprovechando la presencia de importantes centros de educación superior en el Valle de Aburrá, se formen científicos en las subregiones, cuya labor sirva de base para el desarrollo de las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) en sus territorios.

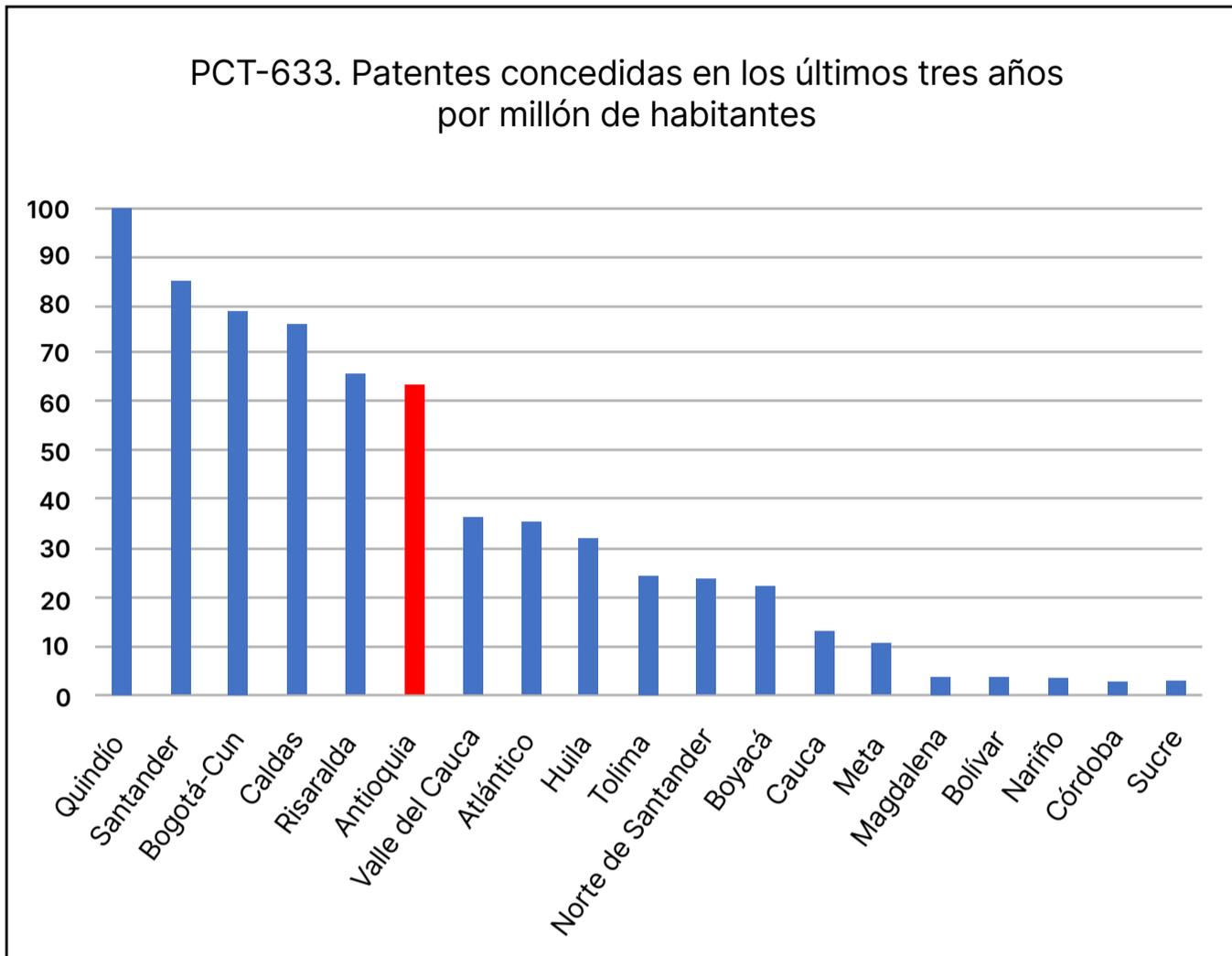
Tecnología

Antioquia se rezaga ante sus competidoras en materia de patentamiento

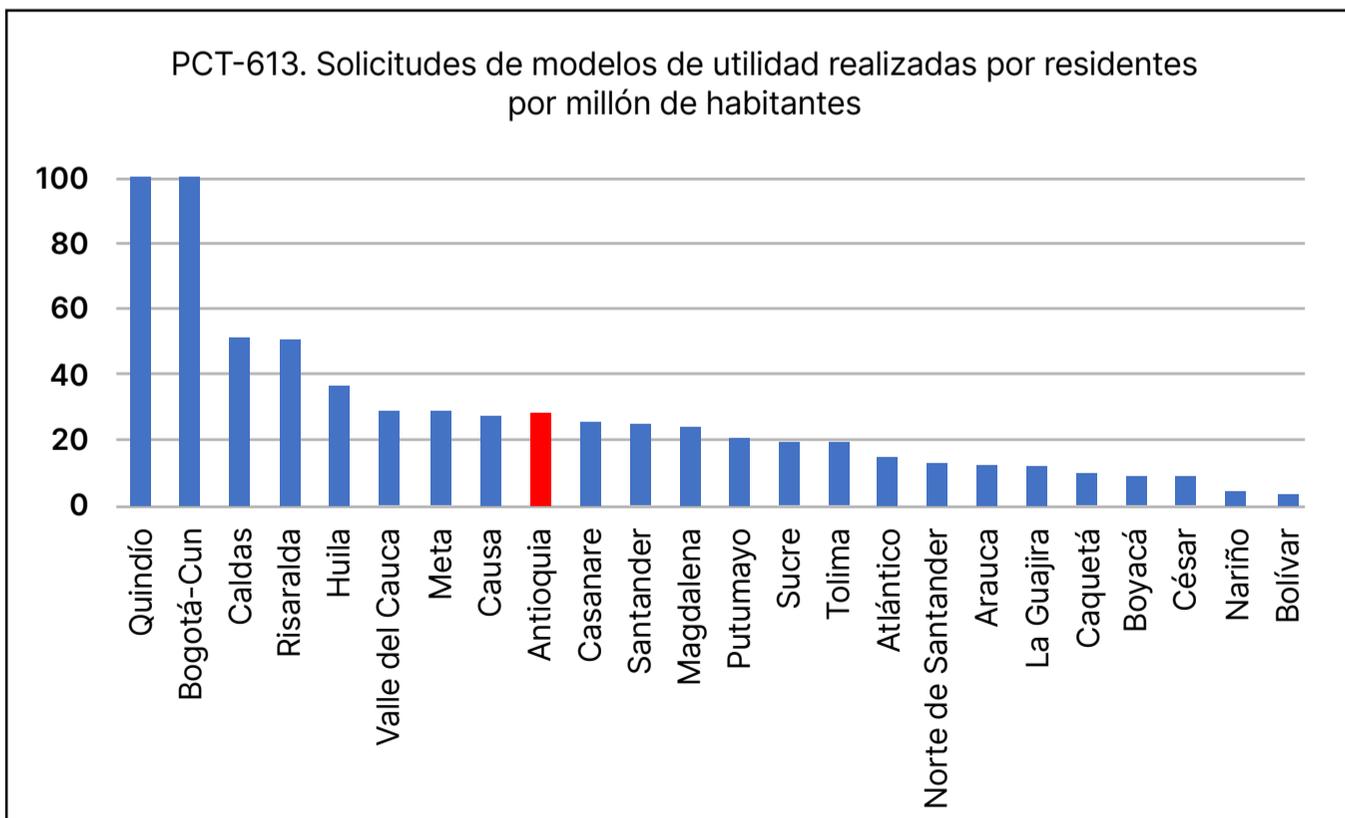
Bogotá, Santander y el Eje Cafetero aventajan al departamento en las tasas patentamiento. El rezago es especialmente preocupante en materia de modelos de utilidad.

El desarrollo de conocimiento con potenciales aplicaciones de mercado es un componente crítico para la construcción de una economía basada en el conocimiento. Este tipo de avances son protegidos bajo diferentes figuras legales, entre las que se destaca el patentamiento. Al respecto, la tasa de patentes solicitadas y concedidas en proporción a la población en Antioquia muestra un rezago importante frente a otras regiones de importante desarrollo en el centro del país. Esta situación es todavía más crítica cuando se abordan otras figuras de protección intelectual, como los modelos de utilidad.





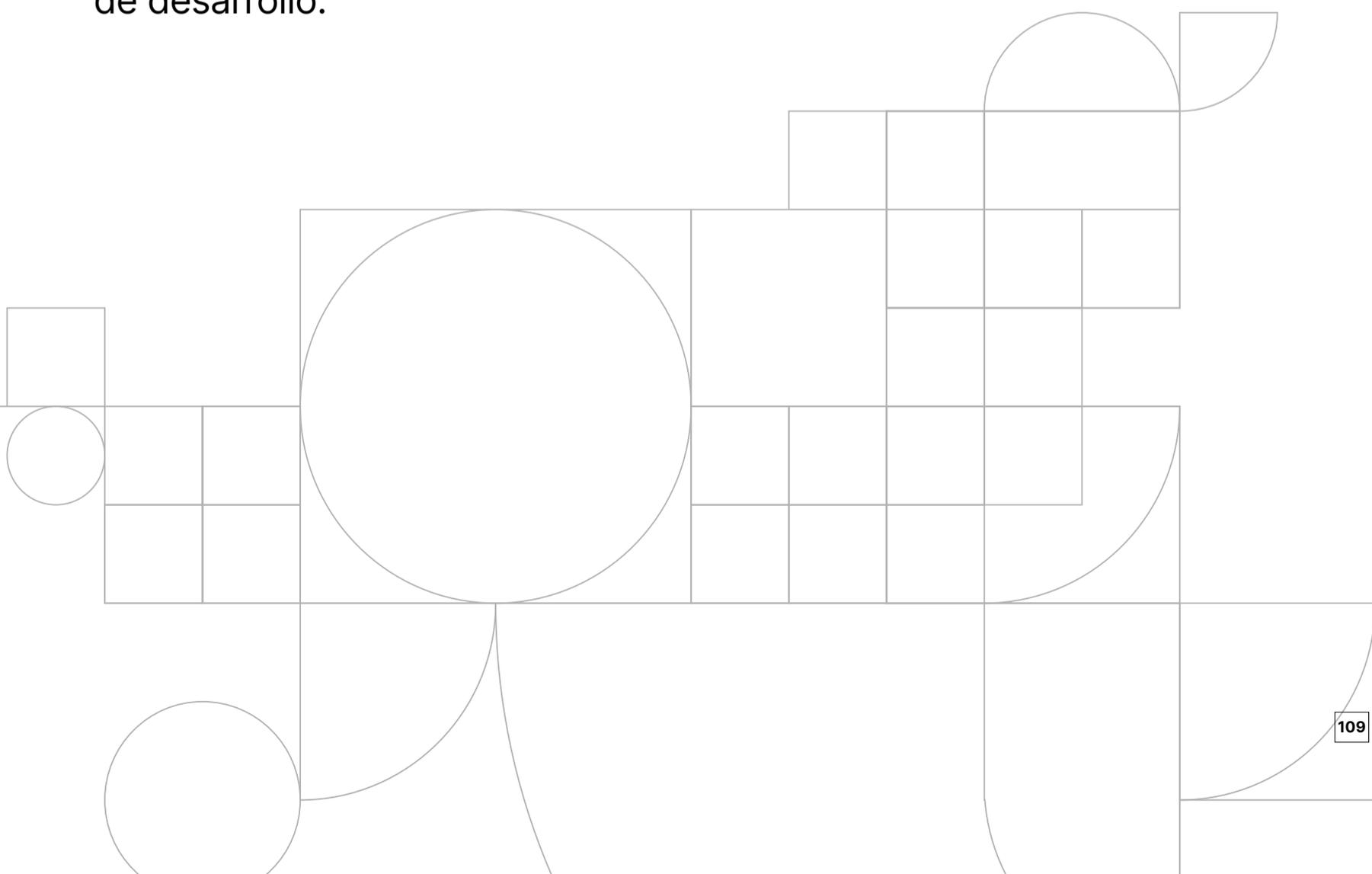
Fuente c Elaboración propia con base en el IDIC 2021



Fuente d Elaboración propia con base en el IDIC 2021

En conclusión, el departamento aún muestra tasas considerablemente bajas en materia de patentamiento y otras formas de protección del conocimiento tecnológico. Estos bajos resultados pueden deberse al bajo desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las subregiones de Antioquia diferentes al Valle de Aburrá.

Desde EAFIT proponemos incorporar el alistamiento tecnológico entre las actividades a estimular por los diferentes actores del sistema de ciencia tecnología e innovación del Departamento, de tal forma que se incrementen los recursos destinados para este fin y se estimule el intercambio de experiencias y aprendizajes sobre estas actividades. A este respecto, podría crearse un fondo especial orientado hacia el alistamiento tecnológico y comercial de tecnologías desarrolladas a través de procesos de investigación y desarrollo universitarios, para financiar el desarrollo final y puesta a punto de tecnologías con alto potencial de mercado, alineadas con las prioridades definidas en los planes de desarrollo.

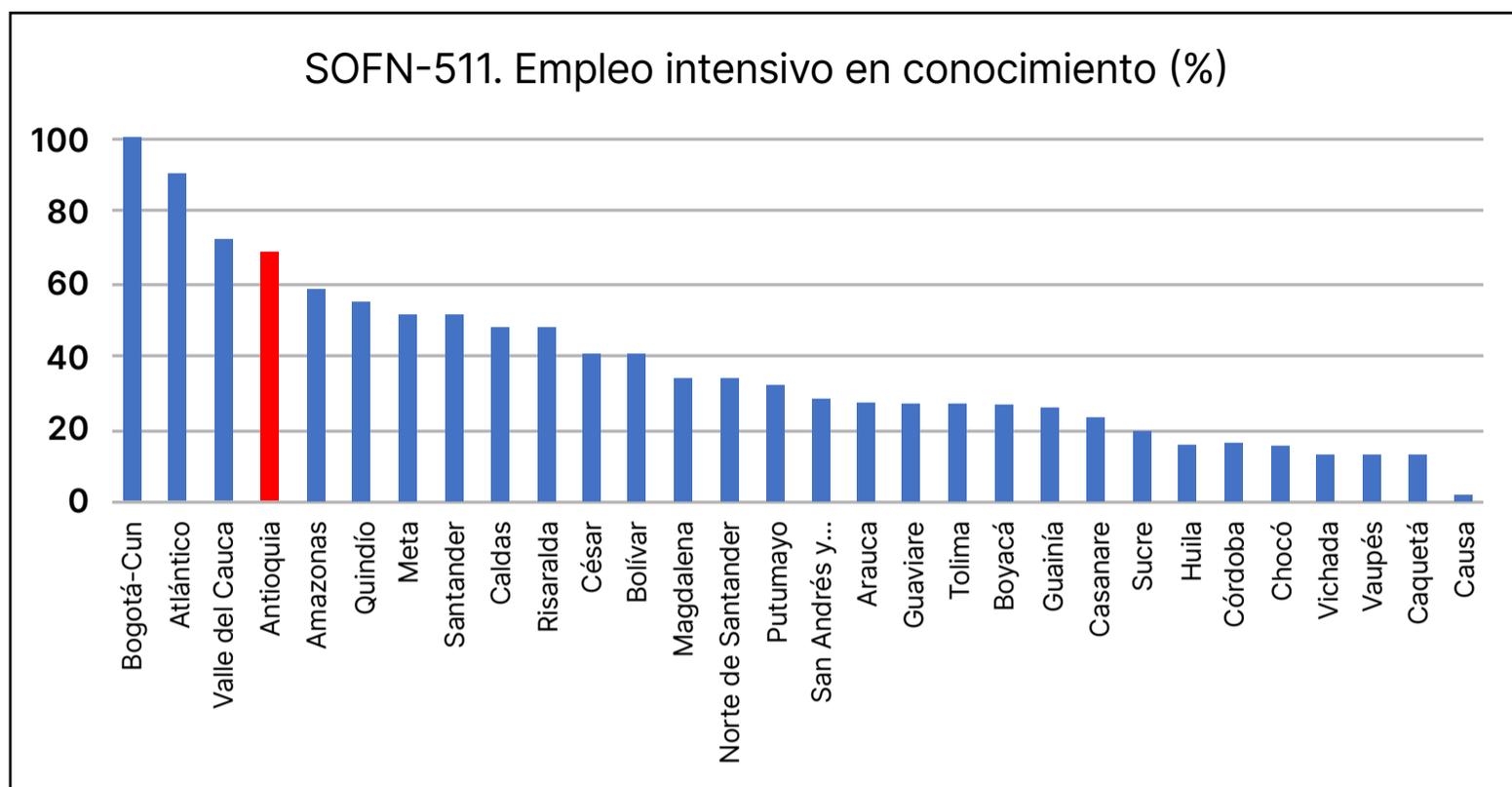


Innovación

Empleos intensivos en conocimiento: una materia pendiente para Antioquia

Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca superan al departamento en la participación de empleos de este tipo. La brecha es particularmente grande ante la capital.

La participación de empleos intensivos en conocimiento en el total de los puestos de trabajo da cuenta del avance de una sociedad en la incorporación de la ciencia y la tecnología en sus procesos productivos y su tránsito a una economía basada en el conocimiento. En este aspecto, Antioquia muestra un rezago importante ante Bogotá-Cundinamarca y otras dos áreas de importante desarrollo industrial, como Atlántico y el Valle del Cauca. Una de las posibles explicaciones de este fenómeno sean las brechas subregionales al interior de Antioquia, donde amplios territorios aun cuentan con economías basadas en actividades tradicionales, intensivas en la explotación de recursos naturales.



Fuente e Elaboración propia con base en el IDIC 2021

Por otra parte, si bien en general Antioquia se ubica la segunda posición en el Índice Departamental de Innovación y Competitividad (2021), se encuentra rezagado en dimensiones clave para el impulso de la innovación, como la producción de conocimiento y tecnología y la producción creativa. Así mismo, el departamento experimentó algunos retrocesos, en comparación con el año 2020, en dimensiones como: infraestructura, capital humano e investigación, sofisticación de mercados, y sofisticación de negocios.

En conclusión, el departamento afronta el enorme reto de generar puestos de trabajo intensivos en conocimiento, especialmente en subregiones diferentes al Valle de Aburrá. Adicionalmente, el departamento debe fortalecer un ecosistema apto para el impulso de actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación, que contribuyan a la sofisticación

de los negocios, los mercados, y al impulso de emprendimientos innovadores. Para avanzar en este proceso, el concurso del sector productivo y la academia resulta fundamental en la medida que su coordinación permita cerrar las brechas entre la formación de personal cualificado y las necesidades concretas del aparato productivo en los diferentes territorios del departamento.

Desde EAFIT, proponemos fortalecer la articulación entre los diferentes actores sociales del departamento, para estimular la formación e inserción laboral del personal científico en organizaciones de diferente índole: desde empresas consolidadas hasta emprendimientos, pasando por el sector público. Adicionalmente, es imperativo generar mecanismos de articulación entre el sector público, la academia y la industria que permitan la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo y potencien las capacidades departamentales para atender a grandes retos sociales, económicos y ambientales. También es importante fortalecer el entorno para el impulso de emprendimientos innovadores, a través de mecanismos como los fondos concursables, las asociaciones público-privadas y la compra pública de innovación, por mencionar algunos.